

“DEL GRUPO ARMADO A UNA COMUNIDAD URBANA: INTEGRACIÓN, ACCIÓN
Y PARTICIPACIÓN EN LA CIUDADELA SANTA ROSA”

Monografía de grado para optar por título de
Profesional en Sociología
Programa de Sociología
Escuela de Ciencias Humanas
Director de Monografía: Nicolás Boris Esguerra Pardo

Presentado por
Ivón Liliana Forero Gómez
Rafael Francisco De la Ossa Archila

Universidad Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario
Segundo Semestre de 2011

AGRADECIMIENTOS

El trabajo que presentamos a continuación ha sido una de las experiencias más gratificantes y enriquecedoras de nuestras vidas. Por eso, queremos dedicar y agradecer a todas las personas que nos acompañaron, que opinaron, que ayudaron y que incidieron directa e indirectamente en la realización de nuestra monografía.

Empezaremos por las personas más importantes de nuestras vidas, y quienes seguramente nos seguirán apoyando en esta nueva etapa que comienza para nosotros, nuestras familias. Queremos expresarles unas palabras de agradecimiento y de mucho amor por su incondicional paciencia y apoyo de todo tipo. Seguramente sin el soporte de nuestros padres y hermanos no hubiésemos podido llegar a este punto, ni cumplir nuestro sueño de ser sociólogos.

También están aquí pensados y representados tantos profesores que nos animaron a la investigación y que a lo largo de tantos años siempre estuvieron dispuestos a resolver nuestras dudas o a generarnos más de las que ya teníamos.

Agradecemos infinitamente a todas las personas de la ciudadela Santa Rosa que quisieron contarnos sus experiencias y dejarnos entrar a sus vidas. Especialmente a dos líderes, de distintas visiones, que nos llevaron a recorrer dos caminos distintos de percepciones sobre su realidad, lo que nos permitió explorar más a fondo el caso que pretendíamos conocer y comprender. También valoramos la disposición de algunos de los representantes de la Alta Consejería para la Reintegración y del Programa de Atención a Población Desmovilizada de Bogotá en colaborar con el proyecto.

Por último, pero no menos importante, queremos agradecer a tres personas que han sido imprescindibles para la realización de este trabajo. A Nicolás Boris Esguerra, por ser amigo, director y guía en este proceso, por estar siempre dispuesto a ayudarnos y alentarnos cuando lo necesitamos. A Catherine Aragón y Andrés Cuervo por su paciencia, por su colaboración, por las lecturas críticas, por las palabras de aliento, por la compañía durante el trabajo de campo y, sobre todo, por soportarnos y lidiarnos amorosamente cuando la ansiedad nos invadía.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	4
CAPÍTULO PRIMERO	
La violencia en Colombia desde la segunda mitad del siglo XX	14
La Violencia bipartidista (1946 – 1964)	16
Conflicto Armado: expansión guerrillera y paramilitarismo	19
Procesos de Paz en Colombia	29
CAPÍTULO SEGUNDO	
Procesos de socialización en los grupos armados	44
Entrenamientos y principios replicados en el tiempo	47
Vida cotidiana: rutinas y prácticas formadoras	51
Jerarquías, sanciones y poder	53
Percepciones sobre los “otros”	58
CAPÍTULO TERCERO	
Transición a la vida civil	65
Políticas de reinserción-reintegración	65
Llegada a la ciudad	71
Llegada al barrio	78
Inicios de comunidad	83
CAPÍTULO CUARTO	
La construcción y el devenir de la comunidad	89
Pautas y Acuerdos	90
Prácticas de integración	93
Lazos y relaciones sociales	95
Relación entre la comunidad y sociedad	105
CAPÍTULO QUINTO	
Acción colectiva e individual: procesos de organización y participación	110
Acción y cambio en la comunidad de Santa Rosa	110
Relaciones de dominancia, poder y organización	117
Acción colectiva y organización	121
Ciudadanía y participación política	125
CAPÍTULO SEXTO	
Cambios y continuidades: la integración como eje de análisis	130
“Liberación” y “disponibilidad”: Del monte a la ciudad	132
Mobilización y participación: Comunidad y ciudadanía	138
Organización política y participación ciudadana en los procesos de integración a la vida civil	142
Diálogos entre integración global e integración local	145
CONCLUSIONES	151
BIBLIOGRAFÍA	158
ANEXOS	164

INTRODUCCIÓN

En medio del reciente conflicto armado colombiano varios combatientes se han desmovilizado de los grupos armados ilegales, ya sea por deserción voluntaria o como producto de negociaciones con el gobierno. Para atender estas desmovilizaciones el Estado colombiano ha creado distintos mecanismos y programas que se han transformado notoriamente según las políticas del gobierno de turno.

Especialmente en el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002 – 2006) se hicieron negociaciones con los grupos paramilitares (Diciembre de 2002 – Julio de 2003), lo que llevo al desarme y desmovilización de más de treinta mil hombres y mujeres que conformaban estos grupos. Para dar respuesta a este proceso en cuanto a la reintegración a la vida civil de estas personas fueron creados unos programas de asistencia más complejos y con mayor cobertura. Es importante anotar, que continuamente miembros de otros grupos armados se desmovilizaban (y se siguen desmovilizando) individualmente, como desertores, y también accedían a los beneficios establecidos.

Estos excombatientes deben asumir un proceso de reintegración social y económica, que se da a través de procesos de resocialización, los cuales estuvieron a cargo desde el 2003 hasta mediados del 2006 por el Ministerio del Interior y de Justicia, bajo el Programa de Reincorporación a la Vida Civil (PRVC). En septiembre del 2006 se crea la Alta Consejería para la Reintegración (ACR), la cual, hasta hoy, se hace cargo de los procesos que venía adelantando el PRVC con varias reformas. Ésta les ofrece ayudas a los excombatientes a través de las cuales busca que los desmovilizados puedan adoptar las formas de socialización de la vida civil. Adicionalmente se crearon dos programas de apoyo: Paz y Reconciliación en la ciudad de Medellín y el Programa de Atención al Proceso Desmovilización y Reintegración en Bogotá (PAPDRB); estos están a cargo de los gobiernos de las ciudades, los cuales desde su plan de gobierno implementan medidas de apoyo a ciertos procesos, incluido el de reintegración de excombatientes.

En este proceso de reintegración muchos de los desmovilizados afrontan un cambio radical en sus formas de vida ya que se enfrentan a un proceso de resocialización donde cambian sus percepciones sobre la sociedad en la que están inmersos y la manera de relacionarse dentro de ésta. Específicamente, aquellos que deben migrar a las ciudades para

recomenzar una vida, deben asumir dinámicas culturales parcialmente distintas, relaciones y estructuras sociales diferentes, donde la socialización interiorizada en los grupos armados y la definición de realidad adquirida en estos, compite con la otra realidad, la realidad de “lo urbano” y la legalidad. (Cárdenas, 2005: 254-256)

Se trata en consecuencia, del acceso a una nueva realidad y a la definición de nuevas relaciones con otras personas e instituciones. El acceso a esta nueva realidad puede entenderse como un continuum en donde el punto de partida son las relaciones sociales iniciales en la vida rural y militar y el punto de llegada es la convivencia legal y cívica en un escenario urbano. Entre estos dos puntos dicotómicos la vida cotidiana de los recién llegados está en tensión y presenta múltiples matices según las circunstancias particulares de cada una de las personas.

Bogotá ha recibido gran número de excombatientes en su mayoría desertores que han escapado de los grupos armados y por lo tanto buscan “refundirse” dentro de la ciudad, la cual hace posible, bajo sus formas y realidades, la “invisibilización” de los individuos. Aunque muchos de ellos viven aislados de una vida comunitaria activa para evitar su identificación dados los riesgos que esto conlleva (por el hecho de ser desertores y posible blanco militar de los grupos armados a los que pertenecieron o de sus antiguos enemigos), también se ha presentado el caso contrario, bajo el mismo contexto urbano, en los cuales los desmovilizados de varios grupos armados viven junto a otras poblaciones vulnerables y ciudadanos urbanos. Así, en estos lugares los excombatientes son reconocidos y participan activamente de la vida comunitaria, generando de esta forma lazos de convivencia y cierta liberación de la tensión producida por el enfrentamiento a una nueva realidad.

Este es el caso de la ciudadela Santa Rosa de la localidad de San Cristóbal en el sur de Bogotá, capital de Colombia, el cual se ha identificado como uno de los casos de reintegración “exitosos” en la ciudad (CNRR, 2008; Ángel, 2009) y donde se asentaron en un principio, en el año 2005, aproximadamente 100 familias de excombatientes. La particularidad de este lugar es que ha logrado reunir allí población vulnerable, desplazada y desmovilizada, y se han generado lazos de convivencia y aceptación, superando así, en gran medida, fenómenos recurrentes dentro de la ciudad como la marginalización y estigma hacia los excombatientes. Éstos a su vez han generado formas de asociación y algunos de ellos se han convertido en líderes comunitarios, desafiando la situación común de

“invisibilización” y desarraigo, generando relaciones sociales particulares que les permiten construir y aprehender su nueva realidad.

Estos fenómenos particulares para el proceso de reintegración en Bogotá son los que nos han llevado a cuestionarnos sobre el proceso adelantado en esta comunidad y sobre la construcción y establecimiento de tales dinámicas propias ya mencionadas. Así, la pregunta que intenta responder esta investigación es: ¿Cuáles son los mecanismos de (re)socialización adoptados por los desmovilizados que configuran una noción de realidad en la transición a la vida civil y la construcción de dinámicas sociales de integración dentro de la comunidad de la ciudadela Santa Rosa?

Los procesos de socialización son parte vital de la vida social ya que a través de éstos el individuo puede interactuar con su entorno y construir una noción de realidad. Según Berger y Luckmann, en *La construcción social de la realidad* (2001), la socialización es un proceso ontogénico donde se le da al individuo una inducción en el mundo objetivo de la sociedad o en un sector de ella. La socialización secundaria es en la que se inicia al sujeto en otros aspectos de la vida social de menor carácter subjetivo y en la que se presupone una formación previa del sujeto y de su identidad. (Berger y Luckmann, 2001: 165-167)

La socialización y construcción de realidad tanto objetiva como subjetiva se da como producto de una constante dialéctica. Así, a través de la institucionalización (tipificación recíproca de acciones habitualizadas por tipos de actores) y la legitimación (modos de explicar y justificar el mundo institucional) se objetiviza una realidad conformada por una serie de hábitos y de actores tipificados. (Berger y Luckmann, 2001: 165-170)

Como dice el antropólogo Ralph Linton “la totalidad de los hábitos organizados del individuo constituyen el conjunto de su personalidad, a la que aquélla da forma, estructura y continuidad. En efecto puede decirse que la personalidad está constituida por un núcleo de hábitos organizados que es relativamente persistente y que se halla circundado por una zona fluida de respuestas de conducta en franco proceso de reducción a hábitos”(Linton, 1983: 103). Así el proceso de socialización, como se señaló anteriormente, es el proceso de adquisición de hábitos socialmente permitido.

También aparece el proceso de resocialización en el cual “el individuo sabe algo del rol en cuestión, pero lo que sabe es inconveniente” (Orville, 1977: 25, 26). Este proceso es aquel por el cual se atribuyen nuevamente acentos de realidad y se reproduce la identificación con los otros significantes, a raíz de la desintegración de la anterior estructura nómica de la realidad subjetiva. Para esto es necesaria la existencia de una base social o estructura plausible donde los otros significantes sirvan de guías para aquellos que entran en el nuevo mundo (Berger y Luckmann, 2001: 195-202).

Los excombatientes que han asumido este proceso de reintegración a la vida civil y de integración a una vida comunitaria, han asumido procesos de socialización en el pasado y de resocialización desde su desmovilización, los cuales tocan elementos fundamentales de su antigua socialización secundaria, pero también pueden tocar contenidos de su socialización primaria. Así, en este estudio se utilizará el concepto de reintegración para referirnos a los procesos adelantados por los programas gubernamentales (ACR y programa de asistencia de Bogotá) con la población desmovilizada. El concepto de socialización hará referencia a la construcción y establecimiento de realidad dentro de los grupos armados y el concepto de resocialización hará referencia a la construcción y establecimiento de una realidad dentro de la vida civil en un escenario urbano y más específicamente en la comunidad.

Durante la investigación y la elaboración de este documento, se mantuvo como guía la idea de una transición y de un continuum que da cuenta de transformaciones y permanencias en las vidas de los desmovilizados y de los residentes de la ciudadela. Por tal razón se pretende explicar los relatos de los desmovilizados y de otros actores que intervienen, a partir de las teorías sociológicas y antropológicas que permiten abordar desde distintas perspectivas el problema de la socialización.

Es relevante tener en cuenta que una vez se pasa a la desmovilización de varios miembros de los grupos armados y al proceso de reintegración, esto no implica directamente una solución al conflicto social existente. Una vez los desmovilizados llegan a la ciudad, y como en el caso de la Ciudadela Santa Rosa, se siguen presentando fenómenos de pobreza, marginalidad y descontento, lo que evidencia la persistencia de un conflicto social implícito y afianzado, y que su prolongación y extensión reside, como afirma Dahrendorf (1974), en la distribución de la autoridad, en una oposición estructural entre

posiciones según su participación o exclusión del poder legítimo. Es por esta razón que aún en la vida civil, se han generado mecanismos de organización con intereses manifiestos que velan por ciertas necesidades colectivas y que suponen unas condiciones técnicas, políticas y sociales que permiten su existencia. (Dahrendorf, 1974: 211)

También es importante tener en cuenta el contexto urbano en el que tiene lugar este caso y cuáles son las condiciones y formas de vida que priman en las ciudades latinoamericanas, ya que considerando tales condiciones generales de desarrollo urbano y de dinámicas sociales de integración que se dan en éstas, podemos ubicar y analizar de manera más ordenada todas las dinámicas que tienen lugar en la ciudadela Santa Rosa.

La modernización adelantada en este contexto tiene sus particularidades, dado las condiciones históricas en las que surgió. La industrialización postergada, la existencia de tecnologías, la migración y rápida urbanización, el desfase entre oferta y demanda laboral en las ciudades latinoamericanas determinaron una situación de marginalización y desintegración que se pueden evidenciar. (Germani, 1976 45-55). La secularización propia de la modernización y la vida urbana también se dio en los países latinoamericanos pero con aspectos sociales y económicos desfavorables para los mismos. Además aspectos como el conflicto armado, la pobreza de zonas rurales, la concentración de la tierra, entre otros hacen que las ciudades tengan un crecimiento acelerado por las migraciones. Hoy es innegable que Bogotá tiene graves problemas de marginalización tanto espacial como social.

Aunque las ciudades latinoamericanas tienen sus particularidades dadas las condiciones de modernización y urbanización que tuvieron, algunos aspectos teóricos que hablan de la vida urbana y de la secularización, se puede aplicar cuidadosamente al acelerado cambio de estas. El proceso de secularización va de la mano con la transición de la vida rural (comunidad)/ vida urbana (sociedad) y trae consigo la individuación, un tipo de acción más electiva que prescriptiva, más diferenciación y especialización de las instituciones, así como la institucionalización del cambio. (Germani, 1976: 9-58)

En una ciudad como Bogotá, las formas de vida urbanas también se ven impregnadas de estos elementos propios de la sociedad moderna, por tal razón para aquellos migrantes que vienen de zonas rurales y de una comunidad específica deben enfrentarse al desligamiento de sus tradiciones y de sus relaciones para dar paso a la

adopción de nuevos modos de vida y comportamiento propios de lo urbano, para poder moverse dentro de este nuevo espacio y esta nueva realidad. Pero tal transición no se da siempre así de un modo estricto, hay varios niveles de integración, varios elementos tradicionales pueden persistir y una persona puede adaptarse en ciertos espacios pero no participar en otros (Germani, 1976 58-67). Por tal razón es importante considerar esa transición como un proceso complejo que debe ser mirado desde distintos aspectos. Así mismo, el pasado que el desmovilizado ha dejado, no desaparece sino que interviene de una manera u otra en las formas de afrontar la nueva realidad.

En este sentido, este texto se elaborará en términos de una transición compleja, de un continuum, que ha contemplado varios aspectos y varios espacios sociales que hay que considerar para poder dar cuenta de procesos de resocialización e integración social. Así se tendrán en cuenta los procesos de socialización en los grupos armados, la transición a la vida en la ciudad, los programas que existen e intervienen en su proceso de reintegración y las dinámicas que tienen lugar en la comunidad de la ciudadela Santa Rosa. El aspecto de la organización y la acción tanto colectiva como individual, es elemento clave dentro de la investigación, ya que a través de éstas se han logrado visibilizar y crear ciertas condiciones particulares en el proceso de resocialización de estos excombatientes y en la vida comunitaria. Por tal razón se hará también un análisis de los procesos organizativos dentro de la comunidad, sus relaciones con actores externos e internos y aquellos factores que los permiten o limitan. Además se indagará por las formas de integración y de convivencia dentro del barrio, para dar cuenta de una construcción de dinámicas sociales, roles y códigos, que ocupan un lugar primordial dentro de un proceso de resocialización en tanto establece una estructura que soporta y apoya a cada individuo en la adopción y configuración de nuevas nociones de realidad.

Durante el trabajo de igual manera se utilizarán aportes teóricos sobre las formas de vida urbana, aspecto de vital importancia para poder contextualizar el caso dentro de una realidad más amplia. Así, se intentará en este trabajo hacer una descripción de ese proceso de resocialización y configuración de una realidad particular, mostrando las dinámicas internas, pero también relacionándolo con su entorno más próximo el cual es la capital del país, una zona urbana con grandes dificultades de integración.

Los estudios cualitativos con los desmovilizados y sus procesos de reintegración en el caso bogotano, se han centrado predominantemente en las críticas al programa gubernamental, así como las dificultades que encarnan el entorno urbano y su sociedad a la reintegración de esta población (Rodríguez, 2008; Varela , 2008; Cárdenas, 2005). Esto debido a que los estudios se han realizado o bien en los hogares, que aún están bajo el control de los programas, o tienen relaciones muy cercanas con estos referentes institucionales.

Por tal razón, es relevante mirar de otro lado las formas alternativas generadas por los desmovilizados en sus comunidades, especialmente en un entorno urbano, y como se logran superar las dificultades asociadas al rechazo, estigma y desconfianza, para dar paso a nuevas dinámicas sociales y formas de socialización, que obtienen como resultado situaciones particulares de convivencia que se hacen muy interesantes como objeto de estudio. Además de esto, es importante conocer los niveles de integración y las transformaciones en las realidades de estos sujetos para dar cuenta de verdaderos procesos de transformación y construcción de realidad, ya que al tener una transición de una vida rural y militar a una vida en la civilidad y en la ciudad plantea cambios significativos.

Dada la complejidad del fenómeno a estudiar y los requerimientos en el trabajo de campo y análisis de información, esta investigación requiere de dos investigadores para su realización. Además de su intención de aportar al ámbito académico sobre el análisis de dinámicas de integración social y procesos de resocialización como salida al conflicto armado y social colombiano, puede ser relevante para la planificación de políticas y programas orientadas a la reintegración de excombatientes, dado que este tipo de estudios aporta un conocimiento más cercano de las realidades y complejidades a las que se deben enfrentar estos procesos.

La metodología usada para responder a la pregunta propuesta es de tipo cualitativa. Así, realizamos un trabajo etnográfico, mediante el cual nos adentramos en ciertos aspectos de la vida cotidiana y comunitaria de la ciudadela Santa Rosa. En particular se hicieron entrevistas a profundidad y semi-estructuradas, ya que éstas permiten abstraer la información acerca de los procesos de socialización en los grupos armados y de resocialización en la vida civil. Además, se realizó una revisión de la literatura disponible sobre el tema, de documentos institucionales y entrevistas sobre los objetivos concretos de

los procesos de reintegración y un trabajo de observación en los espacios de interacción comunitaria; esto para identificar prácticas, maneras de relacionarse, discursos y hábitos que den cuenta de las formas de resocialización y el establecimiento de una realidad determinada en este lugar.

Como mencionábamos anteriormente, en la ciudadela Santa Rosa, lugar donde se realizó el trabajo de campo, conviven aproximadamente cien familias de excombatientes de distintos grupos armados, mayoritariamente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP), las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), por los que los sujetos entrevistados están relacionados con estos grupos. Se realizaron entrevistas a ocho excombatientes (5 de las FARC-EP, 1 de las AUC y 2 del ELN). Las entrevistas a profundidad permiten conocer una trayectoria personal y social que develan distintos procesos de socialización en los dos escenarios a contemplar (vida militar y vida civil). Es importante anotar la dificultad al realizar el trabajo de campo dado que varios desmovilizados no quisieron participar de estas actividades y los contactos con ellos no fueron fáciles de establecer por varias de las vías utilizadas: el programa de la ACR, de la Secretaría de Gobierno y de los líderes locales. Sin embargo, el trabajo de campo nos permitió tener una cercanía con los residentes del barrio, mediante el cual pudimos participar en las diferentes actividades comunitarias que se realizaron. Allí tuvimos la oportunidad de conversar informalmente con varios actores de la ciudadela, quienes nos contaron parte de su vida en la comunidad y sus procesos de resocialización.

En cuanto a los parámetros sobre procesos de socialización en la vida civil se tomaron en cuenta los documentos institucionales de la Alta Consejería para la Reintegración (ACR), específicamente la identificación de sus objetivos más concretos dirigidos al sujeto desmovilizado, para establecer los parámetros deseados para su socialización en la vida civil. También se realizaron entrevistas a dos representantes de la ACR: un trabajador psicosocial y la gerente del Centro de Servicio Rafael Uribe Uribe en Bogotá de esta institución. Con respecto al programa distrital se realizaron dos entrevistas a funcionarios de este programa, también desmovilizados, que tenían gran conocimiento sobre el proceso adelantado en Santa Rosa, uno por el acompañamiento que brindó y otro porque es residente hace varios años.

Se hizo también una revisión de literatura sobre procesos de socialización en la ciudad para contextualizar y establecer ciertas categorías que se correspondan en un sentido analítico con las categorías establecidas para la socialización previa – rural y militar-.

Como apoyo se realizó una entrevista a un miembro de la comunidad no excombatiente para explorar otra visión sobre los logros, las dificultades y las expectativas generadas en tal proceso comunitario.

El eje de análisis transversal a toda la investigación es la transición de la vida rural/militar a la vida cívico/urbana, ya que es a través de este cambio, entendido en términos de procesos, a través del cual se puede identificar cómo se ha dado una nueva construcción de realidad a través de esa resocialización y cómo ésta presenta elementos de su socialización previa así como elementos considerados necesarios y objetivos para la vida en la legalidad y en un escenario urbano.

El presente trabajo se organizará en los siguientes capítulos. El primer capítulo contextualiza al lector dentro de la violencia en Colombia durante la segunda mitad del siglo XX, sus elementos históricos principales, el surgimiento y papel de los actores que han intervenido, y las iniciativas de paz, programas y políticas que han surgido durante este periodo.

El segundo capítulo ahonda en los procesos de socialización dentro de los grupos armados, centrándose en la vida cotidiana, la percepción del otro, jerarquías y poderes, y por último códigos, normas y valores; este capítulo se incluyó dada la necesidad de dar cuenta de esos procesos de socialización, para poder entender los choques, cambios, continuidades y transformaciones que se presentan posteriormente en los procesos de resocialización de los excombatientes en la ciudad.

El tercer capítulo se enfocará principalmente en la transición a la vida civil de los excombatientes de los diferentes grupos armados ilegales que residen en la Ciudadela Santa Rosa. En este sentido, empezaremos por revisar los programas gubernamentales para la re inserción de desmovilizados en la ciudad de Bogotá, adelantados por el PRVC, la ACR y la Secretaría de Gobierno de Alcaldía Mayor de Bogotá. Posteriormente, se profundizará en la llegada de los excombatientes a la ciudad, los motivos, choques y transiciones que se presentan; luego se especificará en la llegada al barrio, los primeros momentos de adaptación al entorno para después abordar los primeros acercamientos a la comunidad,

teniendo en cuenta las estrategias para relacionarse e introducirse dentro de un nuevo espacio social.

En el cuarto capítulo se hace un análisis sobre la vida en comunidad, las dinámicas sociales, los espacios de integración, los logros y dificultades, así como los códigos y estrategias generalizadas dentro de ésta. Aquí se pretende poder ver la comunidad en conjunto, la manera en que se organiza, sus formas de acción, sus conexiones con otras organizaciones –ya sean públicas o privadas-, los valores y normas dentro de esta y su relación con la ciudad en general.

El quinto capítulo se enfoca en el aspecto organizativo desarrollado dentro de la comunidad desde la llegada de los excombatientes a la ciudadela, y profundiza en la acción colectiva e individual llevada a cabo por estos para la construcción de dinámicas sociales de integración y participación dentro de la comunidad y la construcción misma de ésta.

En el sexto capítulo se analizarán los cambios y continuidades que se han dado en los procesos de resocialización de los excombatientes específicamente en la vida comunitaria a la luz de la integración como proceso y como concepto; se analizará entonces su integración por etapas que contienen procesos y dinámicas tanto individuales como colectivos y que permiten comprender todo el proceso llevado a cabo en la ciudadela y las transiciones individuales de los desmovilizados. En primer lugar se indagará el momento de desajuste de estructuras anteriores y el posterior trabajo por reconocer las nuevas estructuras; luego se analizará cómo a través de la participación, la construcción de comunidad y la consideración del ser ciudadano interviene en su integración, y por último se relacionará la integración a nivel comunitario con una integración más extendida hacia el escenario urbano y nacional.

CAPÍTULO PRIMERO

La violencia en Colombia desde la segunda mitad del siglo XX

Los problemas de la violencia en Colombia se han tornado un tema central en la historia del país, incluso para los colombianos se presenta como una constante en su historia de nación, se percibe dentro de un imaginario colectivo como elemento consubstancial de su historia patria y como prefiguración del futuro de la misma; la violencia se percibe entonces, como una especie de destino (Pécaut, 1996: 26, 27).

En los estudios sobre la violencia en Colombia no se especifica qué es la violencia, se intenta explicar más bien como fenómeno relevante en todos los aspectos sociales, políticos y económicos del país (Blair, 2009:21). Por tal razón, “La violencia es innegablemente, por encima de todo, un fenómeno político, ideológico, económico y sociológico” (Sampson, 1989: 99).

Antes de hablar de las variaciones y permanencias de la violencia en Colombia, es importante resaltar las condiciones históricas y particularidades propias del país con referencia a los cambios y desarrollos históricos de los países latinoamericanos. Para empezar, Colombia ha mantenido, en comparación con los otros casos, una estabilidad institucional, económica y social (Pécaut, 1996: 25), a pesar de lo problemático que sea la legitimidad institucional, la desigualdad y el conflicto social. El país ha sido gobernado por elites civiles invocando la democracia; no ha temido la intervención militar, aun cuando ocurrió un golpe de Estado pero fue bajo consentimiento civil; no tuvo cambios abruptos en la economía ni pasó por unos procesos de transformación social de gran envergadura, que si se dieron en los otros países de América Latina (Pécaut, 1996: 25).

Colombia ha sido escenario de fenómenos de violencia crónica hace más de 60 años, para la cual Daniel Pécaut establece dos grandes episodios de violencia generalizada (este concepto se refiere según el autor a: “cuando los fenómenos diversos de violencia entran en resonancia con y definen el contexto de la mayor parte de interacciones colectivas” (Pécaut, 1996: 26)) en el país, que permiten observar las transformaciones dentro de la violencia, en sus prácticas, discursos y objetivos durante la segunda mitad del siglo XX. El primer episodio corresponde al periodo conocido como La Violencia que inicia en el año 1946 y termina 20 años después, el cual se caracterizó por ser casi una

guerra civil entre los dos partidos tradicionales: el partido conservador y el partido liberal, donde se dividió la sociedad en dos subculturas políticas que tenían territorios específicos en los cuales se fomentaba y reproducían las identidades políticas afiliadas a los partidos. Sin embargo, la escena política estaba fragmentada, al igual que los partidos, como resultado de las estrategias del personal político para procurarse su poder, aun por vías no institucionales que redundaron en fenómenos de violencia (Pécaut, 1996: 28-33).

El segundo periodo comienza hacia 1980 y continúa hasta la primera década del siglo XXI. En un inicio, en el escenario de conflicto nacional estaban las guerrillas de ideología izquierdista luchando contra el establecimiento, pero luego aparecen otros actores que darán una transformación significativa a las prácticas, discursos y objetivos inmersos en las manifestaciones de la violencia en el país. Los paramilitares, los narcotraficantes y las pandillas urbanas introducirían nuevos modos de actuar e incidir sobre el conflicto social existente desde distintas regiones, ideas y estrategias.

Cuando aparecen las redes de narcotraficantes, hacia 1983-1984, en un inicio se dedicaron a satisfacer sus intereses e incrementar su poder, luego en 1984 el gobierno en curso decide establecer unas medidas contra el narcotráfico y amenaza con la extradición de quienes estuvieran a cargo del negocio; como reacción, el cartel de Medellín, uno de los más importantes carteles de droga en la época, lleva a cabo numerosos atentados terroristas dirigidos en contra de magistrados, periodistas y policías. Luego, en 1989 – 1990, las prácticas violentas de los narcotraficantes se transforman y adoptan la forma de atentados ciegos contra la población civil o atentados dirigidos hacia personalidades políticas. En este periodo los grupos paramilitares se multiplican con apoyo de las fuerzas del orden y los narcotraficantes. Hacia fines de los años ochenta aumentan las organizaciones de sicarios en barriadas de las grandes ciudades, ya fuera al servicio de los narcotraficantes o propio, sumándose luego las “milicias urbanas”, algunas organizadas por las guerrillas y otras de forma autónoma (Pécaut, 1996: 51-56).

En este periodo hay importantes transformaciones en el accionar de los grupos violentos. La relación entre los actores armados y la población cambia de naturaleza, ya no se trata de generar pertenencia e identificación política, sino funciona como redes y lealtades mediadas por la coacción o como producto de transacciones. Hay una ruptura de los lazos colectivos en las zonas de violencia y un progresivo desaparecimiento de lo

político, incluso la legalidad se percibe como otra imposición. Sin embargo, aunque hay un cambio de prácticas, de armas, entre otros factores, la violencia sigue asentada en los territorios tradicionales.

Aunque en la época de la Violencia también se compusiera de lealtades y de formas de coacción, de un respeto generalizado arraigado a los poderes de facto, las relaciones que manejan los actores armados no responden a los mismos intereses. “Las redes actuales no pretenden canalizar demandas sociales hacia el Estado. Tampoco pretenden fabricar sentimientos de pertenencia estables. La mezcla de coerción y de transacción que implementan no contribuye a una puesta en escena de lo social y de lo político, sino a su opacidad” (Pécaut, 1996: 70).

La Violencia bipartidista (1946 – 1964)

La violencia de los años cincuenta fue uno de los eventos más significativos en la historia de Colombia del siglo XX. Ésta fue producto, en buena medida, de las disputas entre las élites políticas por la tenencia del poder tanto a nivel nacional como a nivel local. Dentro del conflicto armado que tuvo lugar entre los años 1945 a 1953, se consolidan un número importante de luchas armadas entre grupos guerrilleros y (o) de autodefensas rurales y campesinas las cuales tenían afiliación, ya sea de tipo nominal o directa, con los dos partidos políticos más importantes de la época: el Partido Liberal Colombiano y el Partido Conservador Colombiano (Palacios: 2003, Palacios y Safford: 2002).

Entre ambos partidos políticos se desencadenó una lucha por la toma del poder en la que se disputaban modelos de desarrollo según las visiones de cada uno estos, y que conllevaría a uno de los episodios más violentos y sangrientos de la historia de Colombia del siglo XX. Lo que comenzó como una disputa política entre las élites conservadora y liberal, se trasladaría a las zonas rurales como una guerra de guerrillas con consecuencias trágicas.

Es importante anotar que la violencia en Colombia “es una variable que se refiere a una serie de procesos provinciales y locales sucedidos en un periodo de tiempo, que abarca los años de 1946 a 1964, que descargó su mayor fuerza destructiva entre 1948 y 1953” (Palacios y Safford 2002: 632). De esta manera, la Violencia, desde el punto de vista político resulta ser un proceso en el que se enfrentaron las élites del país para imponer a

partir del Estado un modelo de desarrollo y modernización, de acuerdo a visiones de orden liberal o conservador, que abarcaría todas las zonas del país con una presencia débil en el Caribe colombiano (Palacios y Safford, 2002: 632).

La lógica de la violencia se estableció a partir de operaciones de “limpieza” sectorial en las veredas dominadas por el partido minoritario en el municipio, a las que le seguía la venganza casi inmediata, en particular si el municipio vecino era un rival político tradicional. Bajo este patrón de la violencia se involucraron todas las zonas del país, siendo más fuerte en la cordillera oriental y en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño (Palacios y Safford, 2002: 633).

Sin embargo, la violencia en Colombia no había tomado tanta fuerza destructiva entre los años de 1945 a 1948, como la tomó a partir del asesinato del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán el 9 de abril de este último año, cuando el patrón de violencia se intensifica, desestabilizando aún más el Estado y la situación política del país (Palacios y Safford, 2002: 633). El día del asesinato de Gaitán, las masas enardecidas salieron a las calles dolidas e indignadas por la muerte del caudillo, acusando a la oligarquía y al gobierno conservador de haber planeado su muerte. La reacción popular produjo una de las manifestaciones más destructivas, sangrientas y violentas de la historia de América Latina conocida como El Bogotazo. El presidente de turno Mariano Ospina Pérez, anunció a la mañana siguiente un pacto con los liberales para hacer un gobierno bipartidista y conservar el orden político (Palacios y Safford, 2002: 633).

Para 1949 el clima político en Colombia se tornaba cada vez más agitado, particularmente desde que el partido conservador lanzó a Laureano Gómez Castro como el candidato presidencial para las elecciones de este año, teniendo como consecuencia inmediata la decisión del Directorio Liberal de convocar a todos los liberales para que tomaran una postura abstencionista para desestabilizar al país políticamente y manifestarse en contra del gobierno conservador. Este suceso ocasionó el cierre del Congreso y la declaración del Estado de Sitio (figura constitucional que limita las libertades ciudadanas y le da un inmenso poder al ejecutivo) por parte del Presidente Mariano Ospina Pérez, situación que se prolongaría hasta 1951 cuando Gómez ya era presidente (Palacios y Safford, 2002: 634).

En 1950, “la geografía, los actores y las formas de organización de la resistencia liberal cambiaron” (Palacios y Safford, 2002: 636); mientras en Nariño, los Santanderes, Boyacá y el Valle del Cauca la violencia parecía debilitarse, en Meta, Casanare, Tolima, el macizo del Sumapaz, el Magdalena Medio y el bajo Cauca se intensificaba y tomaba mayor fuerza, regiones donde se prolongaría hasta 1964 y daría lugar al nacimiento a las guerrillas comunistas en el sur del Tolima, Sumapaz y el Meta.

Entre 1950 y 1953 la resistencia liberal, que había comenzado expresada en grupos armados familiares y comunitarios organizados como autodefensas campesinas, se transformó y organizó en guerrilla, dejando de lado el carácter local de una violencia semi-anárquica por la fuerza y carácter de una guerra civil que ningún bando involucrado quiso aceptar o formalizar, dado el costo político que esto comprometía (Palacios y Safford, 2002: 637).

Por su parte, las guerrillas conservadoras (denominadas como los Pájaros en el Valle del Cauca y Quindío, y como Chulavitas al interior del país), tuvieron como destacamento miembros de la policía y el ejército y serían apoyados por el Estado en los gobiernos conservadores. Estas guerrillas conservadoras “actuaban como fuerzas de ocupación en las regiones donde había una fuerte filiación política liberal” (Palacios y Safford, 2002: 637).

Entre los años 1952 y 1954, las guerrillas liberales entraron en conflicto internamente en el sur del Tolima y se dividieron en *limpios* (liberales) y *comunes o sucios* (comunistas) (Palacios y Safford, 2002; Palacios, 2003; González Arias, 1992); los primeros intentaban derrocar el gobierno conservador y hacer algunas reformas agrarias sin cambiar radicalmente el orden social, los segundos por su parte, querían una transformación revolucionaria a todo nivel, desde el orden social y jerárquico hasta la transformación del Estado. El conflicto interno entre ambos bandos hizo que los grupos armados conservadores tomaran más fuerza y dieran golpes contundentes a las dos guerrillas, por lo cual decidieron no enfrentarse más y repartir los territorios. Para 1953 el General Gustavo Rojas Pinilla planea y ejecuta un golpe de Estado al presidente Gómez para luego implantar un gobierno militar durante el cual las guerrillas liberales realizan un acuerdo de paz, abandonando las armas y retornando a la vida civil.

Entre tanto, las guerrillas comunistas entran en un proceso de reorganización y se establecen nuevamente como autodefensas campesinas, apropiándose las regiones de El Pato, Guayabero, Marquetalia, El Alto Ariari, Alto Sumapaz, Duda y Riochiquito, y conformando así lo que se conoció como las Repúblicas Independientes, las cuales se extendían en pequeños territorios de los departamentos de Tolima, Huila, Meta, Caquetá y Cauca (González Arias, 1992; Palacios y Safford, 2002). En este periodo (1954-1964) el país entra en una nueva etapa política, en la cual liberales y conservadores pactan un acuerdo en el que se turnarían el poder una vez que el General Rojas Pinilla dejara la Presidencia, pacto que se conocería como el acuerdo de Benidorm y resultaría en el Frente Nacional.

Este nuevo proyecto político pactado entre las élites colombianas dejó sin lugar político y social a un gran número de colonos, los cuales desde tiempos de la violencia de los años cincuenta colonizaron zonas inhóspitas y baldías del país, asentándose principalmente en alta montaña y en la selva. Posteriormente, terratenientes de todo el país intentaron apoderarse de estas tierras por vía legal y armada, desencadenando de esta manera una nueva ola de violencia.

Ya para la década de los años sesenta, la mayoría de estas regiones fueron pacificadas a sangre y fuego, dando nacimiento a las guerrillas comunistas de las FARC-EP y el ELN, debido a la conversión de los grupos de autodefensas campesinas en guerrillas, con miras a ocupar la mayor cantidad de territorio posible y con un carácter más ofensivo que defensivo, como sucedía en los tiempos de la violencia bipartidista (González Arias, 1992; Palacios y Safford, 2002).

Conflicto Armado: expansión guerrillera y paramilitarismo

En los años sesenta empiezan a conformarse grupos armados revolucionarios de ideología marxista, diferenciadas en dos tipos de guerrillas comunistas: las agraristas comunistas y las foquistas. Las primeras provienen de los movimientos que se iniciaron hacia la década de los años treinta constituidos por migrantes de todas las regiones del país que empezaron a colonizar las zonas más inhóspitas y las tierras baldías del territorio colombiano. Estos movimientos protagonizaron gran parte del proceso de colonización que se dio en Colombia desde los años treinta hasta el final de la violencia bipartidista.

Los movimientos se organizaron en grupos de autodefensas campesinas en épocas de la Violencia, para protegerse de la policía Chulavita al servicio del Estado, y para procurar una colonización autónoma y explotación de la tierra independiente. Pervivieron hasta los años sesenta cuando fueron desplazadas de sus regiones, conocidas como las Repúblicas Independientes (González Arias, 1992; Palacios y Safford, 2002), gracias a la fuerte ofensiva que lanzó el ejército colombiano durante el periodo del Frente Nacional. En ese contexto y proveniente de las autodefensas campesinas, surge la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) en el año de 1964.

Recapitulando un poco, las guerrillas denominadas foquistas surgieron como consecuencia directa de la revolución cubana. En la década de los años sesenta, se extendió por América Latina la lucha revolucionaria a través de focos armados insurreccionales, influenciada por la experiencia cubana y generando un gran impacto dentro de la vida política de la región. Los principios del foquismo, expuestos por el “Che” Guevara, que dieron lugar a numerosas y diversas organizaciones político-militares revolucionarias en muchos países de Latinoamérica, incentivaban a la acción y a la consideración del campo como el terreno de la lucha armada, así como a la creación de condiciones en el escenario nacional para la revolución. A partir de 1962 se consolidan en el territorio colombiano varias guerrillas identificadas con estos principios, con enfoques ideológicos y prácticas diversas dentro de las cuales se encuentra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) (Pizarro, 1986: 391-393).

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP)

Las FARC-EP han tenido transformaciones importantes desde sus inicios, generando un impacto profundo en las dinámicas de la violencia. En un principio, estas fuerzas armadas eran para el Partido Comunista una opción de reserva en caso de la instauración de una dictadura en el país. Sin embargo, tuvieron un desarrollo a nivel local, lo que determinó su carácter regional y el profundo arraigo en los lugares en los que operaba. “Guerrilla, partido y organización campesina se refuerzan mutuamente, generándose una fuerza regional indudable” (Pizarro, 1986: 404).

Posteriormente, las FARC-EP, gracias a la condición del movimiento guerrillero a mediados de los años ochenta y la tregua firmada en ese entonces bajo las iniciativas del presidente Belisario Betancourt, deja de ser tan solo una guerrilla campesina para tener una

actividad vinculada a la política legal. Así, por medio de la Unión Patriótica (UP), se conforma un eje político importante y una transformación en la organización que cambia las perspectivas del escenario del conflicto así como el panorama político en el país de ese entonces (Pizarro, 1986: 404).

En esta época, las FARC-EP buscaba una acción política más visible y fortalecida (Pizarro, 1986: 404) así como insertarse y organizarse dentro de los centros urbanos del país a través de la UP, empresa que se ve obstaculizada dramáticamente por la represión del Estado y fuerzas paramilitares que asesinaron a muchos miembros de ese partido y lo convirtieron en su blanco más importante (Richani, 2003: 114). Los principios del grupo se transforman, aunque los problemas centrales del campo y la tierra siguen vigentes. Los propósitos seguían siendo influenciar a la población y hacerla su base de apoyo a través del control territorial, pero era importante a su vez la inserción política de las FARC-EP, mostrando la intención de fortalecerse y tener una participación en un frente electoral y en el surgimiento de proyectos políticos definidos (Pizarro, 1986: 408).

A mediados de los años noventa, las FARC-EP vuelven a revisar sus estrategias para incursionar en los ámbitos urbanos y empezar a construir lazos con las clases urbanas, de las cuales se habían mantenido aisladas. Aparece así un nuevo movimiento democrático: Movimiento Bolivariano por una Nueva Colombia, el cual se basa en principios democráticos y justicia social, buscando atraer otros sectores como intelectuales y artistas, aunque sin mucha recepción y éxito (Richani, 2003: 115).

En los años ochenta igualmente, la tendencia de crecimiento de los cultivos ilícitos y el crecimiento del narcotráfico, la especulación de la tierra, el recrudecimiento de la violencia, la proliferación de grupos paramilitares, de autodefensa en varias zonas del país ricas en materias primas, las transformaciones de la economía rural y nacional, entre muchos efectos políticos y sociales que se generan, dan lugar a un cambio en las dinámicas de los grupos armados. Tanto las FARC-EP como el ELN, en un intento por defender la economía de subsistencia campesina, de su base social, garantizó y medió las relaciones con los narcotraficantes y de alguna manera impulsó el cultivo de coca (aunque también de otros cultivos legales) en muchas zonas del país donde tenían el control. (Richani, 2003: 120,121, 140)

Con su presencia en las zonas agrícolas, para los campesinos era más seguro y rentable asumir los riesgos de cultivar coca ya que la guerrilla mediaba los pagos haciendo uso de su poder armado para actuar como garantizador de acuerdos. Efectivamente, con el auge de la coca, los ingresos de las guerrillas también aumentaron producto de los gravámenes que les imponían a los compradores. (Richani, 2003: 120 - 126)

El conflicto armado en Colombia ha tenido muchas transformaciones y esto ha llevado a que los actores cambien sus estrategias. El surgimiento de grupos paramilitares desde principios de los años ochenta hasta principios de los años noventa, respaldados por “narcotraficantes, sectores reaccionarios de la oligarquía terrateniente, militares y la élite política” (Richani, 2003: 201), complejizó los problemas de la tierra en Colombia y el conflicto en general, desencadenando reacciones de parte de todos los actores que participan de la situación. La violencia se recrudeció, las inversiones en armamento aumentaron, así como las muertes producto de la guerra y las masacres en varias zonas del país (Richani, 2003: 201).

Hacia finales de los años noventa, el conflicto armado en Colombia había entrado en una nueva etapa en la cual se estaban incrementando los homicidios, las masacres y las muertes ocasionadas por la guerra; los costos de ésta aumentaban y evidentemente la expansión y fortalecimiento de los grupos paramilitares habían provocado una nueva dinámica de guerra (Richani, 2003: 201).

Desde los años ochenta, dadas las transformaciones en el escenario del conflicto y las dinámicas del mismo, las guerrillas empiezan a desviarse cada vez más de los principios que las crearon y se encargan de asegurar su capacidad de reproducción y subsistencia, haciendo uso incluso de tácticas que afectan a la población civil y que olvidan el cambio social. La expansión geográfica de las guerrillas (así como posteriormente la de los grupos paramilitares) se dio gracias a “su habilidad para usar la violencia y la intimidación para garantizar la obtención de rentas por extorsión de la ganadería, la agricultura empresarial, el petróleo, el narcotráfico, el comercio, el transporte y las finanzas públicas locales” (Reyes, 2009: 2). Su localización en zonas estratégicas, de colonización campesina y donde se dieron grandes cultivos ilícitos les aseguraba una entrada económica considerable para su sostenimiento y crecimiento (Richani, 2003: 201). Las luchas con los paramilitares por zonas estratégicas y rentables, generó desplazamientos (tanto de la guerrilla como de

población civil), enfrentamientos y dinámicas más violentas en la que se disputaban el negocio de la droga, las rutas y sus dividendos.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN)

“El ELN se considera a sí mismo como un movimiento de liberación nacional inspirado por la Revolución Cubana y su ideología, y se funda en un híbrido entre el marxismo leninismo y la teología de la liberación cristiana” (Richani, 2003: 135). Siguen el principio foquista (la práctica de un foco revolucionario) en la praxis y sus actividades estaban principalmente enfocadas en los centros urbanos y en el movimiento estudiantil y sindical obrero. Los miembros del grupo fundador provenían en su mayoría de la clase media urbana, y hasta finales de los años noventa el liderazgo del grupo seguía prácticamente con la misma composición de clase. (Richani, 2003: 135-138). En sus orígenes los cuadros universitarios se ubicaron en zonas que habían sido muy afectadas por los procesos de la Violencia y allí tuvieron un desarrollo rápido (Pizarro, 1986: 400).

En 1973 el grupo quedó prácticamente derrotado debido a los sucesivos enfrentamientos con el ejército. Sin embargo, se recuperó años después y “de menos de 500 hombres en 1979, pasó a tener más de 5.000 combatientes en 1998” (Richani, 2003: 139). Tal crecimiento se dio gracias al cobro de dinero a las compañías petroleras en las zonas donde operaban y tenían influencia; además brindaban protección a cultivadores de coca. Su control político fue ejercido en la Serranía de San Lucas, en el Sur del departamento de Bolívar, San Vicente de Chucurí en el departamento de Santander, partes del noreste antioqueño y del sur de Bolívar, las cuales fue perdiendo porque el ejército y paramilitares incursionaron en las zonas (Richani, 2003: 140). Sin embargo, tanto el ELN como las FARC-EP siguen operando y su expansión a largo plazo se dirigió a la incursión en las áreas de mayor riqueza y no en las zonas más deprimidas del país. (Reyes, 2009: 3).

El Ejército Popular de Liberación (EPL)

El Ejército Popular de Liberación nace en 1967 como brazo armado del Partido Comunista Marxista Leninista, un partido de corte maoísta que se separa del Partido Comunista. En los años ochenta se aleja de las teorías de guerra prolongada y del rol de liderazgo del campesinado y comienza a restablecer fuertes lazos con los intelectuales. Sus actividades comenzaron principalmente en las fronteras de los departamentos de Córdoba y Antioquia, logrando allí una base de apoyo entre colonos campesinos y la clase obrera en las

plantaciones bananeras. El máximo de combatientes que el grupo logró reclutar fue de 2000 entre campesinos y estudiantes. Bajo la iniciativa de paz del presidente Belisario Betancur, la mayoría de combatientes del EPL abandonan la lucha armada en 1984, a excepción de un frente disidente. Este grupo fue pequeño en comparación a las FARC-EP y el ELN, y su principal fuente de ingresos fue el secuestro extorsivo (Richani, 2003: 142).

El Movimiento 19 de Abril (M – 19)

El Movimiento 19 de Abril (M-19), creado en 1972, fue uno de los movimientos guerrilleros más controvertidos que surgieron en la época de la violencia guerrillera. Inspirados en Los Montoneros de Argentina y Los Tupamaros del Uruguay, el M-19 se consolida como una guerrilla eminentemente urbana (Palacios y Safford, 2002: 649), surgida de un ala disidente de la Alianza Nacional Popular (ANAPO), partido creado por el General Gustavo Rojas Pinilla mediante el cual se lanzó como candidato presidencial para los comicios de 1970, enfrentándose al candidato conservador y frentenacionalista Misael Pastrana Borrero.

El 19 de abril de 1970, día en el que se celebraron las elecciones presidenciales para el periodo de 1970 a 1974 y en el que parecía que la hegemonía del Frente Nacional llegaba a su fin, dado que el candidato Gustavo Rojas Pinilla, quien se oponía al régimen frentenacionalista, parecía ganar las elecciones presidenciales, se convirtió en una gran frustración pues Colombia se despertó al día siguiente con la sorpresa de que el nuevo Presidente de la República no era Rojas Pinilla, sino Misael Pastrana Borrero, candidato del Frente Nacional y del Partido Conservador.

Este evento fue catalogado como fraude por gran parte de la opinión pública y produjo insatisfacción en los seguidores de Rojas y su movimiento político ANAPO, por lo cual salieron a las calles a protestar. A partir de este momento, surge un movimiento político de izquierda denominado como M-19 (Movimiento 19 de abril), conformado por miembros socialistas de la ANAPO. En principio se consolida como un movimiento político y dos años más tarde se constituye como una guerrilla urbana.

Hacia 1979 el M-19 se empieza a transformar en una guerrilla de carácter rural, gracias a la victoria de los Sandinistas en Nicaragua, sin olvidar una posible insurrección urbana. El M-19 ganó mucha popularidad en los años ochenta por realizar acciones osadas que significaron mucho para gran parte de la población colombiana. Así, este movimiento

llegó a robar armas del Cantón Norte dejando en ridículo al Ejército Nacional, apropiándose de la espada de Simón Bolívar, tomaron la embajada de República Dominicana, secuestraron al político Álvaro Gómez Hurtado y a una hermana de los narcotraficantes miembros del cartel del Medellín, conocidos como los hermanos Ochoa.

El momento de su debacle está marcado por la última acción armada importante que realizó este grupo guerrillero, denominada dentro de la historia del país como la Toma del Palacio de Justicia. El 6 de noviembre de 1985 algunos miembros del M – 19 se toman el lugar en que desempeñaba sus labores la Corte Suprema de Justicia, reteniendo a civiles, magistrados y a personal administrativo que trabajaba en el lugar; esta toma se realizó con el objetivo de hacerle un juicio político al presidente de turno Belisario Betancur, por incumplir el acuerdo de Corinto, en el cual se comprometía a firmar la paz con los grupos insurgentes. Sin embargo, la toma del Palacio de Justicia no llegaría a buen término, dado que las fuerzas militares recuperaron la edificación a sangre y fuego, exterminando a la mayoría de los líderes del M – 19, junto con magistrados, civiles y empleados que se encontraban dentro de ella.

Esta guerrilla se desmoviliza durante el gobierno de Virgilio Barco en 1990 y se convierte en un movimiento político de gran envergadura llamado Alianza Democrática M-19, logrando el tercer lugar para las elecciones presidenciales, y ocupando 19 escaños para la constituyente que redactaría la carta política de 1991. Para 1993 el M – 19 no tendría la misma importancia que años anteriores, convirtiéndose en un movimiento político sin mayor trascendencia en el país.

El paramilitarismo

Para hablar del surgimiento y desarrollo de grupos paramilitares es necesario también hablar de la evolución e incidencia del narcotráfico en el país, aunque este no fue su único causante, si fue un factor determinante para su desarrollo en conjunto, como también lo fueron las élites terratenientes, corporaciones multinacionales, Fuerzas Armadas del Estado, entre otros miembros de las élites políticas y económicas del país.

Desde los años sesenta empezó una oleada de cultivos alternativos ilegales. En un principio fue la marihuana, seguida de la amapola y la coca, teniendo esta última su auge durante la década de los ochenta. La creciente depresión de la economía agrícola en varias zonas del país desde los años sesenta, producto del modelo de desarrollo económico que se

imponía y de la ausencia del Estado e incapacidad para establecer el orden en la totalidad del territorio nacional, fomentó los cultivos ilícitos y el contrabando, ya que estos se convertían en alternativas económicas rentables.

La ausencia o débil presencia estatal en las zonas rurales especialmente, se ve evidenciada por la toma del control de muchas regiones por parte de las guerrillas en un principio. Estas zonas fueron posteriormente escenarios prolíferos para las economías alternativas e ilícitas y pasaron a manos de los narcotraficantes, quienes establecieron otro orden social. Los departamentos que más cultivos de coca registran para 1999 fueron Putumayo, Caquetá, Guaviare, Norte de Santander (Gabarra) y Bolívar (Serranía de San Lucas) (Richani, 2003:156); “Los productores de coca de esos departamentos recalcan que la única autoridad que ellos conocieron (antes de la introducción de la coca) fue la de las guerrillas” (Richani, 2003:156). Las guerrillas ejercieron autoridad en estas zonas incluso durante el auge de los cultivos ilegales para mediar entre los conflictos que esta actividad genera. Los narcotraficantes también empezaron a crear estrategias para ganar poder y beneficios para el desarrollo de su negocio; las relaciones con el Estado (incluidas las fuerzas militares que fueron determinantes para la conformación y desarrollo de estos grupos) y grupos de la élite política y económica fueron ambiguas, en ocasiones eran de colaboración y en otras de conflicto; de la misma manera se empezaron a tejer nuevas relaciones con distintos actores dada la introducción de mafias y ejércitos privados financiados por esta rentable actividad económica ilegal (Richani, 2003:161 – 173).

Además de la introducción del narcotráfico al escenario del conflicto la expansión guerrillera generó, en grandes y medios propietarios, su organización y como producto de ésta, la conformación de fuerzas privadas. En 1981, el ejército adoptó como estrategia la creación de bases civiles de apoyo. Posteriormente, como reacción a la iniciativa de paz del presidente Belisario Betancur, el ejército convocó a ganaderos y comerciantes de regiones donde la guerrilla tenía gran presencia e influencia para financiar grupos para estatales que ejercieran control y fuerza contrainsurgente en aquellas regiones (Reyes, 2009: 3, 4).

Ya desde 1965 se daban las condiciones formales para el surgimiento de estos grupos para estatales; “La trayectoria formal de los grupos paramilitares data de 1965 y 1968, cuando el decreto 3398 y la subsiguiente Ley 48 sientan los fundamentos legales para

la creación de organizaciones de defensa civil por decreto presidencial” (Richani, 2003: 167). Estos grupos como modalidad de defensa encajan dentro de una doctrina de seguridad nacional y han sido legitimados por miembros del gobierno en varias ocasiones para promover una estrategia política contrainsurgente.

Ya para fines de la década de los ochenta había tres tipos de paramilitarismo: “las mafias de las esmeraldas, los paramilitares de los narcotraficantes y los paramilitares financiados por los ganaderos y la élite terrateniente (a los que usualmente se hace referencia como «autodefensas»)). La mayoría de estos grupos paramilitares convergieron en los años noventa bajo un liderazgo unificado y con un programa político conservador para apoyar a las Fuerzas Armadas del Estado” (Richani, 2003: 167). Así se legitimaban estos grupos principalmente para defender intereses de las élites tanto políticas como económicas (foco de la clase terrateniente), de las mafias esmeralderas y de los narcotraficantes; por su parte, el Estado integró dentro de su estrategia contrainsurgente a estos actores, a pesar de la ilegalidad reconocida de algunos de ellos (Richani, 2003: 168).

En 1981, los Hermanos Fidel y Carlos Castaño constituyeron un grupo paramilitar en Antioquía, y ya para 1988 estaban incursionando y comprando tierras en Córdoba, Urabá, el Suroeste Antioqueño y el Viejo Caldas; así mismo su fortuna crecía principalmente a base de la extorsión y el narcotráfico. Tuvieron relaciones con los carteles de Medellín y de Cali, así como con las fuerzas militares en un principio (Richani, 2003: 171, 172). Posteriormente estos hermanos emprenderían una labor de unificación de grupos paramilitares, la cual concluyó Carlos Castaño en 1996 cuando creó las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), lo que cambiaría las dinámicas de estos grupos y del conflicto (Reyes, 2009: 97).

Los grupos paramilitares en un comienzo (desde 1984 hasta 1994) actuaban a nivel local, respondiendo a los intereses de los grandes terratenientes y narcotraficantes del lugar y con una tarea eminentemente contrainsurgente, que incluía la eliminación de líderes de izquierda, activistas y líderes campesinos, llevando a cabo “la «guerra sucia» que las Fuerzas Armadas no querían librar para evitar el escrutinio de los grupos de derechos humanos nacionales e internacionales” (Richani, 2003: 191). En diciembre de 1994 tuvo lugar el Primer Congreso Nacional de Paramilitares, donde se empieza a gestar un proyecto

unificado a nivel nacional que después se convertirá en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) (Richani, 2003: 190).

Ya en 1995 los paramilitares se convirtieron en una fuerza unificada, con una conformación por bloques y con una población de 4.000 a 5.000 hombres dotados de mejores armamentos y mejor entrenamiento que antes; para el año 2000 ya contaban con aproximadamente 8.000 hombres. (Richani, 2003: 191). El proyecto de unificación de los grupos paramilitares que ocupaban el territorio nacional tuvo como resultado una vasta configuración por bloques en varias zonas del país: “Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) están constituidas por el Bloque Occidental, que comprende Chocó y Urabá; el Bloque Norte, que tiene frentes en Sucre, Bolívar, Magdalena, Cesar y la Serranía de San Lucas; el Bloque de los Llanos, con frentes en Ariari, Guaviare y Piedemonte, y el Bloque Centro, que incluye frentes del sureste, oeste, este y noreste de Antioquia” (Richani, 2003: 172).

Las AUC son principalmente grupos contrainsurgentes, aunque en su lucha por defender el orden socioeconómico establecido le ha declarado la guerra no solo a las guerrillas sino a los grupos políticos de izquierda, grupos de derechos humanos, entre otros agentes o fuerzas democráticas, y han logrado desde su formación desalojar a las guerrillas de algunas zonas que eran predominantemente guerrilleras (Richani, 2003: 172). Sin embargo, su relación con el narcotráfico fue creciendo, incluso hasta volverse la fuente principal de financiación para su sostenimiento y crecimiento; otras fuentes de financiación son: “impuestos a los pequeños negocios, contratistas, subcontratistas y corporaciones multinacionales que los contratan para protección, y de las contribuciones de grandes terratenientes y ganaderos” (Richani, 2003: 172). Estas autodefensas desplegaron “una extraordinaria iniciativa de expansión de fuerzas a las principales regiones de influencia guerrillera; logró cortar los corredores de tránsito que comunicaban a las guerrillas entre el Magdalena medio y Urabá, y expulsó, en 2001, al ELN de Barrancabermeja, la capital petrolera, mermando así su influencia en toda la región. Los bloques paramilitares lograron establecer dominios locales en las principales regiones de influencia guerrillera y expulsar población campesina acusada de colaborar con las guerrillas. En poco tiempo compitieron con ellas en el control de regiones cocaleras y concentraron el negocio de las drogas para acceder al mercado negro de armas” (Reyes, 2009: 88, 89)

Con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se da inicio al proceso de desmovilización de las AUC y vuelven a la vida civil miles de hombres pertenecientes a estos grupos, después de las modificaciones legales para poder establecer un proceso con este grupo sin reconocer su estatus político. En consecuencia, se generan nuevos marcos legales para la desmovilización y reintegración, sin embargo el éxito de este proceso ha sido muy discutido principalmente por las irregularidades dentro del mismo, las indeterminaciones judiciales, la reincidencia de algunos desmovilizados y la aparición de las llamadas Bandas Criminales (BACRIM) en las ciudades del país.

Recapitulando sobre el escenario del conflicto en el país y las trayectorias y vivencias de los actores involucrados es importante resaltar que “La violencia contemporánea en Colombia puede entenderse en buena medida como la dinámica territorial de creación, desplazamiento y sustitución de dominios armados sobre la población” (Reyes, 2009: 31). La introducción de más agentes armados genera la agudización y la transformación de los fenómenos de violencia. La lucha por el territorio sigue siendo una constante y con la acumulación y toma de tierras por parte de los actores armados el problema se ha agravado, la concentración sigue aumentando y el desplazamiento de millones de colombianos es uno de los más grandes problemas del país, sin contar con las muertes productos del conflicto y las víctimas que hoy están en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación. Recientemente (2011) se aprobó una ley de víctimas y una ley de tierras, en busca de una reparación y que las personas desplazadas puedan volver a sus lugares de origen, sin embargo la labor es ardua para asegurar las condiciones y enfrentar la persistencia de acciones violentas en el país.

Procesos de Paz en Colombia

Durante la historia del conflicto armado en Colombia distintas soluciones han sido planteadas por los gobiernos que han asumido el poder. Se ha alternado así entre un conflicto social imperante, persistente y múltiples iniciativas de construcción de paz: “Nuestra historia cuenta entonces una tradición de enfrentamientos armados y de violencia política, pero también registra numerosas experiencias de negociaciones, pactos de paz, armisticios, amnistías, indultos y acuerdos humanitarios” (Villarraga, 2004: 17).

Los distintos programas políticos y administrativos para la construcción de paz adelantados en el país en la segunda mitad del siglo han cambiado según la orientación política del gobierno de turno y la voluntad política del primer mandatario del momento. Las negociaciones han tenido varios resultados, como la desmovilización de varios grupos guerrilleros, milicias populares y recientemente de los grupos paramilitares. Sin embargo, los pactos y acuerdos a los que ha llegado el gobierno con las FARC-EP y el ELN han sido violados por ambas partes, generando una tensión política por las dudas acerca de la disposición de los grupos armados para la negociación y la paz y de las herramientas del Estado para garantizar el cambio social, una inclusión y apertura política, y la seguridad de los (ex) combatientes.

Las iniciativas de los distintos gobiernos a través del tiempo para dar una solución al conflicto interno se han centrado mayoritariamente en dismantelar los grupos armados al margen de la ley, ya sea por la vía militar (legítima o ilegítima) buscando su eliminación y debilitamiento, o por la vía política buscando una negociación y su posterior proceso de desmovilización, desarme y reintegración (DDR) a la sociedad civil. En los últimos 25 años el país ha vivido varias desmovilizaciones y desarmes que quedan contenidas y abaladas por decretos de amnistías e indultos. La reintegración se ha convertido en un factor muy variado, dado que sus avances o retrocesos dependen de las disposiciones políticas del gobierno y de los grupos armados (también de cada (ex)combatiente), así como de las respuestas sociales de aceptación del proceso.

Inicios e intentos exploratorios de paz

La primera experiencia de desmovilización fue con las guerrillas liberales en el año 1953, bajo las amnistías para los alzados en armas y para la fuerza pública durante el gobierno militar del general Gustavo Rojas Pinilla; ocurrieron en un contexto particular dado que era un gobierno militar que había asumido el poder en respuesta a una situación política álgida y de violencia crítica en el país. Bajo esta amnistía aparece una iniciativa de reinserción y se abre la oficina de Rehabilitación y Socorro, sin tener mucho éxito por la carencia de programas que beneficiaran a los excombatientes y llevaran a la práctica la restitución de tierras (Villarraga, 2004: 19 - 21).

Algunas guerrillas no se acogieron a esta amnistía y se confinaron en ciertas zonas, especialmente las de influencia comunista, replegándose en territorios periféricos del país y

organizadas como autodefensas campesinas. Las zonas en las que tuvieron más presencia fueron aquellas de frontera agrícola donde se dieron los procesos de colonización campesina como respuesta a los desplazamientos generados por la Violencia (Villarraga, 2004: 20).

Luego del gobierno militar del general Rojas Pinilla, los partidos conservador y liberal realizan un acuerdo político para alternarse el poder ejecutivo, acuerdo que sería conocido como el Frente Nacional. Durante este régimen se hicieron pactos con los grupos armados que aún pervivían en las regiones más apartadas del país, presentándose como la segunda experiencia de desmovilización con grupos subversivos en el país, la cual se dio bajo el gobierno de Alberto Lleras Camargo (1958 – 1962). Durante este gobierno se da amnistía e indultos a los guerrilleros para favorecer su entrega, se aplican medidas represivas para los bandoleros y se desarrolla un programa de rehabilitación para atender los procesos de reinserción de los ex combatientes. Sin embargo, por presiones políticas se disminuyen los esfuerzos invertidos para este programa y la solución al conflicto se centra en la represión (Villarraga, 2004: 21, 22).

Debido a la violencia que había azotado al país a causa del conflicto bipartidista, el Frente Nacional se presentó como medida para restablecer el orden, pero intentó imponer un olvido con base en la impunidad y una reconciliación sin hacer énfasis en las causas y consecuencias del conflicto. Incluso la amnistía y las políticas implantadas se hicieron para dar legitimidad política de nuevo a los partidos que habían desatado la violencia; “La amnistía era aquí, más un instrumento de legitimación de las élites que de satisfacción a las víctimas. Las urgencias del presente pesaban más que las necesidades del pasado” (Sánchez, 2003: 62).

En los años sesenta tiene lugar un cambio en las dinámicas del conflicto interno colombiano. Los ataques a las autodefensas campesinas hacen que se vuelvan móviles y en el mismo momento empiezan a surgir nuevos núcleos revolucionarios que se unieron a los ya formados, lo que trajo la conformación de movimientos armados como las FARC-EP, el ELN y el EPL, tal como lo hemos señalado anteriormente. Estos movimientos sufrieron varias pérdidas de líderes importantes, sin embargo persistieron con su táctica, con la búsqueda de apoyo en la base social y con el aprovechamiento de extensos territorios hostiles e inexplorados. De esa manera, el conflicto siguió, con un comportamiento

irregular, predominantemente en las regiones y zonas rurales del país (Villarraga, 2004: 22, 23).

Políticas y extensiones de poder frente a un conflicto interno creciente

Para la década del 70, las distintas guerrillas estaban más estructuradas y definidas. Las arbitrariedades del Frente Nacional y la avanzada de las causas estructurales del conflicto, llevaron a la conformación de nuevas guerrillas como lo fue el M-19 y el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), grupo ligado al movimiento indígena del departamento del Cauca que salió a la luz pública en 1985. Los gobiernos posteriores al Frente Nacional tuvieron que desarrollar mecanismos políticos para enfrentar el conflicto que se acrecentaba y gestaba ya no sólo en las zonas rurales del país, sino también en las ciudades.

La primera comisión de paz se crea en 1981; la cual no tenía un poder real de decisión, ni recursos establecidos para sus fines y funcionamiento: “Se trataba, en últimas, de una Comisión de carácter transitorio, de corta vigencia, con funciones de recomendación pero sin ninguna capacidad de decisión” (Arias, 2008: 12). Al no ser acogidas sus recomendaciones, sus principales integrantes presentan su renuncia entre Abril y Mayo de 1982 (Arias, 2008: 11).

Con la llegada a la presidencia de Belisario Betancur, el tema de la paz se vuelve central dentro de la política de gobierno. A diferencia de gobiernos anteriores, se buscaba atacar las causas objetivas de la violencia, impulsar reformas sociales, económicas y políticas que atacaran problemas como el hambre, el desempleo, etc. También se establece la salida negociada al conflicto, el reconocimiento político a los grupos armados como punto de partida para la negociación, y se establecen distintas medidas y dispositivos para tratar el tema de la paz (Arias, 2008: 12, 13).

En los años ochenta se había intensificado la violencia y los enfrentamientos, pero empiezan a darse soluciones negociadas a los problemas de conflicto armado en el país. “El presidente Belisario Betancur reconoció que la paz implicaba concesiones, por lo cual inició el «Plan Nacional de Rehabilitación». En 1982 consiguió la aprobación de la Ley 35 de amnistía general a los rebeldes, adelantó una reforma constitucional que conllevó a la elección popular de los alcaldes y desarrolló conversaciones con los insurgentes a través de una Comisión de Paz” (Villarraga, 2004: 23). Se da participación de la oposición (Partido Comunista Colombiano, Movimiento Obrero Independiente Revolucionario (MOIR), el

Partido Social de los Trabajadores, sindicatos, periodistas y académicos críticos) en los dispositivos de negociación, con la intención de promover la apertura democrática que lideraban durante este gobierno. (Arias, 2008: 12, 13).

La Comisión de Paz fue más incluyente e inició procesos de acercamiento con las guerrillas incluyendo las FARC-EP. La Comisión enfrentó dificultades que se habían presentado en experiencias de negociación anteriores, como la desatención de sus recomendaciones y presiones por parte de los poderes políticos en el proceso (Arias, 2008: 14). Los resultados no fueron muchos, pero este gobierno fue significativo en la medida en que planteó la posibilidad de una solución negociada al conflicto. También se establecieron medidas de apoyo a la reinserción; entrega de tierras, apoyo para vivienda rural, créditos y algunas medidas de atención social para la población ex combatiente (Villarraga, 2004: 23, 24).

En 1984 el gobierno pactó con las guerrillas el cese de fuego de las dos partes. “El 28 de marzo del mismo año se firma un referente importante: los Acuerdos de La Uribe entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional que tuvieron lugar en La Uribe, localidad del Municipio de Mesetas en el departamento del Meta” (Arias, 2008: 14). El 23 de agosto se firman los “Acuerdos de cese al fuego y diálogo nacional” con Autodefensa Obrera (ADO) y el EPL, y el 23 y 24 del mismo mes con el M-19 (Arias, 2008: 15).

Las FARC-EP abogaron por la reforma agraria y reformas sociales, así como por garantías para su reincorporación a la vida civil y política. El M19 y el EPL “propusieron respectivamente realizar un diálogo nacional para un nuevo pacto nacional y la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. El ELN y otras pequeñas guerrillas en formación, como eran el PRT, el Mir-Patria Libre y el Maql rechazaron estos acuerdos para insistir en el despliegue de la lucha armada” (Villarraga, 2004: 24). El Movimiento de Izquierda Revolucionario Patria Libre (Mir Patria Libre) fue una guerrilla conformada por un grupo de guerrillas maoístas leninistas que después de su unificación se adhirieron a un grupo radical de izquierda con presencia en las ciudades del país que se llamaba Movimiento de Izquierda Revolucionaria, este grupo se crea entonces en 1983. Por otro lado el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) aparece como grupo guerrillero en 1984 y tiene sus raíces años atrás en el Partido Comunista Marxista Leninista.

Estos pactos contenían garantías políticas y en el marco de éstas surge la Unión Patriótica (UP) en 1985, como partido y resultado de la iniciativa de permitirle a las FARC-EP el surgimiento de un movimiento legal político así como facilitar su inserción institucional prevista. Con el M19 y el EPL se convocó a una Mesa de Diálogo Nacional con garantías para los voceros políticos de la insurgencia en tregua (Villarraga, 2004: 24, 25).

Todas estas iniciativas, que fueron limitadas en su alcances institucionales y sociales, fueron perdiendo cabida en un contexto político adverso, agitado y reaccionario: las exigencias de la banca internacional, la resistencia a la continuación de estas medidas para solucionar el conflicto (presiones de intereses de parte de las élites políticas y económicas del país), rompimiento de los pactos mientras los grupos armados seguían expandiéndose y realizando extorsión y secuestro, fallo de las comisiones de verificación, asesinatos de líderes y voceros políticos de los grupos insurgentes y la toma del palacio de justicia por el M-19 (Villarraga, 2004: 24). Dentro de los obstáculos al proceso se destaca la persecución sistemática de los miembros de la UP, después de sus buenos resultados de las elecciones de 1986, dejando miles de muertos y la certeza de que no había para ese entonces garantías para la reincorporación a la vida civil y política de los grupos armados insurgentes (Villarraga, 2004: 25).

La tregua se rompe con el M19 y el EPL, pero las FARC-EP insisten en mantenerla y en 1986 firman un Protocolo de Ratificación. Después de varios enfrentamientos con la Fuerza Pública deciden retomar la ofensiva y encaminan sus esfuerzos a la conformación de la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar, la cual surge en Octubre de 1987 con la participación del ELN, MAQL, EPL, PRT, FARC-EP y el Mir Patria Libre (Villarraga, 2004: 24, 25)

Dentro del ambiente de oposición a las medidas de Betancourt y los obstáculos antes mencionados, se dan también acuerdos con los Destacamentos Simón Bolívar y Antonio Nariño del ELN el 9 de diciembre de 1985. También se da una prórroga de los acuerdos de La Uribe con las FARC-EP, ADO y los dos destacamentos anteriormente mencionados, el 2 de marzo de 1986. El 20 de julio, los destacamentos José Manuel Martínez Quiróz e Inés Vega del ELN, deciden acogerse a los acuerdos de La Uribe (Arias, 2008: 16).

Pragmatismo e institucionalización en la solución negociada al conflicto armado

Al final de los años ochenta proliferan los grupos paramilitares, los homicidios políticos y la utilización de métodos ilegales de represión; se intensifican las acciones violentas del narcotráfico y las guerrillas siguen practicando secuestros, extorsiones, entre otras prácticas. En medio de este escenario desgastado y endémico, muchos actores políticos presionaron por un diálogo con la insurgencia como medida para apaciguar la violencia recrudecida, teniendo eco en la “Iniciativa de Paz” de Virgilio Barco, presidente en ese entonces, para conseguir la desmovilización de los grupos guerrilleros. Así, el M19 decide negociar con el gobierno nacional y apartarse de la Coordinadora guerrillera: “suscribieron un pacto político y luego un acuerdo final de paz que implicó el impulso de iniciativas legislativas, el inicio de programas de reinserción y el reconocimiento del M19 como partido político legal” (Villarraga, 2004: 25). Este acuerdo político se firma en marzo de 1990, formalizado por la Comisión de Desmovilización dispuesta para el proceso con el M-19 y de un proceso de paz concertado, que derivó en amnistías e indultos, así como en la conformación del Consejo Nacional de Normalización y la participación activa política de los miembros del grupo, incluso electoralmente, a pesar del asesinato de su líder Carlos Pizarro. (Villarraga, 2004: 26).

El plan de gobierno de Virgilio Barco con respecto a la paz se concentró en establecer procedimientos y metodologías para la misma, caracterizados por la institucionalización y el pragmatismo. Así, se crea la Consejería para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación (CRNR), la cual asumiría de manera institucional lo concerniente a estos temas. Esta consejería “además de ser un organismo ligado directamente a la Presidencia de la República, para coordinar las labores de la reconciliación, cada nivel del gobierno y cada funcionario debía cooperar con su trabajo en la gran tarea del progreso y de la convivencia. Se trataba de una institucionalización de los esfuerzos de reconciliación” (Arias, 2008: 17).

En las elecciones presidenciales de 1990 se perpetraron una serie de magnicidios: el asesinato de tres candidatos presidenciales (Carlos Pizarro, candidato del M-19; Luis Carlos Galán, candidato del Partido Liberal y Bernardo Jaramillo, candidato de la UP). Se evidencia de manera impostergable la necesidad de una apertura política y de consenso, justo cuando “irrumpió un movimiento estudiantil que promovió una Asamblea Nacional

Constituyente. Simultáneamente, el EPL, conjuntamente con el PRT y el MQL, reclamaron adelantar negociaciones de paz en directa relación con la concreción del proceso constituyente” (Villarraga S., 2004: 26)

Con el gobierno de César Gaviria Trujillo hubo continuidad en muchos puntos de la política anterior de paz del gobierno de Virgilio Barco, específicamente en la naturaleza y alcance de los dispositivos de negociación. Su mayor apuesta fue estar a favor de la constituyente (Arias, 2008: 18), la cual desde el periodo de Virgilio Barco ya estaba en discusión a pesar de la fuerte oposición en ese momento. Sin embargo, bajo el gobierno de Cesar Gaviria y gracias al fallo de la Corte Suprema de Justicia al aceptar la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, hubo avances en las negociaciones y en la concreción de nuevos pactos con grupos insurgentes (Villarraga, 2004: 26).

El desarme y los acuerdos de paz se dieron progresivamente durante 1991, permitiendo que el PRT, el EPL y el MAQL participaran en la constituyente y confluyeran en otros proyectos políticos (Villarraga, 2004: 26): “Con estos acuerdos se implementaron nuevos compromisos con la reinserción, los cuales contemplaron la expedición de decretos de indulto, el apoyo a inversiones regionales en las áreas afectadas, el desarrollo de programas en beneficio de los excombatientes y compromisos relativos a los derechos humanos y a la promoción del proceso de paz” (Villarraga, 2004: 26).

Otra experiencia adicional fue la desmovilización por decisión unilateral de aproximadamente doscientos miembros de de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio en 1991, sin reconocimiento por parte del gobierno de interlocución directa ni participación en programas de reinserción. Este “proceso se redujo a la devolución de las armas al Ejército, el otorgamiento de beneficios jurídicos y la dispersión sigilosa de los desmovilizados” (Villarraga, 2004: 27). Esta experiencia de desmovilización se consideró como fallida, ya que parte de los excombatientes fueron asesinados, truncando así un proceso de paz efectivo para el país (Villarraga, 2004: 27).

A pesar del ambiente generado por la constituyente, los diálogos con las FARC-EP y el ELN no consiguieron los resultados esperados y se intensificarían las hostilidades desde 1992 (Villaraga, 2004: 28); en 1991 las fuerzas que integraban la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar y las FARC-EP llevaron a cabo una ofensiva militar sin precedentes (Arias, 2008: 18); sin embargo, se generaron más “pactos de paz o

protocolos de adhesión a los acuerdos de paz antes suscritos, por parte de sectores o de frentes guerrilleros” (Villaraga, 2004: 28).

La Corriente de Renovación Socialista (CRS), conformada por miembros del MIR-Patria Libre y un sector del ELN que se separó, en 1992 inicia conversaciones con el Gobierno, concretando un acuerdo de paz final en 1994. Con este acuerdo “la CRS consiguió la participación en el Congreso de la República con dos parlamentarios, el otorgamiento de indultos, la vinculación a los programas de reinserción y la conformación, en 1994, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos” (Villarraga, 2004: 28). Por otra parte, algunos núcleos minoritarios de guerrilleros del EPL también se acogieron a este acuerdo de paz.

En 1994 se firmó un Acuerdo para la Convivencia con tres grupos de Milicias en Medellín: Milicias del Pueblo y Para el Pueblo, Milicias Metropolitanas de Medellín y Milicias del Valle de Aburrá; todos recibieron indulto y vinculación a los programas de reinserción (Villarraga, 2004: 29).

Hasta el momento, los procesos de desmovilización se habían dado de manera colectiva pero desde 1994 aparece el indulto y la reinserción individual: “en virtud del decreto 1385 se incorporó un mecanismo legal para estimular de manera permanente la desertión de las filas guerrilleras y posibilitar el otorgamiento de indultos individuales y la participación de los beneficios establecidos en los programas de reinserción” (Villarraga, 2004: 31). Estas desmovilizaciones individuales, al no ser producto de negociaciones, no tienen voceros ni cuentan con organizaciones políticas, incluso se criticó el uso de estos desmovilizados para realizar operativos contrainsurgentes, lo cual desviaba el objetivo de la reinserción como proyecto enfocado a la construcción de paz. (Villarraga, 2004: 31)

Los gobiernos de Ernesto Samper y Andrés Pastrana

En el gobierno de Ernesto Samper Pizano se intentó dar un giro al discurso sobre la paz y se crea la figura del Alto Comisionado para la Paz; sin embargo, debido al escándalo que invadió a su gobierno, perdió legitimidad y capacidad para llevar a cabo sus estrategias y políticas (Arias, 2008: 20). En abril de 1995 se crea la primera experiencia a nivel regional como intervención en diálogos y política de paz, y se instala así la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia, teniendo a Álvaro Uribe Vélez como gobernador, la cual fue clave para

diálogos con el ELN y para la posterior desmovilización de las fuerzas paramilitares (Arias, 2008: 21).

EL Movimiento Independiente Revolucionario Comandos Armados (MIR- COAR) que operó en la ciudad de Medellín y se enfocó en la guerra urbana en 1998 firma un acuerdo para su desmovilización; así, “se produjo el acuerdo con los grupos milicianos Mir Coar en la misma ciudad de Medellín (...) Esta fue otra experiencia de proceso de paz y convivencia urbana que consideró compromisos de estímulo a la participación política y comunitaria desde lo local y a programas gubernamentales y estatales en las comunas populares” (Villarraga S., 2004: 29).

Andrés Pastrana Arango llega a la presidencia en 1998, luego de haber iniciado diálogos previos con las FARC-EP, grupo que hasta el momento había sido renuente a tales acercamientos con el gobierno, luego de los frustrados acercamientos de años anteriores. Luego de iniciar el proceso con las FARC-EP y con el otorgamiento de la Zona de Distensión (un área del territorio nacional otorgada a este grupo armado, libre de la intervención de las fuerzas armadas) en noviembre de 1998, el gobierno enfocó sus esfuerzos en el tema de paz, creando la Mesa Nacional de Diálogo y Negociación y el Comité Temático Nacional. El 6 de mayo de 1999 se firma el primer acuerdo entre el gobierno y las FARC-EP, permitiendo, después de muchos años, una agenda de negociación con este grupo armado (Arias, 2008: 21).

Después de muchos tropiezos en el proceso y el congelamiento de los diálogos, “a inicios de 2001 Pastrana y Marulanda firman el Acuerdo de los Pozos reafirmando la necesidad de reanudar los diálogos, agilizar las propuestas de intercambio humanitario, discutir el cese de fuegos, analizar el asunto de la erradicación manual y concertada de los cultivos ilícitos, invitar a la comunidad internacional y entre otras decisiones crear la Comisión de Personalidades (también conocida como Comisión de Notables) con el propósito de encontrar caminos para acabar con el paramilitarismo y disminuir la intensidad del conflicto” (Arias, 2008: 22). Aunque se contó con la intervención de otros países en la negociación y con las condiciones de negociación necesarias, en febrero de 2002 se rompen definitivamente los diálogos con este grupo armado. (Arias, 2008: 21 - 23).

De igual manera Con el ELN también avanzaba el proceso, así que Pastrana decidió acudir a la gestión ya avanzada de actores de la sociedad civil que venía de antes. Dos

meses después de asumir la presidencia se realiza la reunión de Río Verde donde el gobierno y el ELN acordaron los principios bajo los cuales se regiría el proceso. Sin embargo se presentan varios obstáculos, reanudaciones, rompimientos, también la intervención de países facilitadores, pero no se concreta un acuerdo definitivo, tanto por presiones de sectores sociales y de fuerzas paramilitares que veían con desconfianza el proceso, como por la inmovilidad y falta de disposición de dar avances concretos en la mesa de negociación por parte del ELN. Es también durante el gobierno de Pastrana cuando los paramilitares se expanden por el territorio nacional y se registran los más altos índices de violencia a causa de sus acciones (Arias, 2008: 23).

De la política de paz a la política de Seguridad Democrática

Las negociaciones y el reconocimiento político del conflicto interno han sido recurrentes dentro de la historia política nacional desde la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002 – 2010) se reactivan políticas de guerra que ensombrecen el panorama de la paz en Colombia, subordinando toda expectativa de paz a la política central de su gobierno, la renombrada “seguridad democrática”. Fue un viraje crucial y de ruptura con el desarrollo del tema en los gobiernos de las dos décadas anteriores (Villarraga, 2004: 34).

Es así como durante el gobierno de Álvaro Uribe, “la premisa de su política de paz es la negación del conflicto armado y del carácter político de los movimientos alzados en armas contra el Estado, puesto que, como repetidamente lo vienen repitiendo sus funcionarios, la guerra que pudo reconocerse décadas atrás dio paso a un enfrentamiento de carácter terrorista efectuado por un grupo insignificante contra la misma sociedad, mediante ataques de carácter indiscriminado sin que pueda reconocerse como expresión social o movimiento político. En la misma perspectiva, no reconoce que exista una fractura en la sociedad que pueda dar lugar a una confrontación a la manera de guerras civiles. De este modo, no existiendo una dictadura o un régimen autoritario, pierde piso y legitimidad cualquier expresión de resistencia armada y, por el contrario, deriva en un ataque contra el mismo régimen político democrático” (Villarraga, 2004: 40). Tal posición desconoce la historia política, las implicaciones tanto sociales como políticas del conflicto armado interno, los conflictos sociales y políticos no resueltos, las carencias no remediadas de las instituciones democráticas para garantizar derechos a los ciudadanos, la violencia instigada

desde el Estado y el gobierno hacia la sociedad, la falta de garantías a la oposición, entre otros problemas apremiantes de la realidad colombiana.

Desde la campaña electoral y una vez posesionado en el cargo de Presidente de la República, dejó clara su posición frente a la negociación: no habría negociación sin un cese unilateral de hostilidades por parte de los grupos armados ilegales (Arias, 2008: 23). Así, después de cumplida la condición habría tiempo para el desarme y garantías para la reinserción (Villarraga, 2004: 37) Dentro de sus declaraciones no se negó a los diálogos con los grupos insurgentes, pero siempre y cuando se acogieran a sus condiciones; también dejó clara la negativa del gobierno en negociar temas sustanciales (Villarraga, 2004: 37); frente a esta posición los grupos insurgentes manifestaron su desacuerdo mientras los paramilitares las atenderían, haciendo posible desde el inicio del gobierno acercamientos informales que abonarían el terreno de negociación posterior (Arias, 2008: 23). “De tal manera, aunque la política gubernamental no descarta el tratamiento político con los alzados en armas, lo entiende como un sometimiento a la institucionalidad, sin abordar una agenda sustancial, es decir, lo hace sin comprometerse en temas de reformas socioeconómicas e institucionales de fondo, conceder despejes militares de territorios y sin reconocer el carácter político de las organizaciones insurgentes, por lo cual procede a criminalizar de manera absoluta su comportamiento como terroristas y a equiparlos a los grupos paramilitares” (Villarraga, 2004: 38).

Durante el gobierno de Uribe Vélez se “suprimió la Dirección General para la Reinserción y el programa de Reinserción, para dar lugar al Programa de Reincorporación a cargo de una Comisión Intersectorial con responsabilidades de los ministerios de Defensa e Interior. Se introdujo la reforma a la ley sobre el orden público, que posibilita los procesos de paz, para suprimir el carácter político de las organizaciones armadas ilegales, de forma que se traten de manera similar los guerrilleros y los paramilitares. En este sentido, la política gubernamental utiliza el mecanismo de la desmovilización individual, ahora modificado, y promueve como política la deserción de estos grupos irregulares.” (Villarraga, 2004: 31).

Las negociaciones con los paramilitares fueron un punto central dentro de la gestión del gobierno de Uribe Vélez, así mismo fue un cambio notorio de la política de paz en Colombia, ya que anteriormente sólo se había dialogado con las guerrillas Las labores de

acercamiento con los paramilitares quedaron a cargo del Alto Comisionado para la Paz de entonces, Luis Carlos Restrepo, después de haber sido adelantadas por miembros de la Iglesia Católica y de la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia. Sin embargo estas negociaciones fueron posibles por una reforma jurídica adelantada por el gobierno en curso: dado que al paramilitarismo se le había negado históricamente el reconocimiento político, y el Estado Colombiano estaba obligado por una ley (Ley 418 de 1997, Capítulo 1) a otorgarle status político al grupo armado con el que pretendiera iniciar un proceso de negociación., el gobierno de Uribe Vélez logró la reforma de esta ley, eliminando la condición del reconocimiento político para la negociación (ahora ley 782 de 2002) y así empezar a adelantar el proceso con los grupos paramilitares (Arias, 2008: 23, 24).

El 29 de Noviembre de 2002 las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) declararon su disposición para entrar en diálogos con el gobierno nacional y se comprometen a iniciar el cese hostilidades desde el 1 de diciembre del mismo año. Dos días después de la declaración el Bloque Central Bolívar, poderoso dentro de la estructura paramilitar, manifiesta igualmente su disposición. La respuesta del gobierno fue conformar una Comisión Exploratoria de Paz con el fin de “propiciar acercamientos y establecer contactos con los Grupos de Autodefensas Unidas de Colombia, AUC; con las Autodefensas Campesinas Bloque Central Bolívar, BCB, y Vencedores de Arauca; y con el Grupo de Autodefensas Alianza del Oriente, conformada por las Autodefensas del Sur de Casanare, Meta y Vichada” (Arias, 2008: 23 -24).

Para diciembre de 2002 la mayoría de contingentes paramilitares había realizado las declaratorias de cese al fuego. “El 15 de julio de 2003 se produjo el primer Acuerdo de Santafé de Ralito para Contribuir a la Paz En Colombia, mediante el cual las AUC se comprometieron a desmovilizar la totalidad de sus miembros en un proceso gradual hasta diciembre de 2005 y a concentrarlos en zonas acordadas. Igualmente ratificaron el compromiso con el cese al fuego” (Villarraga, 2004: 45). “El 13 de mayo de 2004 se produjo el segundo acuerdo en Santafé de Ralito, Acuerdo de Establecimiento de la Zona de ubicación, en la cual se instaló el Estado Mayor Negociador de las AUC, reestructurado en su mando bajo el liderazgo de Salvatore Mancuso, quien en su intervención exigió garantías jurídicas que no implicaran ir a la cárcel y argumentó que no eran una fuerza derrotada” (Villarraga, 2004: 46).

A principios del 2004 se suscribe un convenio con la Organización de Estados Americanos (OEA) para el acompañamiento en el proceso de paz en Colombia, titulado: Misión para el Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, OEA -MAPP/OEA-, la cual vio la necesidad de realizar informes periódicos y solicitar el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en lo concerniente al tema, dadas las críticas que se habían expresaron frente a su papel y su convocatoria dentro del proceso de paz (Villarraga, 2004: 45)

En el 2003 se realiza “la primera desmovilización colectiva del proceso gracias al desmonte del bloque Cacique Nutibara y 868 de sus miembros. En el 2004 el gobierno logra la unificación de los paramilitares en una sola mesa y el 1 de julio se inicia formalmente el proceso de negociación que terminaría con la desmovilización de 31.671 de sus miembros en agosto de 2006” (Arias, 2008, 24).

En las desmovilizaciones se ha concedido indulto a un gran número de autores de crímenes de lesa humanidad; muchos de los paramilitares fueron indultados, ya que el obstáculo formal para otorgarlo era tener procesos judiciales en curso, los cuales eran pocos en comparación con los crímenes cometidos registrados (Villarraga, 2004: 32); Por tal razón se ha cuestionado mucho este modelo para asumir los procesos de paz, debido a la impunidad que genera y la carencia de un instrumento legal que garantice el cumplimiento de los principios de verdad, justicia y reparación a las víctimas (Villarraga, 2004: 32).

Otro punto que ha sido criticado es el ofrecimiento de recompensas a los desmovilizados por su cooperación con acciones militares e información a la justicia, ya que ha generado como resultado acciones militares realizadas fuera de los parámetros legales así como falsas incriminaciones (Villarraga, 2004: 32); también es relevante hacer hincapié en los efectos que una medida como esta conlleva dentro de una política de paz, ya que los desmovilizados deben volverse a involucrar en acciones de guerra, lo que dificulta su proceso de reintegración y les genera problemas de seguridad (Springer, 2005: 293-330).

En general, la efectividad de estas estrategias se ha puesto en duda, ya que a pesar de la cantidad de desmovilizados registrada, el conflicto armado continua, y el accionar de los paramilitares no ha dejado de existir en su totalidad sino que ha tenido transformaciones. “A pesar de los altos registros conseguidos, los fenómenos guerrillero y paramilitar no se han desarticulado ni sufren golpes estratégicos ni definitivos. Por el

contrario, no obstante ciertos resultados en términos de represión estatal, algunos golpes significativos a la insurgencia y del incremento de sus deserciones, las guerrillas persisten en el conflicto armado, sin que se produzca una variación fundamental en la situación; entre tanto, los grupos paramilitares, aunque sea importante y real el avance en su desarme, se han expandido como fenómeno puesto que a la vez han afianzado formas legales e ilegales de incidencia en poderes locales, regionales y nacionales” (Villarraga, 2004: 32).

En las negociaciones durante este último gobierno con los paramilitares no se tuvieron en cuenta otros actores armados y se hicieron bajo una asimetría consciente e intencional; además fueron lentas y estuvieron al borde del colapso por problemas de drogas y dinero que provocaron guerras internas dentro de las autodefensas. El acuerdo de Santa Fe de Ralito (15/07/2003), de carácter preliminar, no alude a temas como la amnistía, las tierras y la seguridad, no tiene contraprestaciones ni exigencias, “es un acuerdo de negociación carente de contenidos” (Springer, 2005: 317). El segundo acuerdo contiene las mismas falencias, eludiendo todo contenido político, económico o social (Springer, 2005: 319, 320).

El marco jurídico posterior, la ley de justicia y paz, tenía más restricciones que sus antecesoras, sin embargo tiene problemas técnicos y políticos, principalmente por el hecho de que no provee mecanismos para asegurar el desmantelamiento permanente y tampoco permite develar los autores intelectuales y las redes de poder regional que auspiciaron y financiaron la violencia paramilitar. Además tiene muchas contradicciones y fallas que la hacen imposible de aplicar a cabalidad (Springer, 2005: 293-330)

CAPÍTULO SEGUNDO

Procesos de socialización en los grupos armados

Este capítulo es la pieza inicial clave para comprender el tránsito a la vida en la ciudad. La mayoría de combatientes experimentan una ruptura drástica con todo lo aprehendido durante su socialización primaria en el grupo armado; tiene lugar entonces un nuevo proceso de socialización secundaria en el cual se reconfigura su sistema de valores, sus prácticas cotidianas, la disciplina corporal, su manera de relacionarse con el entorno y con las personas que comparte su nueva realidad. Se consigue con esta socialización la configuración de sujetos combatientes a través de prácticas y procesos, así como la apropiación de nociones de realidad adquiridas que se asientan y se expresan a través del *habitus*, entendiendo por esto “sistemas perdurables y transponibles de esquemas de percepción, apreciación y acción resultantes de la institución de lo social en los cuerpos” (Bourdieu y Wacquant, 1995: 87). Es la incorporación de lo social y más que predecir costumbres, interioriza una relación activa y creadora con el mundo, configurando y dotando de sentido a su realidad. (Bourdieu y Wacquant, 1995: 87)

Siguiendo a Bourdieu, el escenario del conflicto podría entenderse como un campo en donde los distintos agentes – los actores armados, el Estado y la sociedad civil- desarrollan distintas estrategias y configuran interacciones dentro del mismo, el cual extiende sus propio efectos (efectos culturales, sociales, políticos y económicos del conflicto armado interno), mientras es constantemente mediado, construido y transformado por estos agentes (cambio de estrategias, desmovilizaciones, movilizaciones, acción colectiva, represión, etc.). Los actores armados emprenden procesos de socialización distintos que responden a sus propias estrategias y que desarrollan *habitus* y *disposiciones perdurables*, entendiendo estas como “virtualidades o potencialidades en relación con una situación determinada” (Bourdieu y Wacquant, 1995: 123), y configurando así sujetos combatientes que luego, en el proceso de reintegración, enfrentan nuevos procesos de socialización, nuevas estrategias y en general una nueva vida. Sin embargo, los procesos de socialización previos no se olvidan, el pasado se reinterpreta con base en el presente (Berger y Luckmann, 2001: 195-202) y en ese sentido hacen parte, de cierta manera, del

proceso emprendido posteriormente en la civilidad, siendo indispensables para entender la transición recorrida por los excombatientes.

Este capítulo ha sido construido a partir de las entrevistas realizadas a los excombatientes residentes en la ciudadela y de la lectura de varios textos (Cárdenas, 2005; Medina, 2009; Blair, 2004; Blair, 2005; Wills, 2005) que esbozan factores esenciales en los procesos de socialización en los grupos armados. De acuerdo al desarrollo de las entrevistas y el análisis de los textos, este capítulo abordará cuatro factores principalmente: el entrenamiento e iniciación del combatiente así como la exposición de algunos principios asociados a la guerra que se replican en el tiempo; la vida cotidiana, que refiere las labores rutinarias dentro del grupo y anécdotas expresadas; normas, sanciones, jerarquías y poder, en tanto son elementos claves para entender las estructuras internas y las relaciones sociales dentro de los grupos; y por último, la percepción del otro donde se contemplan las distintas relaciones con (y visiones sobre) el Estado, otros grupos armados y la sociedad civil, dependiendo de las condiciones internas de cada grupo. A lo largo del abordaje de estos distintos factores que constituyen y configuran el proceso de socialización, en tanto generan los marcos sociales y culturales en los que los sujetos se socializan, saldrán a la superficie los valores imperantes dentro de las organizaciones, las concepciones sobre sí mismos como sujetos combatientes y en general las nociones de realidad adquiridas bajo el escenario del conflicto.

Dadas las diferencias entre los grupos insurgentes y los grupos contrainsurgentes, cada factor se intentará explorar por separado dependiendo de la naturaleza de la organización, incluso se hace uso de las comparaciones porque en muchos casos permiten explorar y exponer una visión más completa, en cuanto los actores armados están generando constantemente estrategias que se corresponden y se contradicen, motivadas por el enfrentamiento mutuo. En muchos aspectos, se encontraron semejanzas dado que estos actores responden por igual a la rudeza y necesidades de la guerra, sin embargo, es importante resaltar que las diferencias se destacan y por eso vale la pena explorarlas por separado.

Para el caso de los grupos insurgentes, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), se

establecerán las diferencias principalmente de origen y estrategias dentro del campo, pero fundamentalmente las prácticas y pautas socializadoras son semejantes en muchos aspectos.

La exploración de la vida cotidiana y de las pautas sociales que la configuran es de gran relevancia dado que a través de las prácticas sociales los sujetos asumen una realidad social instaurada y participan en su reproducción: “la vida cotidiana es el conjunto de actividades que caracterizan la reproducción de los hombres particulares, los cuales, a su vez, crean la posibilidad de la reproducción social” (Heller, 1977: 20). Siguiendo a Bourdieu, a través de las practicas cotidianas se establecen relaciones de poder, regulación y dominación que incorporan hábitos, disposiciones y se construyen cuerpos según la orientación política y militar de los grupos (Medina, 2009: 7-9).

Se entiende entonces la vida cotidiana manifestada en las rutinas vividas por los combatientes, en las tareas, actividades y procesos que generaban la idea de cotidianidad dentro del grupo, que conformaban y reproducían un modo de vida particular y una noción de realidad. Aparecen así una gran cantidad de aspectos por considerar si se quiere esbozar una idea del proceso de resocialización y así poder comparar modos de vida, contrariedades y beneficios de la civilidad, ya que esta última representa una ruptura y un cambio cultural a grandes niveles en el cual se puede indagar por las transiciones y permanencias en los sujetos.

Antes de analizar los distintos aspectos de los grupos armados es necesario hacer unas anotaciones previas a manera de presentación de elementos esenciales que los caracterizan. Las guerrillas son organizaciones burocráticas, jerarquizadas y estrictas en la regulación de actividades, donde las prácticas de la vida cotidiana, así como las faltas y sanciones están establecidas, categorizadas y reglamentadas. Tienen un régimen generalizado expresado en sus estatutos y reglamentos, los cuales logran abarcar la totalidad de los espacios sociales con el propósito de generar adhesión y garantizar lealtad a la organización, convirtiéndose en el único espacio para establecer relaciones sociales. De esta manera, las FARC-EP y el ELN pueden ser consideradas como instituciones “voraces” y “totales” (Medina, 2009: 59-64). Las instituciones totales, según Goffman, acaparan todos los espacios sociales y aspectos de la vida de los individuos, regulando las prácticas, necesidades y tiempos; una característica importante de este tipo instituciones es la presencia de organizaciones burocráticas para manejar las necesidades de los individuos

(Goffman, 1961, en Medina, 2009: 59,60). Las instituciones voraces, según Lewis Cosser, son aquellas que precisan la lealtad y adhesión total de los individuos, buscando extraer al sujeto de las otras esferas sociales e imponer un control social estricto que elimina la división entre vida pública y privada (Cosser, 1978, en Medina, 2009: 59- 64).

Las diferencias entre las FARC-EP y el ELN radican primordialmente en que el último grupo se considera más político y tuvo sus orígenes en los grupos de intelectuales urbanos, mientras el primero es de origen predominantemente campesino y se ha fortalecido particularmente a nivel militar, las FARC-EP “se entiende como un ejército que quiere ir a la ofensiva gracias al número considerable de combatientes y de material de guerra que posee, por eso combaten, en muchas ocasiones, en las mismas condiciones del ejército nacional, mientras que el ELN, en cambio se entiende como una guerrilla móvil inferior en combatientes y en material de guerra” (Cárdenas, 2005: 196).

En los paramilitares, aunque existe imposición y regulación de las prácticas cotidianas, no abarca todos los espacios sociales. La regulación es menos estricta pero más autoritaria dado que no depende de la misma manera de sus estatutos, reglamentos y vías burocráticas, dejando a los mandos la posibilidad de un manejo más relativo y autónomo de su poder. Hay más tiempo libre y se permiten otros espacios de socialización: por lo general salen más a los pueblos e interactúan con personas que no hacen parte del grupo. Las relaciones internas del grupo suelen estar intervenidas por el miedo, la desconfianza y el poder, respondiendo a dinámicas internas asociadas al autoritarismo y al objetivo central de formación que tienen con sus combatientes: entrenarlos como “mercenarios” (Medina, 2009: 67, 68).

Entrenamientos y principios replicados en el tiempo

En los grupos paramilitares el entrenamiento es primordialmente físico pero está acompañado de un entrenamiento psicológico necesario para realizar una labor más asociada al mercenarismo (teniendo en cuenta su causa original y su desarrollo en el escenario del conflicto colombiano) que consiste básicamente en la “práctica de estímulos para preparar al combatiente –patrullero- en el oficio de matar a su enemigo “natural”: la guerrilla” (Cárdenas, 2005: 215). Al combatiente se le enseña a acostumbrarse a la muerte, a no sentir temor, a la eliminación y a la “profanación” del cuerpo con vida y (o) sin ella; en

muchas de sus ejecuciones violentas no solo se quita la vida sino que también “se mata a la muerte” (Cárdenas, 2005: 224).

Se hace necesario entonces el olvidar cualquier manifestación sentimental y de debilidad dentro de sus combatientes porque interfieren con su trabajo (Cárdenas, 2005: 218); es parte de su entrenamiento y de su hacer como combatiente el desarrollo de prácticas sobre el cuerpo de las víctimas que implican crueldad y destrucción, con intenciones específicas de impunidad y generación de terror dentro de las ejecuciones violentas producidas por la naturaleza y agudización del conflicto (Medina, 2009: 30 - 37; Blair, 2005: 166-182).

Las prácticas violentas como las masacres o ejecuciones públicas son el reflejo o el producto de los procesos de entrenamiento mercenario de este tipo de grupos que se fundamentan en la eliminación de sentimientos y familiaridad con la muerte. De esta manera, se obliga a los combatientes en entrenamiento a ejercer prácticas violentas como matar personas cercanas en público, cortar sus cuerpos y (o) golpear. El informe de la Human Rights Watch sobre niños combatientes en Colombia *Aprenderás a no llorar* (2004), ilustra con testimonios de menores entrevistados la dureza y crueldad de los entrenamientos en estos grupos: “En el curso de los paramilitares maté a alguien. Era un amigo que no aguantó, él no pudo terminar el curso. Fue una prueba. Me pasaron un machete para descuartizarlo mientras estaba vivo. Él estaba amarrado. Me rogó no matarlo. El comandante estaba mirando, me decía: “¡Hágale, hágale!” Todos los pelados estaban ahí. Finalmente lo hice... Me sentí muy triste y lloré.” (Human Rights Watch, 2004: 49).

Estas prácticas, especialmente las masacres, se condensan en un *exceso* donde se diversifican las formas de violentar los cuerpos, donde se busca la destrucción total (además de los intereses económicos y políticos que motiven la ejecución de estas) y se prolonga tal acto público para generar más impacto. “Después de esto, el cuerpo de la víctima queda destrozado. La masacre no busca eliminar sin dejar rastro, por el contrario, busca desfigurar y mutilar el cuerpo humano. (...) Además ellos no están obligados a disimular, su acción está a la vista de todo el mundo a diferencia de la tortura que es clandestina. Es la *teatralidad del exceso*. La masacre es una acción pública que escapa a la vigilancia y a la moral sociales” (Blair, 2005: 55).

El entrenamiento de carácter mercenario responde en parte a la superioridad táctica militar de la guerrilla que los ha obligado a generar estrategias no de combate, sino de aislamiento a través del ataque a sus bases de apoyo (masacres, desapariciones) y eliminando vías de abastecimiento, igual que, como lo expresa Medina, “quitarle el agua al pez” (Medina, 2009: 17). Sin embargo cabe anotar que las ejecuciones públicas y prácticas violentas “excesivas” como las masacres que han sido autoría de las guerrillas han sido producto de las contingencias de la guerra, más no de una enseñanza previa, como si es el caso de los paramilitares (Medina, 2009: 37).

En las FARC-EP el entrenamiento es físico y político. Se traduce en la rigurosidad de una organización militarizada y burocratizada. La enseñanza de las prácticas propias de la guerra (el manejo de las armas, el entrenamiento físico, etc.) es simultánea con la enseñanza de los principios ideológicos y políticos del grupo. Los combatientes de la guerrilla son entrenados y formados para una lucha fundamentada en los principios teóricos políticos del movimiento, con principios y reglas establecidas para su funcionamiento, jerarquías y estatutos que se deben respetar y que responden a una estructura militar que requiere de lealtad, rigurosidad y habilidad.

Además de la enseñanza de las pericias necesarias para la guerra y la supervivencia en territorios hostiles, este grupo enseña a sus combatientes la forma en que se debe tratar a la sociedad civil, haciendo énfasis en el respeto, la cordialidad y la persuasión, ya que son sus bases de apoyo. Las organizaciones guerrilleras hacen parte de la vida cotidiana de las comunidades y sus relaciones se afianzan a través de esa interacción constante. Dentro de los reglamentos está establecida la manera en que se debe entablar comunicación con los civiles y de la misma manera existen sanciones claras para el incumplimiento del protocolo. Aunque esté reglamentada esta interacción social externa, se han visto muchos casos en los que combatientes de la guerrilla atentan contra población civil ejerciendo violencia sobre ésta (Medina, 2009: 102, 106).

El entrenamiento físico es igual para hombres y para mujeres dentro de la organización, sin embargo en esta aparente igualdad lo que tiene lugar es una eliminación de lo femenino para que todos y todas se conviertan en “hombres para la guerra”. Se reproduce así la asociación histórica de las labores de la guerra con las habilidades propiamente masculinas, excluyendo lo femenino ya que es asociado con la debilidad y el

cuidado mas no con la destrucción; como lo expresa Wills: en “todas las áreas del pensamiento humano la guerra ha sido reconocida e identificada con atributos masculinos” (Wills, 2005: 65) y lo mismo pasa dentro de los grupos armados, incluso en aquellos que promulgan la igualdad de género como las FARC-EP. Así lo manifiesta una excombatiente al hablar sobre la ausencia del género femenino y el predominio de lo masculino en el grupo:

“Allá no existen distinciones, allá no existe esto que le dicen género femenino, todos lo mismo, allá nunca dicen tengo tantas mujeres o tantos hombres, no, tengo tantos hombres, tengo 50 hombres, ahí está incluido hombres y mujeres porque todos realizamos la misma actividad” (Entrevista a desmovilizada de las FARC-EP No 004)

Un testimonio de una excombatiente de este grupo armado logra expresar en una frase las relaciones y conflictos de género en la organización, los imaginarios sobre la mujer y el hombre en medio de la guerra; muestra cómo estos siguen reproduciendo imágenes sobre el hombre fuerte y valiente y la mujer delicada, sentimental y dada al cuidado. *“uno ya tiene que olvidarse de sentir, tiene que olvidarse de opinar, muchas cosas o sea allá uno deja de ser mujer para ser un hombre más de la guerra”* (Entrevista a desmovilizada de las FARC-EP No 003).

Es claro que, aunque en el discurso esté la igualdad de género como principio, la inclusión de mujeres en los grupos armados y el hecho que realicen actividades de entrenamiento y que porten armas, no demuestra que se hayan alterado las relaciones de dominación y los imaginarios de la feminidad asociados a la debilidad, al cuidado y a la atención. “El que las mujeres porten armas no es sinónimo de que se alteren los arreglos de género que imperan en una sociedad” (Wills, 2005: 79).

El ELN tiene muchas similitudes con las FARC-EP en su entrenamiento y en sus prácticas cotidianas. Se inculca la enseñanza en el manejo de las armas y objetos de combate, en tácticas de supervivencia en territorios hostiles y ambos tienen la formación política y organizacional obligatoria a través de charlas en las que se imparten las normas, principios, reglamentos, doctrinas, sobre los símbolos y héroes de la historia de la lucha armada, sobre la realidad política nacional y sobre los enemigos declarados como el

imperialismo yanqui y el Estado (Cárdenas, 2005: 197-202; Human Rights Watch, 2004: 48).

Una vez entra un nuevo combatiente al ELN inicia un entrenamiento en la realización de prácticas cotidianas (cortar y llevar leña, hacer trincheras, hacer aseo, etc.) que dura de dos a cuatro meses, luego si hay un número considerable de combatientes en su periodo inicial y si las condiciones de la guerra lo permiten, se abre una escuela de combatientes donde se desarrolla todo el entrenamiento militar y político del grupo. La primera fase del entrenamiento busca evaluar las capacidades de los combatientes que entran y diagnosticar si son buenos para ser guerrilleros o si hay que devolverlos a su casa (Cárdenas, 2005: 197, 198).

En cuanto al reclutamiento en las guerrillas se declara que es voluntario y selectivo como en el caso del ELN, sin embargo, tanto de parte de este grupo como de las FARC-EP, han usado la fuerza para integrar más combatientes a sus filas: “el reclutamiento forzoso es la excepción más que la regla en Colombia. Rara vez se produce como una operación militar de captación forzosa (...) Suelen utilizarse métodos de presión más sutiles. La inducción y persuasión se respaldan con frecuencia con amenazas muy veladas (...) Esta práctica es mucho menos habitual en los grupos paramilitares, probablemente porque pagan un salario a los combatientes y les es más fácil reclutarlos” (Human Rights Watch, 2004: 71, 72).

Vida cotidiana: rutinas y prácticas formadoras

Un día normal en las guerrillas suele tener las mismas referencias: levantarse a las 4 y media de la mañana, arreglar su ropa y sus elementos, realizar las tareas encomendadas como traer leña o hacer guardia; en caso de que tenga que hacer la comida se debe levantar un poco más temprano y todo el día lo dedica a cocinar y tener los alimentos a la hora exacta; siempre se come y se duerme a la misma hora, los horarios sólo cambian para realizar la guardia y los domingos o el día de descanso señalado; tienen un tiempo establecido para el baño; hay también horas establecidas para las charlas (su espacio de estudio y socialización política más recurrente) y para escuchar las noticias para luego socializarlas y debatir. Todo se sigue bajo un estricto régimen de horarios, órdenes, minutas, permisos, inducciones y necesidades.

“Las dinámicas eran levantarnos a las 4:50 de la mañana, hacer fila para el tinto, pedir permiso para ir al baño, para ir a ensuciar, para cepillarse, para uno irse a bañar era por escuadra cuando le daban a uno veinte minutos para irse a bañar, eso era rapidito, uno tenía que tener todo listo. Uno se levantaba a arreglar su equipo porque en cualquier momento nos tocaba salir corriendo, la gimnasia guerrillera, ir a traer leña y si a uno le tocaba rancho le tocaba pararse a la una, doce de la noche para cocinarle a 50, 100, 200 hombres según, era entre varios que nos ponían a cocinar (...) si se me quemaba el arroz entonces me sancionaban tres cuatro veces más, si no entregábamos la comida a tales horas... por lo menos allá se desayuna a las 6 de la mañana, se almuerza a las 11 de la mañana y se come a las cuatro de la tarde y si uno no daba a esas horas lo sancionaban, todo era así medidito. A las seis de la tarde uno ya tenía que estar listo para las orientaciones políticas que uno empezaba a debatir las noticias, tener muy pendientes las noticias, escribirlas, debatirlas” (Entrevista con desmovilizada de las FARC-EP No 003).

“Siempre hay algo que hacer” es la expresión más común que aparece en las entrevistas con excombatientes de las guerrillas, además siempre se hace algo con alguien más, lo cual refuerza la idea de colectividad vigente y se hace central para la identificación de los sujetos con el grupo como referente identitario principal. “Nunca se está solo, pero tampoco se está tan junto”. Las relaciones, su cercanía y distancia también pasan por las minutas; la burocracia de los grupos alcanza hasta las relaciones sentimentales y sexuales de los combatientes (se pide permiso para tener sexo en caso de que sea una pareja ocasional, o en caso de que se reconozca como una pareja estable se aplican los estatutos conyugales), provocando que la esfera privada sea casi inexistente (Medina, 2009: 64). La idea de generar lealtad distinta a la del grupo aparece amenazadora.

“allá el grupismo como se ve en muchos lados, que el grupito por aquí y allá, no se puede porque eso puede ser de desertión o puede ser de infiltrados (...) Pues dentro de un grupo armado uno no tiene derecho a enamorarse, a uno lo dejan junto pero siempre tratan de separarlo a uno porque pues uno enamorado uno piensa en una familia, en un hogar, en estar felices hasta que la muerte los separe y todo el rollo, entonces no les conviene que dos personas piensen desertarse” (Entrevista desmovilizada de las FARC-EP No 003).

Sin embargo, la solidaridad y familiaridad con sus compañeros es uno de los elementos que logra crear lazos de cohesión dentro del grupo, más aún si tienen lugar en medio de la hostilidad del monte y del conflicto. Muchas veces los lazos afectivos entre

combatientes reemplazan los vínculos familiares (Medina, 2009: 64, 65). Los lazos afectivos y solidarios, la familiaridad y el acompañamiento constante sin duda son algo que se extraña después.

En los grupos paramilitares el control de las prácticas cotidianas es poco regulado y no se tiene un orden rígido y burocratizado. Se caracterizan por tener un entrenamiento más de tipo mercenario, por lo cual la rigidez militar propia de las organizaciones guerrilleras no se traslapa en las estructuras internas de estos grupos. Tampoco buscan crear filiaciones y cohesión total, posibilitando que los combatientes tengan más acceso a otros espacios de socialización; aunque hay una ruptura con la vida familiar tienen más permisos para acceder a otros momentos de la vida social y les es más fácil comunicarse con sus familias. Dentro de estos grupos también se crean lazos afectivos fuertes atravesados por sentimientos de familiaridad (Medina, 2009: 66-68), aunque las relaciones internas estén gobernadas por la tensión y la desconfianza (Cárdenas, 2005: 220).

Generalmente las actividades diarias empiezan a las 8:00 am, hay que recoger el equipo, bañarse y cambiarse, traer leña y agua, y hacer comida. Luego hay tiempo para escuchar música, escribir, descansar, dormir, jugar fútbol, jugar cartas con los amigos o reunirse con estos a fumar cigarrillos y conversar (Medina, 2009: 124).

En estos grupos los combatientes tienen más tiempo libre que en los grupos guerrilleros debido a que su regulación es más flexible, también tienen más tiempo para el ocio y sus relaciones sociales están menos intervenidas (Medina, 2009: 66-68). El carácter de la organización como fuente de ingresos para sus combatientes, cambia radicalmente la socialización en los paramilitares, mientras en las guerrillas los contenidos políticos, ideológicos y militares sostienen la cohesión del grupo, actuando como fuerzas socializadoras radicalmente diferentes.

Jerarquías, sanciones y poder

Cada uno de los grupos armados tiene una estructura definida de jerarquías y poderes dentro de la organización. Las guerrillas son altamente burocratizadas y tienen unas estructuras complejas y definidas por funciones, mandos, cargos y tareas. En los grupos paramilitares las jerarquías también establecen una estructura y un orden, incluso más arbitrario y con un manejo del poder mucho más desmedido que en los grupos insurgentes,

revelado en las sanciones impuestas. Su carácter mercenario implica un manejo del poder y de las estructuras organizativas distintas a la de los grupos insurgentes, caracterizadas por un régimen militar, alta burocratización y especialización en los cargos y trabajos.

En las jerarquías de los grupos paramilitares, los comandos son quienes ostentan el poder, un poder autoritario que impone sanciones, recibe beneficios, como no participar en las labores cotidianas (recoger leña o cocinar), pero tiene la responsabilidad de controlar los combatientes que están bajo su mando; “el comando, autoridad todopoderosa, en todos los casos es elegido a dedo por el superior de turno quien exclusivamente tiene en cuenta sus capacidades en el combate y, la disciplina y sumisión que haya mostrado desde el inicio de su militancia puesto que no hay ningún tipo de cualidad política que sea considerada para ocupar el “cargo” a pesar de que en la jerarquía haya comandos políticos” (Cárdenas, 2005: 216). Así pues, la elección de tal cargo dentro de la organización es trabajo de los superiores; los comandos asumen tal otorgamiento de posición como un ascenso en su trabajo y un aumento tanto de responsabilidad como de sueldo; de igual manera mantienen las relaciones con las personas a su cargo exentas de sentimentalismos; asumen las relaciones desde lo exclusivamente laboral para poder mantener la verticalidad en la estructura de poder y el rango dentro de la organización (Cárdenas, 2005: 217).

En las guerrillas se siguen las estructuras verticales de las organizaciones militares, y algunas prácticas como el ascenso por reconocimiento dentro del grupo. El comandante debe cumplir requisitos como la disciplina en su formación, la habilidad militar y política, así como el “don de mando” del que habla Cárdenas (2005) que alude principalmente al atributo militar de relacionarse positivamente con sus subordinados y generar relaciones y percepciones positivas sobre sí mismo dentro del grupo. Cárdenas cita las palabras de Jacobo Arenas para definir este don: “crear en un subordinado el orgullo de ser dirigido por él” (Cárdenas, 2005: 168).

“Los comandantes siempre suben primero por su militancia, su régimen militar porque hay mucho descarriado también, la embarran, uno allá no puede, si le dieron media hora es media hora” (Entrevista con desmovilizada de las FARC-EP No 003).

Aunque la interacción entre mandos y combatientes en la guerrilla está regulada, hay posibilidades de generar relaciones más o menos flexibles (Cárdenas, 2005: 166).

“Los comandantes de frente, empieza un comandante de escuadra que son 12 hombres, comandante de compañía que son 25 - 50 hombres, comandante de guerrilla que ya son de 50 a 100 hombres, comandantes de frente que manejan de 300 a 600 hombres. Todos esos comandantes siempre están ahí en el frente, pero era que si yo quería hablar con el comandante de frente que teníamos, no permiso para hablar con el comandante tal, no, primero el conducto regular, este le contaba a este, haga de cuenta el ejército, la policía todo igual” (Entrevista con desmovilizada de las FARC-EP No 003).

Las sanciones son una muestra ejemplar de las distintas estructuras de poder que se configuran en los grupos armados; en las FARC-EP las sanciones son públicas y burocratizadas, todas, en teoría, están reglamentadas y se establecen según la falta o el error. Las sanciones difieren si es un error militar o político y generalmente se remedia con estudio, charlas políticas o trabajo físico adicional en las tareas cotidianas; *“a los dos meses te leen los reglamentos, y dice esto es así, cada falta te van midiendo a que sanción pertenece cada falta, un delito, qué es un delito, qué es una falta”* (Entrevista con desmovilizada de las FARC-EP No 004).

Sin embargo, también existen prácticas que escapan a lo reglamentado y que responden a las estructuras de poder verticales y dinámicas internas del grupo; tal como lo muestra Cárdenas: *“pese a que los documentos de la organización sean sagrados muchos excombatientes sostienen que “los estatutos podrán decir lo que quieran pero los que juzgamos somos los guerrilleros””* (Cárdenas, 2005: 169); aparecen así sanciones no estipuladas como la exclusión y rechazo del grupo, pero también beneficios y laxitudes que otorgan posiciones de mando dentro de la jerarquía o la simpatía del grupo, o privilegios como no tener que realizar tantas tareas o poder tener un hijo(a).

“Dentro de la guerra uno no puede tener hijos, lo obligan a abortar pero pues gracias a que toda la familia de él pertenecía a las FARC-EP pues me dejaron tener mi hijo y al mes y medio ya lo deje, lo hicieron llegar a donde mi mamá” (Entrevista con desmovilizada de las FARC-EP No 003),

“Yo tuve mi hijo, y yo pues nunca lo había planificado y quise tener un hijo porque igual me sentía como sola y decidí tener el niño, pero si desde que quede en embarazo del niño dije yo: “si es una niña me voy, si es un niño sigo”, salió un niño, me quede no fui capaz. Yo estuve con él, tuve la oportunidad porque como el papá de él tenía algún poder, pues como podemos decir, pues tuve la oportunidad de quedarme cuatro meses con él, donde lo normal que dejan una mujer allá con el niño es un mes, por

mucho un mes o dos meses” (Entrevista con desmovilizada de las FARC-EP No 004).

Para las faltas mayores está instituido un consejo de guerra donde se determina si alguien merece o no la pena máxima por la falta cometida; las faltas por las que se somete a este consejo son: “hablar mal de los comandantes (especialmente de los mandos superiores), el homicidio contra civiles y compañeros, el robo a la organización y la desertión” (Cárdenas, 2005: 169).

En el ELN también se determinan para las faltas (como embarazar a una campesina, insubordinación o incumplimiento de una orden (no tan grave)) sanciones asociadas a la realización de actividades diarias como recoger leña, hacer huecos, etc. Para los delitos (atentar contra la organización, violación, infiltración, robo de alimentos en tiempo de escasez, quedarse dormido en guardia, malversación de recursos, pérdida de fusil, desertión) se realiza el consejo de guerra para aprobar o no el ajusticiamiento (Cárdenas, 2005: 199).

En los grupos paramilitares las sanciones las determinan los comandos, queda bajo su criterio el nivel de gravedad de la falta y de la sanción. Las sanciones tratan principalmente de infringir dolor corporal, provocar la muerte o eliminar el sueldo, con la función de mantener la cohesión y orden dentro del grupo a través de la intimidación (Medina, 2009: 72-75). Así lo narraba uno de los entrevistados desmovilizado de las AUC:

“Lo más hijueputa de allá eran los castigos, porque vea si uno la cagaba el castigo era muy muy hijueputa... A mí por ejemplo, me pusieron en un hueco de dos, tres metros rodeado de alambres de púas a pleno medio día, imagínese usted eso en el llano, en ese calor tan hijueputa. Por eso uno se mama, se mama de eso y se quiere ir” (Desmovilizado de las AUC No 010).

A pesar de la libertad de los comandos para establecer las sanciones, de cierta manera también mantienen un equilibrio entre la gravedad de la falta y la “dureza” de la sanción (no siempre); a faltas menores como llegar tarde después de un permiso o pelearse con compañeros, las sanciones pueden ser la pérdida de sueldo, el aumento del trabajo físico dentro de la organización (principalmente en las actividades diarias para la subsistencia) o el maltrato físico como forma de sanción (por ejemplo amarrarlos por horas a un árbol). Para las faltas mayores como dormirse en la guardia, insubordinación, violar a

compañeras, robar a la organización, hablar mal de sus comandos o suplantarlos, y(o) consumir sustancias alucinógenas, la pena es la muerte. Incluso la organización se vuelve el justiciero más temido por sus mismos combatientes (Cárdenas, 2005: 217-220).

Las estructuras de dominación que subyacen a los grupos armados no solo se expresan en las jerarquías verticales propias de su estructura interna sino también en las relaciones de género dentro del grupo. Aunque en el discurso generalizado dentro de las guerrillas se establece la igualdad de género y sus entrenamientos no consideran diferencias por tal razón, se reproducen relaciones de dominación y diferenciación principalmente en los controles sobre la sexualidad. El aborto, medidas anticonceptivas obligatorias, labores específicamente femeninas, son las principales muestras de estas estructuras de dominación masculina sobre las combatientes (Medina, 2009: 79-99). Aunque hay una libertad sexual en cuanto al cambio de parejas, las relaciones abiertas y la ridiculización de los celos dentro de la militancia (aspecto que difiere en cuanto al imaginario generalizado de la mujer asociada a la fidelidad y que cambia radicalmente una vez se reconoce como una relación estable), la reproducción de actitudes machistas se revelan en otros aspectos (Cárdenas, 2005: 176).

Para las mujeres excombatientes entrevistadas, la idea de igualdad sigue presente y justificada en la medida en que su entrenamiento, labores y prácticas diarias eran las mismas que las de los hombres; sin embargo, también reconocen que hay diferencias sobre todo en el ascenso dentro de las estructuras de poder, e incluso en la manera de asumirse como mujer y como sujeto político dentro de un grupo armado insurgente.

“Entre la guerrilla se ha implementado mucho es que la mujer es muy difícil subir, porque la misma mujer, no es tanto los comandantes sino las mismas mujeres no se han dado el valor necesario, allá hay mujeres políticas, pero ¿qué es lo que pasa? Que se dedican a casarse con el comandante entonces el comandante vive con ella dos tres cuatro años y después le da la patadita de la buena suerte y se consiguen otra nueva que llega y así se la pasan entonces ya las guerrilleras se desmoralizan, ya viven como por vivir y empieza el rollo, entonces no se dan el valor necesario. Donde las mujeres allá en la guerrilla se dieran el valor necesario como es, tendrían un estado mayor lleno de mujeres” (Entrevista con desmovilizada de las FARC-EP No 003).

Aunque existe inclusión de mujeres en las filas de estos grupos, en las formas de ascenso y de manejo del poder dentro de los grupos se evidencia la reproducción de manifestaciones de dominación y subordinación de lo femenino: “los cuerpos armados que han empezado a acoger grupos tradicionalmente discriminados en sus filas, en lugar de transformar la discriminación, se han convertido ellos mismos en campos donde esa discriminación se plasma una vez más. Por esta razón, dentro de estos cuerpos las trayectorias de ascenso para hombres y mujeres no son iguales, como tampoco son iguales las sanciones y las retribuciones que se aplican a unas y a otros” (Wills, 2005: 79, 80).

En los grupos paramilitares el número de mujeres que pertenecen a estos es considerablemente menor al que se registra en las guerrillas. En estos grupos la mujer está asociada a una figura de debilidad, y aquellas que están dentro suelen tener relaciones con varios hombres, lo cual reincide en la imagen desvalorizada y culturalmente aceptada que la reduce como una mujer fiel y ausente de deseos sexuales (Medina, 2009: 82, 83). Las funciones adjudicadas a las mujeres dentro de estos grupos no son tareas de combate como tal, sino tareas en logística o dirección de proyectos (Wills, 2005: 78, demostrando cómo en el escenario de la guerra se reproducen de igual manera pautas culturales del machismo que están inscritas en la sociedad colombiana).

Percepciones sobre los “otros”

En los procesos de socialización la alteridad se vuelve un elemento central para la configuración de identidades en los sujetos que pertenecen a una colectividad. La identificación y caracterización del otro ayuda a la definición de las características propias por oposición. En los grupos armados tiene lugar la autodefinición a partir de la diferenciación de ese otro como enemigo que representa la contraparte para sus prácticas e ideales.

Aunque en las organizaciones armadas tanto insurgentes como contrainsurgentes se busca la cohesión a través de distintas dinámicas internas, la filiación a las estructuras de poder y a los objetivos propios, la rigidez y las mismas dinámicas de la guerra hacen que en estos grupos la propia organización no tenga una posición inamovible como “amigo” del sujeto combatiente.

En los grupos paramilitares la organización está configurada a través de un poder autoritario y unas normas claras para la formación de mercenarios. La organización se convierte en una especie de “enemigo” para el sujeto en la medida que a justicia más cruel y arbitrariamente según el capricho del comando de turno (Cárdenas, 2005: 219, 220). Es así que la configuración amigo – enemigo funciona en dos niveles, al nivel de la organización donde se establecen unos enemigos directos o abstractos y al nivel del sujeto combatiente que involucra, además de los enemigos establecidos en su socialización y por su pertenencia al grupo, nuevas disparidades debido a su experiencia, ya sean enemigos directos y personalizados dentro de su organización o la organización en sí misma. Dentro de los grupos paramilitares los enemigos identificados son la guerrilla, la fuerza pública (aunque muchas veces también aparece como aliado), otros grupos paramilitares, y a veces para los propios combatientes, la misma organización. Como lo señala Cárdenas, para estos sujetos el amigo resulta siendo el arma quien le brinda protección y cierto poder, ya que sus relaciones dentro del grupo son particularmente tensas e intervenidas por la desconfianza. “Es claro que en la vivencia al interior del grupo no existe ningún amigo en quien se pueda confiar, lo que hace que las relaciones interpersonales sean de desconfianza permanente” (Cárdenas, 2005: 220).

En las FARC-EP sus enemigos más directos son el ejército, los paramilitares, los políticos, el ELN (en menor medida ya que el enfrentamiento generalmente se da por territorio), y otros enemigos más abstractos son el imperio yanqui, la oligarquía y los grandes terratenientes (Cárdenas, 2005: 173, 201). En este grupo armado, como lo expone Rangel (1999), también aparecen los narcotraficantes como enemigos de la revolución a pesar de los beneficios que obtienen de su actividad ilegal y de las relaciones que han establecido en algunas zonas: “A los narcotraficantes, paradójicamente, y contra lo que podría deducirse de sus buenas relaciones comerciales en ciertas regiones productoras de droga, los consideran como parte de los principales enemigos de la revolución a largo plazo, ya que los señalan como egoístas y traicioneros, aun cuando no por eso dejan de aprovechar la actividad del narcotráfico como fuente de financiamiento (Rangel, 2009: 32)

En este grupo insurgente la situación no es igual a la de los grupos paramilitares ya que las relaciones se configuran de maneras distintas y el aspecto político y moral a través de sus ideales sirven como base para una serie de prácticas, comportamientos e ideas que

son centrales en la construcción del sujeto combatiente guerrillero. Sin embargo, en la organización con su estructura jerárquica y vertical, donde cada actividad, comportamiento y relación es determinante y está regulada, las relaciones interpersonales pueden volverse tensas cuando el control se torna excesivo. En las entrevistas aparece el miedo latente de ser delatados por cualquier compañero, lo que genera la percepción de unas relaciones internas cohesionadas e intervenidas por los lineamientos de la organización, pero saturadas en sí mismas; “no hay confianza en las relaciones cotidianas” (Cárdenas, 2005: 173). También el riesgo de los infiltrados de la organización, la necesidad de hacer inteligencia y contrainteligencia, agudiza la tensión interna repercutiendo en los procesos de construcción del combatiente guerrillero (Cárdenas, 2005: 173).

Uno de los relatos de las excombatientes de las FARC-EP evidencia esta desconfianza incluso en las relaciones más cercanas: las relaciones de pareja.

“nos separaron, nos cambiaron de frente, debido a que tuvimos un problema verbal y físico se puede decir y allá dentro del grupo no se acepta eso... así pasó un año para volvernos a encontrar en un cruce, en el cruce para Venezuela cuando me dijo que él pensaba desertarse, yo no le creí porque algo que uno aprende es que así por más enamorada que uno esté uno no se puede dejar convencer porque casos se vieron que el otro iba y le comentaba al comandante que se iban a volar y las mataban, las fusilaban” (Entrevista con desmovilizada de las FARC-EP No 003).

Sin embargo, es importante resaltar que aunque las tensiones y desconfianzas son propias en las organizaciones armadas y de la guerra, las guerrillas se esfuerzan dentro del proceso de socialización en crear lazos fuertes entre sus combatientes, en generar una idea de cuidado y respaldo colectivo que genera en los sujetos una afiliación que reemplaza los vínculos perdidos una vez se alejan de su familia y de su entorno más cercano.

Para el ELN estos fenómenos se presentan de manera muy parecida a los presentados en las FARC-EP, los enemigos siguen siendo el imperialismo yanqui, la oligarquía y el Estado, y por otro lado más cercano, los paramilitares, el ejército y las FARC-EP (por enfrentamientos territoriales). Tienen el mismo problema de los infiltrados y una alta tensión en las relaciones internas, además persiste el riesgo de los informantes internos (Cárdenas, 2005: 201, 202).

Es importante aquí considerar también las relaciones entre los grupos armados y la sociedad civil. Aunque ésta no es catalogada como amiga o enemiga (no todas las veces y con una claridad establecida, reconocida y generalizada), sí es un actor independiente, distinto a los actores armados, que es determinante en el devenir del conflicto. Además de ser víctima, también es base de apoyo, informante, interlocutor, sustento de proyectos políticos, fuente de ingresos, entre otros, y cambia sus representaciones dependiendo de las estrategias de los grupos armados, del Estado y de las condiciones locales (históricas, culturales, económicas y políticas).

Tanto para las FARC-EP como para el ELN, las relaciones con la sociedad civil son cruciales, ya que representa sus bases de apoyo y su sustento como organización y como proyecto político. Por esta razón el trabajo con los civiles es un punto importante de su estrategia.

El ELN incluso se dio cuenta después de la fuerte crisis a la que se enfrentó en 1974 provocada por una fuerte arremetida del Estado y posteriormente por conflictos internos, que extraer los recursos para sobrevivir de la población era un error y que así no podrían mantenerse. Por esta razón cambiaron su estrategia de consecución de recursos a través de la extorsión a empresarios e industriales y el secuestro. También modificaron su posición abstencionista (antes de los ochenta) para después insertarse en poderes locales para favorecer su crecimiento como organización y para buscar más apoyo favoreciendo a familias, juntas de acción comunal o veredas que fueran leales (Peñate, 1999: 78, 79). Aunque esto es cuestionable ya que reproduce un apoyo basado en el clientelismo, demuestra la importancia de las relaciones con la sociedad civil como sustento de su proyecto político.

Las guerrillas buscan consolidar su base social en la sociedad civil a través de diversos gestos de cordialidad: el saludo, el buen trato y en obras como el arreglo de caminos y la solución de conflictos que se presenten en la comunidad. (Medina, 2009: 104, 105). Sin embargo, la regulación de la vida pública en sus diferentes formas (desde la solución de problemas hasta el pago por seguridad a ganaderos y agricultores) también es establecida (y en gran parte) con base en el poder que detentan como grupo armado y la disposición en hacer cumplir su ley (Rangel, 1999: 31, 32).

También el trabajo político de persuasión es utilizado al tener contacto con los civiles, organizando charlas donde se expone la situación del conflicto, sus motivos de lucha y los beneficios de su programa ante las debilidades del Estado. Los excombatientes expresan haber tenido contacto y haber realizado este trabajo de persuasión en la sociedad civil y también algunos reconocen su éxito al convocar y encontrar recepción en mucha gente y en casos concretos, como por ejemplo el caso de Flor: *“Entonces uno empieza a concebir eso, la discusión política y de verdad uno en los pueblos uno tenía sus masas y la gente le copiaba”* (Entrevista con desmovilizada de las FARC-EP No 003).

Aunque bajo los estatutos y reglamentos la relación con la sociedad civil debe ser bajo los parámetros de la cordialidad, el servicio y el buen trato, en la práctica se presentan muchos desfases a causa de la contingencia de la guerra, las disposiciones y aspiraciones propias de cada combatiente y de los excesos del poder ejercidos por estos (Medina, 2009: 102-106). Todos los ex militantes de guerrillas entrevistados revelaron que en el gobierno de Uribe Vélez (2002-2010) se dio una arremetida que los llevó a situaciones extremas de supervivencia, a desplazarse grandes distancias y algunas veces a generar otras estrategias que no se correspondían con los ideales propios de los grupos insurgentes.

“pero cuando ya viene la arremetida de Uribe que todo lo convirtió entre... todo era plata, los sapos para nosotros eran los sapos, entonces en algunas remetidas empiezan a capturar gente y ya se empieza a ver dentro de la misma organización que todo lo que se planteaba no era como uno lo pensaba (...) ya empezaba a ver las injusticias con el mismo pueblo, con los indígenas, con los campesinos” (Entrevista con desmovilizada de las FARC-EP No 003).

Los paramilitares han generado una relación contraria con la sociedad civil pero coherente con su naturaleza contrainsurgente. La sociedad civil es entonces la base de apoyo de la guerrilla y por ende su objetivo militar. Dado que tienen una desventaja en capacidad militar frente a las guerrillas su modo de ataque se dirige a sus bases de apoyo, por lo cual buscan eliminarlas, desplazarlas (a través de masacres, amenazas, desapariciones, ejecuciones públicas, etc.) y en general romper ese espacio social y simbólico de la comunidad con la amenaza y el terror (Medina, 2009: 108-114).

Pese a todo, es importante resaltar que no todas las masacres han sido perpetradas por paramilitares, ya que los otros actores armados también han tenido participación en

estos actos violentos, aunque no en la misma cantidad y frecuencia que se le atribuye a estos grupos contrainsurgentes (Blair, 2004: 171). En este sentido la sociedad civil en algún momento adopta la posición de enemigo para todos los actores armados, incluso para la Fuerza Pública que ha incurrido en asesinatos extrajudiciales de civiles, justificados al acusar a la población de apoyar a la guerrilla.

Las masacres tienen como objetivo principal a la población civil antes que al bando contrario; los habitantes son asesinados, torturados y violentados al convertirse en presuntos cómplices del bando enemigo (Uribe, 2004: 90). “Quienes incurren en esos comportamientos, son denominados “auxiliadores”. Estas son personas de la más variada índole que, a partir de un señalamiento colectivo, son deshumanizadas por los asesinos y convertidas en una masa que se desplaza aterrorizada. El ambiente de contaminación en las zonas de guerra es tal, que cualquier tipo de intercambio con quienes son considerados enemigos resulta peligroso” (Uribe, 2004: 90).

De esta manera, la sociedad civil se convierte en amigo y enemigo, en delator o auxiliar, dependiendo del grupo armado y las coyunturas locales que se den en un lugar determinado. Los nexos que acusan unos y otros pueden llegar a ser inexistentes o producto de inventos de los delatores quienes se encargan de acusar a la gente del lugar que simpatice con el otro bando (Uribe, 2004: 85-88). Así pues, la representación de la sociedad civil para los actores armados se transforma y está involucrada en la guerra como enemigo por diversas razones aleatorias y condenatorias.

La semejanza entre las guerrillas y los grupos paramilitares reside en la instauración de un orden social particular en las zonas donde se ubican y donde logran controlar la vida pública. Allí, estos grupos excluyen la diferencia (moral, ideológica, política, etc.) e imponen su propio sistema de valores erigido como autoridad incuestionable (Medina, 2009: 114).

Finalmente, y con respecto a otras visiones recíprocas, aunque los paramilitares ven en la insurgencia su mayor enemigo, reconocen las habilidades militares y de conocimiento del terreno de los guerrilleros. Estos últimos también consideran a los paramilitares como su enemigo porque defienden el régimen existente y el status quo, y los desprecian por sus bajas capacidades tácticas y militares para la guerra, además por su naturaleza mercenaria. Con respecto a la fuerza pública, los guerrilleros la ven como un enemigo obligado y

engañado por los intereses estructurales que dominan desde arriba la lógica del conflicto, así como capaz de un despliegue y una inteligencia militar muchas veces probada y temida. Los paramilitares la consideran aliada en ocasiones ya que la fuerza pública participó de su construcción y en algunos momentos se apoyaron en su empresa contrainsurgente. Entre estos últimos actores, “el otro no solo se construye como antagonista, también se edifica como aliado” (Medina, 2009: 47).

CAPÍTULO TERCERO

Transición a la vida civil

Los procesos de reintegración en la ciudad están mediados, permitidos y en otros casos cohibidos por distintos fenómenos, instituciones y dinámicas sociales. Para los excombatientes, la intervención del gobierno con programas institucionales ha sido clave y ha definido su establecimiento dentro de la ciudad bajo formas particulares. Por otra parte, la ciudad ofrece unas condiciones de vida y de interacción particulares, que producen desde procesos de individualización así como de configuración de localidades para la construcción de comunidades. Estas últimas establecen un diálogo con las dinámicas urbanas y representan formas de integración y socialización más cohesionadas.

En el desarrollo de este capítulo intentaremos explorar distintos niveles que consideran lo urbano dentro de las experiencias de transición de los excombatientes y de la comunidad, así como factores determinantes que influyen en este proceso. En un principio se hará una breve explicación de los programas institucionales para la reintegración, en tanto estos configuran, permiten y encauzan la llegada a la ciudad de los excombatientes y su posterior establecimiento. Luego, se explorarán las vivencias de los entrevistados que explicitan los choques culturales en el contacto con la ciudad, condensados en las dinámicas y realidades que difieren con las apreñadas durante su vida en el grupo, la cual fue predominantemente rural. En el acápite tercero se explorará la llegada al barrio para develar el establecimiento de redes que sirven de apoyo para afrontar la transición y posibilitan la configuración de un espacio con unas condiciones y dinámicas sociales particulares. Por último, se intentará una exploración inicial del proyecto e imaginario de comunidad y los inicios de su construcción para el caso de la ciudadela Santa Rosa.

Políticas de reinserción-reintegración

Como respuesta a las desmovilizaciones de combatientes de los grupos armados, los distintos gobiernos desarrollaron estrategias para poder facilitar el regreso a la civilidad de estas personas. En un principio fueron estrategias de corto plazo y sin mucha efectividad, manejadas como pequeñas extensiones de la política de paz de turno. Sin embargo, con las desmovilizaciones de las guerrillas (M-19, EPL, MAQL, PRT, CRS, FFG (Frente

Francisco Garnica desligado del EPL), MIR-COAR), se logró una inserción a la vida civil exitosa con miras a la participación en la política nacional, más aún si actualmente sus actuaciones e intervenciones dentro de las organizaciones, partidos políticos y gobierno son reconocidas por la sociedad colombiana y la opinión pública. (Villarraga, 2004: 52)

Con las negociaciones entre el gobierno y los grupos paramilitares, adelantadas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), y las 39 desmovilizaciones colectivas que se dieron de grupos de autodefensas entre 2003 y 2006, el reto en para facilitar y concretar su reinserción creció en proporciones inconmensurables (incluso superó lo que esperaba el gobierno en las desmovilizaciones: se esperaban aproximadamente 23 mil combatientes y la cifra llegó a 31.687); aun sin que los beneficios y servicios específicos a ofrecer tras la desmovilización hubieran sido acordados dentro de las negociaciones (Rivas, Méndez y Arias, 2007: 1-4). Las desmovilizaciones individuales siguieron teniendo lugar, lo que aumentaba y complejizaba la oferta estatal para su reinserción a la vida civil.

Los desmovilizados individuales provienen en su mayoría de las FARC-EP, originarios de muchas regiones, para concentrarse generalmente durante el proceso en Bogotá. En promedio, su nivel educativo llega hasta la primaria y se presentan altos niveles de analfabetismo. Con respecto a los desmovilizados colectivos que provienen de los grupos de las autodefensas, y se han ubicado en distintas regiones del país, principalmente en cinco departamentos: Antioquia, Córdoba, Cesar, Magdalena y Santander; en su mayoría cursaron la primaria y siguen recibiendo ayuda institucional (Rivas, Méndez y Arias, 2007: 3).

En un principio, desde el 2002, los procesos de reinserción estaban a cargo del Programa para la Reinserción a la Vida Civil (PRVC) adscrito al despacho del Ministerio del Interior y de Justicia. En el PRVC se trataron tres aspectos principalmente: “1. Apoyo psicosocial, acompañamiento para encontrar una nueva ruta de vida. 2. Nivelación académica, la necesidad de formación para el trabajo; elementos indispensables para garantizar una efectiva reconstrucción del tejido social colombiano. 3. Una ayuda humanitaria básica.” “Así pues, busca generar en los beneficiarios el aprovechamiento de las ofertas institucionales psicosociales y educativas tendientes a modificar hábitos, comportamientos, sanar heridas, generar reflexiones que permitan reconciliación y mejorar habilidades y competencias que propicien una integración económica. Se evidencia así un

tránsito de la ilegalidad a la legalidad” (Contreras, Jaramillo y Picón, 2006: 7). Dentro de este programa también se entregaba, como parte de la reintegración económica, a cada desmovilizado un monto económico para crear un proyecto productivo que podía ser utilizado en un negocio, empresa, vivienda o estudios universitarios.

Sin embargo, las medidas adoptadas por el PRVC se proyectaron a corto plazo, así que se buscó desarrollar una visión más compleja que generará un impacto más amplio durante un tiempo más largo, contemplando otros actores dentro del proceso, por lo cual en septiembre del 2006 se crea la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas (ACR), quien actualmente se encarga de los procesos de reintegración. Esta entidad cambió el concepto de reinserción a reintegración, implementando los objetivos de una política a mediano y largo plazo y la articulación con otras entidades.

La ACR se encarga de coordinar, asesorar y ejecutar con otras entidades públicas y privadas la ruta de reintegración. Se ocupa de los desmovilizados, tanto colectivos como individuales, mayores de 18 años. Los menores de edad tienen un programa especial de reintegración a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). La política que desarrolla esta consejería es la Política Nacional de Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas (PRSE), contemplando las necesidades y lineamientos del proceso de reintegración y no sólo enfocándose en el excombatiente sino también en sus familias y en las comunidades receptoras. “La Política busca asegurar la superación de su condición a través de: a) la integración de la oferta social y económica del Estado; b) el acompañamiento para incrementar la probabilidad de que las intervenciones mejoren las condiciones de calidad de vida de la población desmovilizada y de sus familias; y c) la construcción de un marco de corresponsabilidad que por un lado, apoye al desmovilizado a regresar y convivir constructivamente en su entorno familiar y comunitario, y por el otro, lo comprometa a él y a sus dependientes con la superación de su situación y la permanencia en la legalidad” (Conpes 3554, 2008: 2).

En consecuencia, se le ofrece a los excombatientes y a su familia el acceso a educación, salud, capacitación para el trabajo, generación de ingresos (ya sea a través de un empleo o de un proyecto productivo) y una atención psicosocial que promueve el desarrollo de habilidades sociales y personales que le permitan relacionarse de manera positiva con su

familia y su comunidad (Conpes 3554, 2008: 2, 3). De igual manera, por asistir a las actividades propuestas y cumplir con los requerimientos del proceso la ACR entrega un dinero mensual a cada excombatiente.

Según la ACR, “Durante el proceso de reintegración el desmovilizado redefine sus creencias, encuentra el sentido de su vida, aprende a tener una actitud positiva ante la existencia, su misión como ciudadano, para qué vale la pena vivir en la legalidad y construye sueños e ideales acordes con sus circunstancias, intereses y potencialidades.” (ACR, sin fecha: 1). Las tres grandes instancias de atención son: reintegración social, reintegración económica y reintegración con comunidades.

Para la reintegración social se dispone de un equipo numeroso de psicólogos que realizan talleres grupales a todos los excombatientes así como asesoría individual, además se encarga de proveer los servicios de salud y educación para estos y para sus familias. “A través del Modelo de Atención Psicosocial (MAPAZ), se busca desarrollar, fortalecer y reorientar las competencias del participante y sus familias hacia el establecimiento de relaciones asertivas, la resolución no violenta de conflictos, el reconocimiento y ejercicio de derechos y deberes y la proyección y orientación al logro” (ACR, 2010: 16). Las competencias referidas se desarrollan en cuatro contextos distintos: el familiar, el educativo, el productivo y el comunitario.

Con respecto a la reintegración económica, identificamos dos ámbitos de acción: la formación para el trabajo y la generación de ingresos. Para esto último, se desarrollan dos estrategias: la empleabilidad y los planes de negocio en los cuales se ofrece asesoría y dinero para la creación, desarrollo, implementación y mantenimiento de un proyecto productivo. A los desmovilizados colectivos se les hace entrega de un monto de dos millones de pesos y a los desmovilizados individuales de ocho millones. Para la estrategia de empleabilidad se realizan convenios con entidades públicas y privadas para ubicar a los excombatientes laboralmente. En formación para el trabajo, generalmente a través de la oferta del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y otras opciones adicionales, vinculan a los excombatientes para recibir una formación que les permita desempeñarse en distintas labores y oficios.

La reintegración en comunidades se enfoca en generar proyectos con las comunidades receptoras, los excombatientes y las familias, posibilitando el desarrollo

social, procesos de reconciliación y de convivencia. Así, “desarrollan capacidades de liderazgo, empoderamiento y ejercicio de la ciudadanía dentro del marco de la legalidad, condiciones que a su vez permiten la resolución pacífica de conflictos y el respeto por los derechos humanos” (ACR, sin fecha: 1). Esta parte del proceso se trabaja en muchas ocasiones a través de operadores que son los encargados de realizar los proyectos con las comunidades pero siguiendo los lineamientos determinados a nivel central correspondientes con la política de reintegración. Se basan en tres estrategias principalmente: 1) la formación ciudadana, en el que se promueve la participación ciudadana y la cooperación para generar procesos de reconciliación y convivencia, 2) la acción simbólica que son actividades que se realizan en las comunidades con el fin de sensibilizar y reflexionar acerca de la reintegración y la reconciliación, y 3) el proyecto comunitario, que busca desarrollar e implementar iniciativas sostenibles de los actores comunitarios que resuelvan problemas públicos de su comunidad (ACR, 2010: 19).

“En el proceso de reintegración que coordina la ACR, lo psicosocial es entendido como un marco para identificar, comprender y atender las problemáticas y recursos individuales generados por la interacción histórica entre el sujeto y un contexto social (...) la atención psicosocial pretende promover transformaciones individuales a través de la comprensión de dinámicas sociales e intersubjetivas que le permitan al participante desarrollar competencias para construir un proyecto de vida sin violencia, basado en el ejercicio de derechos y responsabilidades” (ACR, 2010: 4) “se analiza el contexto de cada uno dentro del proceso de reintegración y, en esa medida, se les facilita el desarrollo del conocimiento de sí mismos de una forma diferente a la que tenían dentro del grupo armado” (ACR, 2010: 5).

Revisando el manual de atención psicosocial (ACR, 2010), reconstruir el pasado significa volver a su socialización primaria en su vida familiar y desde allí desarrollar estructuras de sentimiento: supone una ausencia de estas estructuras dentro de los grupos armados, dado que se entiende el proceso socializador como eliminación de sentimientos, sin embargo, se olvida que los lazos creados dentro de estos grupos también son significativos y que éstos se convierten en un referente identitario esencial en el proceso. Se considera también la familia como elemento de gran importancia para el desarrollo del proceso de reintegración y la permanencia en la civilidad de los excombatientes, cuestión

trascendental en el momento de la desmovilización y significativo en la vida civil. La posibilidad de estar con sus hijos, parejas, padres, es un elemento valioso de su reintegración.

Aunque en estos manuales se hable de resignificación de su experiencia, el trato sobre el pasado en el grupo pasa más por la disposición o estrategia del profesional psicosocial: algunos permiten y ven importante que se hable del pasado pero otros prefieren hablar del presente y del futuro.

“Yo personalmente hablo con ellos del pasado, a mi no me incomoda que ellos hablen, que es que yo hice, que yo estuve, a mi no me incomoda pero hay otros profesionales que si les incomoda (...) Hay gente que no les gusta que les cuenten muchas cosas, pero si ellos quieren hablar que hablen, a veces hay cosas pesadas que ellos cuentan pero obviamente uno no ha escuchado nada porque eso es una asesoría individual y nosotros no somos policía judicial ni nada de ese cuento”
(Entrevista a profesional psicosocial de la ACR N° 006).

El proceso de reintegración ha tenido varias críticas fundamentadas principalmente en el énfasis que se ha puesto en observar al excombatiente como un ser violento que hay que integrar al orden legítimo y establecido, así como en la poca atención al desarrollo de subjetividad política y el desaprovechamiento de sus experiencias vitales para el debate sobre las condiciones sociales y políticas del país.

Al considerar al excombatiente como un ser violento en sí mismo, se evidencian algunas visiones erróneas para la comprensión del conflicto armado en Colombia, que reinciden además en la reproducción del estigma (Rodríguez, 2008: 108, 134). Así, presupone la condición del excombatiente como un problema psicológico, por lo cual su intervención busca transformarlos, controlar sus impulsos de acuerdo con las normas establecidas e inducirlos a resolver sus conflictos de manera pacífica y asertiva. Tal posición desconoce que el conflicto también es un problema histórico y social, con unas causas estructurales que deben ser atendidas para poder avanzar en una verdadera construcción de paz y en un proceso de Desmovilización, Desarme y Reintegración (DDR) efectivo. Hasta ahora, es evidente que se ha dado una respuesta apolítica (Hannah Arendt citado por Varela, 2008: 25, 26) que desconoce las fracturas sociales ineludibles de la realidad nacional (Varela, 2008: 25).

En resumen, los distintos puntos que conforman el plan de atención psicosocial no configuran en ningún momento el fortalecimiento de los excombatientes como sujetos políticos y críticos frente a su realidad. Se reduce en las relaciones directas, la resolución pacífica de conflictos y la formación ciudadana, enfocados principalmente en la inserción de los excombatientes al sistema productivo y legalista. Como lo señala Varela, la idea de sociedad que propone la ACR a través de sus acciones es “una sociedad homeostática y lineal, en donde “reintegrar” a un sujeto, significa incrustarlo en sus redes de interdependencia, logrando guardar el equilibrio necesario para que el sistema no se desplome” (Varela, 2008: 11). Busca también que el sujeto intervenido se transforme en un sujeto interdependiente que logre asumirse dentro del engranaje de producción y reproducción en la sociedad (como lo hace a través del trabajo y la familia). Así, el modelo de intervención promulga una sociedad con roles establecidos y poco flexibles (producción y reproducción), fomentando la interdependencia de los individuos en la sociedad, aumentando la fuerza productiva (Emile Durkheim (1982; 216) citado por Varela, 2008: 11) y el fortalecimiento de la cohesión como un todo social, reforzando el monopolio y control de la violencia por parte del Estado (Norbert Elias (1987; 452) citado por Varela, 2008: 11).

Llegada a la ciudad

La llegada a la ciudad es uno de los eventos más difíciles de afrontar para los excombatientes por la pérdida de lazos sociales; identificaciones y significaciones que se tenían en la vida en el grupo armado, ahora se transforman al enfrentarse a las dinámicas propias de lo urbano. Estas últimas se presentan como un exceso para su realidad conocida y les representa un desafío, ya que deben emprender un cambio en las nociones de realidad, en las normas y costumbres, así como en la relación y el manejo del espacio.

La ciudad ha sido tema central en las ciencias sociales, especialmente en la sociología, la antropología y la historia. Los intentos por caracterizarla y definirla han ocupado gran espacio dentro del desarrollo teórico y han sido elaboradas por diferentes corrientes de pensamiento que han permitido comprender la ciudad como fenómeno histórico, político, económico y social. Desde que la ciudad representó un factor vital para

el desarrollo de las sociedades, el intento por comprenderla en sus diversas dimensiones ha dado lugar a una diversificación en las teorías y conceptos que la definen y la explican.

En un comienzo, los principales estudios sobre la ciudad y sus diversas definiciones se hicieron en oposición a lo que representaba lo rural, valiéndose de las divisiones clásicas entre sociedad-comunidad (Ferdinand Tönnies) y lo rural frente a lo urbano, distinguiendo modos de solidaridad distintos: solidaridad mecánica y solidaridad orgánica (Emile Durkheim). Las oposiciones prevalecieron y dieron a conocer especialmente modos de vida y dinámicas sociales diversas que se identificaban en los dos escenarios, expuesto de manera sucinta por Georg Simmel en su estudio sobre las disposiciones psíquicas y sociales de los individuos de la metrópolis en oposición a las que caracterizan a los individuos rurales (Simmel, 2005: 6).

Posteriormente, se hizo un esfuerzo por explorar los estados intermedios y los procesos e intersecciones presentes en la dicotomía entre el campo y la ciudad; en ese esfuerzo se exploraron las transiciones y distintos tipos de sociedades que iban de un polo a otro. De igual forma, aparecen otros estudios liderados por la Escuela de Chicago donde, en un primer momento, se analizan las ciudades en relación con el espacio, la ecología y la marginalidad, en los cuales se miraba la ciudad como una unidad orgánica que funcionaba como un organismo biológico (Park, 1915: 578). Años más tarde, esta misma escuela centró sus estudios en la exclusión social como generador de comunidades estables y aisladas dentro de las grandes ciudades.

En el mismo sentido, se desarrollaron distintas concepciones sobre los modos de vida urbanos y los procesos de socialización e interacción, generalmente asociados a dinámicas de anonimato, heterogeneidad, relaciones transitorias y superficiales, racionalidad (Wirth, 1938:171, 172), individuación, especialización y a una supremacía de lo monetario y del mercado (Simmel, 2005: 4). La ciudad entonces, si bien la comprendemos como un espacio donde tienen lugar procesos de individualización (Simmel, 2005: 8) y secularización (Germani, 1976: 27), expone a los individuos a una saturación de mensajes y estímulos que llevan a la necesidad de adoptar una reserva frente a estos: de allí la actitud *blasse*, caracterizada por Simmel como disposición mental necesaria de reserva y antipatía que “radica en la insensibilidad ante la diferencia de las

cosas” (Simmel: 2005: 4), y que protege de la “indiferencia y de la extrema susceptibilidad a las sugerencias mutuas” (Simmel: 2005: 6).

Adicionalmente, se concibe la ciudad como espacio de libertades individuales ausentes en lugares pequeños donde el hombre se ve limitado por un control social más determinante. “Dentro de los límites prescriptos de la ciudad es inevitable el devenir de la naturaleza humana que le concede a las áreas metropolitanas y a sus edificios un carácter tal que es más difícil de controlar” (Park, 1915: 579). Sin embargo, “el anverso de esta libertad sea bajo ciertas condiciones, el hecho de que en ningún lugar se llega a sentir tanto la soledad y la desubicación como entre la multitud metropolitana. Ya que aquí como en otras situaciones no resulta necesario que la libertad del hombre se vea reflejada en su vida emocional o en su confort” (Simmel: 2005: 7).

Al hablar de las ciudades latinoamericanas surgen otros estudios teniendo en cuenta las particularidades del desarrollo y la modernización de los países periféricos, así como la integración de nuevos factores como la multiculturalidad (Canclini, 2001). Por su lado, Gino Germani realizó un reconocido estudio sobre la ciudad latinoamericana, especialmente en Argentina, donde si bien permanece la oposición con lo rural, se mezcla con los desarrollos desiguales y procesos de secularización que permiten condiciones particulares para configurar las dinámicas urbanas. Adicionalmente, muchas investigaciones sobre la Ciudad de México han analizado factores importantes a considerar dentro de un análisis de la ciudad latinoamericana (Safa, 1995; Canclini, 2001; Ramírez, 2007; Giglia, 2001) como el efecto de los procesos migratorios, la marginalidad y la pobreza.

Realizando una sucinta recapitulación del estado del arte sobre el tema, destacan tanto enfoques positivos (Lefebvre con su idea de la ciudad como el espacio posible de la libertad y el cambio) como negativos (la segunda generación de la Escuela de Chicago enfatizando en los aspectos desintegradores y alienantes de la experiencia urbana) que configuran un gran cuerpo teórico que en últimas consideran la ciudad como totalidad, cuya explicación excede los alcances de este texto. Sin embargo, destacan ciertos factores relevantes para abordar la fase de transición para los excombatientes en el sentido en que la ciudad ofrece ciertas posibilidades negando otras, más aún cuando la ciudad sigue manteniendo, a pesar de las construcciones previas de relaciones cercanas y de tipo

comunitario, unas dinámicas particulares que se evidencian en las difíciles experiencias que muchos excombatientes afrontan al llegar a Bogotá.

Sin embargo, para los excombatientes la aproximación a lo urbano se da bajo mecanismos particulares que hacen de su experiencia un caso singular. Su llegada y su establecimiento se ven mediados por los programas de atención y asesoría del gobierno nacional y distrital, donde se les asiste tal transición y se amortigua su proceso, susceptible en situaciones de riesgo, estigma, desidentificación y cambios en su realidad y en la noción sobre sí mismos dentro de la sociedad.

Como directriz de las políticas estatales muchos de los desmovilizados que llegan a la ciudad son ubicados en albergues – hogares de paz, a cargo del Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado (PAHD), mientras se les entrega la certificación del Comité Operativo para la Dejación de las Armas (CODA), la cual constata que fue combatiente de uno de los grupos armados al margen de la ley. Este documento les permite luego inscribirse al programa de reintegración y empezar a realizar la ruta propuesta por la ACR (PRVC antes de septiembre de 2006) y recibir los beneficios que otorga.

La estadía en los albergues es el paso inicial para la transición; allí se les ofrece toda la atención necesaria, se realizan talleres psicosociales, tienen cubrimiento en salud y educación, así como talleres formativos. Además hay personal encargado de realizar las tareas diarias del lugar (cocina, aseo, lavado de ropas). La vida de ellos en los albergues y hogares es descrita como una situación difícil donde todo es diferente (rutinas, lenguajes, símbolos, etc.), pero el cambio está acompañado de continuidades representadas en tradiciones, costumbres, destrezas y creencias, que les ayudan a afrontar esa nueva vida (Cárdenas, 2005: 59-103). Allí se concentraban tanto paramilitares como guerrilleros y las experiencias difieren en resaltar lo tranquilo o conflictivo del lugar. Para algunos, las divergencias entre grupos armados no influían en la convivencia en estos lugares, aunque sí seguía utilizándose la pertenencia a un grupo como pauta de identificación y la existencia de pautas violentas en la manera de relacionarse,

“Sí, cuando nosotros llegamos también había de todo, imagínese que cuando yo estaba en el Ministerio del Interior habían cantidad de paracos y guerrilleros ahí, y eran más los paracos que habían que los que éramos guerrilleros y eso se veía más problema entre los mismos paracos que entre los guerrilleros. Habían guerrilleros que decían: que se maten,

que ellos son de allá y se entienden, que se maten ellos y parece que nunca se vio un problema así, yo nunca vi un problema así en los albergues entre diferencia de grupo, no. A veces le preguntaban a uno: “oye ¿tú qué eres? guerrillero o paraco”, y yo: “no eso no importa, aquí ya todos somos iguales”, “ah que buena por esa”, “buena por esa” y ya listo, entonces ya no hay necesidad” (Entrevista a desmovilizada de las FARC-EP N° 004).

Para otros, la experiencia fue difícil y conflictiva ya que las prácticas violentas y delictivas se reproducían en estos albergues,

“Cuando yo llegue a Bogotá estaba cuando los albergues que quedan aquí en Teusaquillo, eso era un caos porque los unos colocaban bombas, los otros ponían cilindros, los otros robaban, eso era un cuento, pero uno trataba de estar en su cuento relajado” (Entrevista a desmovilizada de las FARC-EP N° 003).

Una vez reciben el certificado CODA y deben independizarse, por lo general buscan ubicarse en lugares de estratos bajos por el costo del arriendo y de los servicios. Sin embargo, es común la búsqueda de algún conocido, amigo o familiar, que les pueda facilitar este proceso y que les brinde un soporte social. Por lo general los desmovilizados, a causa de que la mayoría son desertores de las guerrillas, buscan “invisibilizarse” dentro de la ciudad, dado que esta permite el anonimato (Wirth, 1938: 172); por esta razón, su participación y actividad dentro de las comunidades no es tan común. De igual manera, el estigma profundo que recae sobre los desmovilizados en la ciudad (y que reproduce el programa de la ACR al “ocultarlos” de la sociedad) y la falta de preparación en un momento de las comunidades receptoras, complicó el desarrollo de estrategias de convivencia y reconciliación. Aunque actualmente la ACR ha trabajado más en el aspecto comunitario, la omisión de información a las comunidades y la falta de preparación de estas como receptoras, dificultó la aceptación y desarrollo de los procesos de reintegración con el apoyo social que requiere.

Sumado al estigma, el miedo tanto de la comunidad hacia los excombatientes como de estos por ser desertores, se suma el choque cultural que representa pasar de un entorno predominantemente rural, con unas normas, códigos establecidos y rutinas claras, así como un colectivo permanente, a una ciudad capital donde las dinámicas, tiempos y espacios son

diferentes y donde la diferenciación, las libertades individuales, el cambio de control social les representa un panorama más complejo y exigente.

“Te digo una de las cosas, yo ya tengo claro que yo tengo mi familia, que yo ya tengo mi nueva vida pero para ser te sincera es algo que todavía yo extraño, extraño a los amigos, vivir uno en el monte, los amigos, a toda hora o sea no te vas a sentir uno a veces de quedarse aquí todo el día sola en una casa, es algo como pesado, donde todo el día estas con los amigos, estás hablando o estas... si te tienen estudiando, haciendo algo, estás haciendo eso, si estás... me mandaron a trabajar al monte, estás trabajando pero estás conversando, ¿sí?, no se siente uno solo a ninguna hora, o sea como siempre estás alerta, estás con alguien” (Entrevista a desmovilizada de las FARC-EP N° 004).

Así pues, el momento de llegada a la ciudad presenta complicaciones en varios aspectos, por ejemplo en el manejo del espacio y la movilidad ya que la ciudad es extensa y compleja en su organización espacial y en las formas de moverse.

“Fue muy difícil, al principio eso fue muy difícil, me montaba en el transmilenio y me perdía, o sea no sabía, llegaba a una estación y no sabía, una vez con una compañera nos montamos en un bus y sencillamente le digo que esta es fecha que yo no sé para donde nos llevo, nos subió a una loma (...) O sea al principio eso era muy duro, andar por la ciudad a veces le decían a uno que preséntese en tal parte entonces uno tenía que salir con dos o tres horas de anticipación para poder llegar porque uno llega preguntando, a ciegas, montarse en un bus y... y uno con el sosiego que será aquí, a dónde será, no, eso es duro duro” (Entrevista a desmovilizada de las FARC-EP N° 004)

La reserva o actitud *blaseé* de los habitantes urbanos también genera en varios de los excombatientes una visión negativa de la ciudad y de sus dinámicas sociales. La superficialidad de las relaciones y su transitoriedad, por la novedad, genera sentimientos negativos frente a la pérdida referencial de su colectivo de apoyo y fuente de identificación, dejándolos solos frente a un contexto alienante. Es importante recordar que vienen de un grupo cerrado, que generalmente se establece en zonas rurales, en donde sus relaciones sociales están mediadas y controladas por la organización, y donde la cercanía y la identificación con sus compañeros se vuelven un aspecto central dentro de su realidad.

“Eso fue otra cosa muy dura, créame que todavía esta es fecha que a mí todavía a veces que me da como nostalgia, no sé, porque uno a veces va por el centro y uno le pregunta a una persona :oiga ¿usted me puede decir dónde queda tal parte?, jum no sé y personas que uno a veces le pregunta y ay no sé, pero así, ni siquiera como la educación de decirle ay que pena no sé o algo así (...) A veces uno le pregunta a una persona

usted sabe por dónde queda esta parte, ah váyase tantas cuadras, llega uno allá y le dicen no eso no es acá eso es para allá, o sea como de maldad algo así, entonces esas son cosas que a veces le dan uno como cagalera” (Entrevista a desmovilizada de las FARC-EP N° 004).

El estigma que gravita sobre los desmovilizados es uno de los grandes inconvenientes que complejiza su relación con los entornos urbanos, razón por la cual escogen generalmente el anonimato o buscan espacios, como el de la ciudadela, donde su condición de excombatiente no genere el rechazo y juzgamiento de su condición. Además, debido a que en la ciudad el dinero y las relaciones mercantiles dominan casi la totalidad de intercambios, les cuesta adaptarse a las nuevas formas de adquisición de bienes y a la relación con los objetos de consumo.

“Porque ese fue otro paso ya después de la desmovilización que uno cree que va a armar su familia y todo va a ser bonito y mentiras que uno se estrella con una pared de acero, llegar a una ciudad con una mano adelante y otra atrás, con tener el estigma de soy desmovilizado, y que cree que es como lo plantean en la pantalla grande que desmovilízate que eso si paga y en realidad no paga... porque tanta gente... yo que trabaje con excombatientes un desmovilizado 150 si va a estudiar 150 si va al psicosocial 80 mil pesos para el transporte y si fallo a alguna de esas no le llega nada y que tenga tres o cuatro hijos cómo uno con que va a pagar arriendo, 380 mil pesos no sirven para nada entonces no es como dicen ” (Entrevista a desmovilizada de las FARC-EP N° 003)

La racionalización inherente a las grandes ciudades es también un aspecto conflictivo, especialmente manifestado en el manejo y conocimiento de procedimientos burocráticos y legales (el papeleo, contratos, escrituras) con lo cual no están familiarizados; es un factor que se agrava entre menos nivel de escolaridad posean los excombatientes. Existe un desconocimiento sobre derechos y deberes que presuponen la relación del ciudadano con el Estado o con otros agentes que intervienen en procesos tales como la compra de vivienda, la realización de un trabajo, la intervención social de varias instituciones gubernamentales y no gubernamentales, entre otras. Así lo expresa una de las personas entrevistadas al manifestar sus problemas al adquirir su vivienda:

“Nosotros tuvimos un problema aquí con esto porque resulta que yo vine y separe el apartamento abajo, aquí en esta misma dirección con la diferencia de que esta dirección aquí arriba tiene dos A (...) cuando uno pues yo digo como montañero uno, el día que nos llevaron nosotros por ser montañeros y a la vez por el ansia de tener el apartamento, cuando me mostraron las

*escrituras y todos esos papeles yo dije vamos y firmamos, fun fun fun, firmamos. Resulta que la dirección daba con este, nos entregan allá, cuando llego yo allá y nosotros fuimos a reclamar las llaves del apartamento del banco *** nos dieron las llaves, fuimos nosotros cuando estábamos ahí se asoman unos niños por la ventana no que quien vive ahí, cuando una señora asomo y yo le dije ¿usted vive ahí? ¿Usted compro este ahí? Sí, ese lo compre en el banco ***, me lo entrego la semana pasada. O sea este piso nos tocó ponerlo a nosotros, las puertas, todo, no era lo que habíamos escogido. Fuimos al Ministerio para que nos ayudaran con eso porque nosotros veníamos... debieran ponerse a analizar de dónde venimos, o sea mucha cosa uno llega aquí a la ciudad y camina y trata de defenderse uno en estas calles que no, no la conocía, ahora que voy a saber de direcciones, yo soy muy mala para las direcciones y nosotros... Antes supuestamente que ellos pensaban reconocernos un tapete para ponerle a esto, ya no nos respondieron por nada, y nos quedamos igual, ya nosotros dijimos que vamos a hacer, eso nos toca pues... algo tenemos que aprender en la ciudad” (Entrevista a desmovilizada de las FARC-EP N° 004).*

Llegada al barrio

La ciudadela Santa Rosa es un barrio ubicado en los cerros sur-orientales de Bogotá, adscrito a la localidad de San Cristóbal, en el cual se asentaron un poco más de 100 familias de desmovilizados en el año 2006. El caso de la Ciudadela Santa Rosa cuenta con unas particularidades de sumo interés para esta investigación, contrastado con los antecedentes pesimistas observados en Bogotá para la proyección de procesos de reintegración a partir de la visibilización e iniciativa de los desmovilizados para construir una comunidad y procurarse un bienestar colectivo. Dificultades que se agravan con los obstáculos inherentes de la ciudad, (el anonimato, el estigma y la alta movilidad) para que las instituciones públicas promuevan y consigan la participación comunitaria de su población objetivo: los excombatientes en proceso de reintegración.

A continuación se presentan los mapas que ayudan a localizar dentro de la ciudad a la ciudadela Santa Rosa. El primero de ellos es el mapa de Bogotá donde se resalta con rojo la ubicación de la localidad de San Cristóbal; luego, se presenta un mapa de esta localidad, con la ubicación señalada del lugar aproximadamente que ocupa la ciudadela en ésta, y por último, se muestra la ubicación exacta de la ciudadela a través de una fotografía tomada a través de la herramienta google earth.

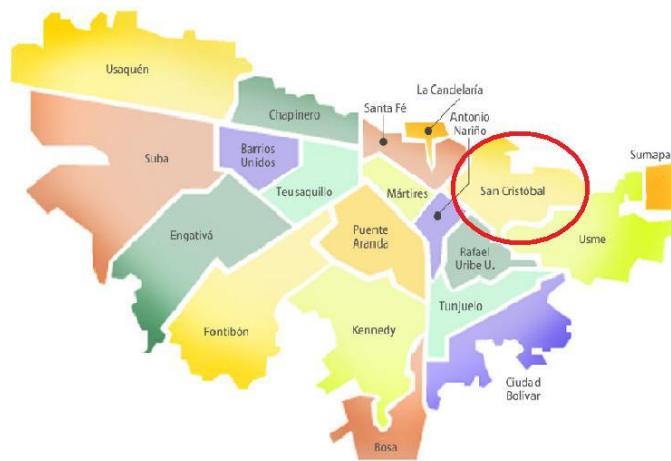


Ilustración 1. Mapa de Bogotá con sus localidades, tomado del portal oficial de Bogotá en octubre de 2011. El resaltado es nuestro.
<http://pixelclubservers.com/taxonomy/term/13>



Ilustración 2. Mapa de la localidad de San Cristóbal tomado de la página oficial de la localidad en octubre de 2011. El resaltado es nuestro.



Ilustración 3. Mapa de la ciudadela Santa Rosa. Tomado de Google Earth en octubre de 2011.

Para el año 2005 de manera coyuntural y fortuita, y como consecuencia de los atentados que perpetraron contra los albergues de desmovilizados en la localidad de Teusaquillo, se desmontaron los albergues por orden del gobierno y a cada desmovilizado se le entregó un subsidio para que pudieran vivir en ‘hogares independientes’ (ODDR, 2011: 9). Además de dichos subsidios iniciales, después de pasar por el programa de reinserción del PRVC, dentro de la estrategia de reinserción económica se hacía entrega de un monto de dinero llamado ‘capital semilla’ para iniciar un proyecto productivo, realizar estudios universitarios o para comprar vivienda (Méndez y Rivas, 2008: 11) (esto cambió con la ACR ya que solo se podía destinar este capital para un proyecto rentable, sin embargo hace varios meses se volvió a restablecer la opción de invertir en vivienda). En este contexto y dado que uno de los bancos comerciales del país estaba rematando muchas de las casas de la Ciudadela Santa Rosa, se aprovechó la oportunidad para que algunos desmovilizados pudieran acceder a una vivienda.

Por esta vía, algunos de los líderes que empezaban a surgir dentro de los albergues organizaron a un sector amplio de la población de excombatientes, quienes negociaron la compra de vivienda en la Ciudadela Santa Rosa. Una vez las negociaciones de compra de las casas fueron exitosas y paulatinamente se establece un gran número de familias de excombatientes en el barrio. La compra de las viviendas se realizó por medio de una negociación entre los desmovilizados y las instancias gubernamentales encargadas (PRVC y después ACR), donde esta entidad se encargó de darle viabilidad a la adquisición del inmueble, ya que era la encargada en desembolsar el dinero para el banco que remataba las casas. De esta manera, muchos de los desmovilizados que llegaron a Bogotá adquirieron su vivienda en Santa Rosa, como lo expresa una desmovilizada de uno de los grupos insurgentes:

“La ilusión de toda familia es tener su vivienda propia, y nosotros tuvimos éstas viviendas por remate, pues igual nos dieron la oportunidad de algo muy barato, pues barato no, sino cómodo. Entonces por nuestro proyecto productivo, pues no fue fácil como llegar y decir oiga nosotros somos desmovilizados, por qué no nos dan. No para nada, no. Sino yo fui y hablé allá y todo, y pues dijeron: bueno la única opción que hay es ésta, casas en remate. Y tomamos ésta opción (...) yo llegué con mi familia y con otras, y yo fui la que hice como todos los trámites ante esto, para ver si nos cedían ese dinero y pues finalmente pues acordaron de que nos dieran una respuesta, y fue que sí. Bueno y llevamos 5 años viviendo aquí. Y después llegaron otros

y otros, de la misma forma porque escucharon que podían tener una vivienda y así fue como empezaron a llegar aquí (...) y llegamos como 104 familias y ahora hay más” (Entrevista a desmovilizada del ELN N° 001).

Un número importante de excombatientes de los actores armados del país llegaron a la ciudadela por vías diferentes a la planteada por las personas que se organizaron dentro de los albergues para la compra de vivienda; constantemente llegaban al barrio personas que estaban acogidas al programa de reintegración del gobierno nacional, referidas por amigos, familiares, conocidos e incluso por la ACR o el PRVC (en caso de que fuera antes de septiembre de 2006). Muchas de estas personas que van llegando posteriormente no sabían que en Santa Rosa se asentaron en un principio un poco más de 100 familias de desmovilizados. Como la llegada a la ciudad no había sido fácil, muchas de las personas que se acogen al programa de desmovilización llegan con la esperanza de formar una nueva vida, por lo que buscan refugiarse en la población para hacerse imperceptibles, y así evitar el estigma que recae sobre ellos por haber pertenecido a algún grupo armado protagonista del conflicto en Colombia. Por esta razón desconocen el proceso comunitario que han venido adelantado la población desmovilizada de Santa Rosa y llegan allí por otros motivos.



Fotografía propia tomada en la ciudadela Santa Rosa en Marzo de 2011.

“La persona que nos hizo las vueltas para desmovilizarnos el vivía ahí en Santa Rosa, el cuñado de mi ex compañero, él tenía apartamento allá, entonces él que la familia tira, porque yo quería quedarme en Teusaquillo yo decía quedémonos en Teusaquillo pero las condiciones tampoco se daban. Entonces llegamos a Santa Rosa conseguimos un apartamento clandestino eso si porque uno viene con el delirio de persecución y ya pasado el tiempo es que me doy cuenta de que en Santa Rosa había varias familias de desmovilizados. Yo no sabía” (Entrevista a desmovilizada de las FARC-EP N° 003).

Por otra parte, algunas de las personas que estaban en el proceso de reintegración llegan de manera distinta a las planteadas anteriormente. Dentro de los centros y oficinas de atención y servicio del PRVC y posteriormente de la ACR, había recurrentemente

información sobre las casas que estaban en remate en el barrio Santa Rosa, mediante la cual algunos desmovilizados se ponen en la tarea de averiguar los trámites que tienen que hacer para la adquisición de una de vivienda. Sin embargo, el precio de la casa o el apartamento ya no era el mismo con el que negociaron los primeros residentes desmovilizados, ahora era un poco más caro. La adquisición de las casas y apartamentos en este periodo se dio de manera individual y no a partir de la organización de la población desmovilizada, como nos lo indica una de las desmovilizadas de las FARC-EP:

“Del banco repartían, por ahí mantenían unas cartillas, unos volantes, entonces uno se da cuenta, y como acá los primeros que compraron entonces uno tenía amigos y ay que mire que a donde yo vivo están vendiendo apartamentos, casas y todo eso. Entonces ya comenzamos... nosotros vivíamos en el Tunal y yo dije: “yo voy a ir arriba a ver qué es lo que hay allá” y me vine y me parecieron bonitos los apartamentos, las casas todo (...) Nosotros mismos lo escogimos y fuimos al banco y preguntamos y dijeron bueno esto vale doce millones, de hecho cuando en el banco nos dijeron fuimos a la oficina y en la oficina dijimos nosotros queremos este apartamento, queremos comprar acá, entonces vayan al banco, y comenzamos a hacer un tipo de papeles, que ya los papeles de los niños, los papeles de nosotros y todo eso, el extra juicio, todo eso lo sacamos nosotros, nunca nos dijeron eso allá no... nada, nada. Incluso hubo personas del Ministerio que compraron, de las primeritas creo que salieron como a ocho millones. Sí, ellos compraron de ocho millones y bueno nosotros doce millones” (Entrevista a Desmovilizada de las FARC-EP N° 004)

La anterior cita deja claro que las instituciones encargadas en el proceso de reintegración facilitaron la compra de las viviendas en la Ciudadela Santa Rosa, permitiendo que el banco que remataba las viviendas hiciera publicidad sobre la su venta. En consecuencia, llega una cantidad considerable de familias adscritas al programa de reintegración. Para cuando llegan las familias de excombatientes a la Ciudadela Santa Rosa, la comunidad residente no tenía una cohesión tan fuerte como la que empezó a constituir la población de desmovilizados una vez se asienta allí. En este momento empieza a surgir la iniciativa de formar comunidad por parte de los excombatientes, la cual se logrará concretar a través de actividades comunitarias y la conformación de una Junta de Acción Comunal (JAC) con miembros desmovilizados.

Los procesos que permitieron que los desmovilizados llegaran a este barrio no fueron planeados, se dieron de manera fortuita y esporádica, pero permitieron una fuerte

cohesión social entre los antiguos residentes y los excombatientes, proporcionando las condiciones mínimas para la conformación de comunidad.

Inicios de comunidad

Hablar de comunidad urbana en el sentido en que la concebía la antropología urbana de los años setentas del siglo XX se ha revaluado; usualmente se contemplaba la comunidad como un territorio con límites y fronteras definidas, en las que no se daba paso al flujo de ideas, personas, ni mucho menos a la reconfiguración del espacio. Por ello, se determinaba la comunidad como un espacio cerrado que se encontraba dentro de la ciudad, estable y perdurable en el tiempo, y en el cual las dinámicas sociales cambiaban poco.

Actualmente, las disciplinas sociales han cambiado la definición conceptual de comunidad desafiados por las dinámicas sociales particulares y siempre cambiantes que plantea la ciudad contemporánea. En la situación presente, no existe un modelo ideal para el estudio de la comunidad urbana, aunque se puedan fijar algunos parámetros específicos. Es por eso que “cuando hablamos de comunidades hacemos referencia a un territorio con límites y fronteras (reales o imaginarias), que tiene un nombre y un referente colectivo reconocido socialmente y que permite distinguir ese territorio de otro, lo importante no es tanto llegar a distinguir estas fronteras, sino entender el proceso a partir del cual se construyen. Es decir, las “comunidades urbanas” no podemos suponerlas como realidades estables, como los primeros estudios de comunidad, sino resultado de un proceso dinámico, social y simbólico, a través del cual las personas y los grupos construyen el sentido de pertenencia” (Safa, 1995: 126).

La ciudad contemporánea nos plantea cambios rápidos y vertiginosos en la manera como concebimos los diferentes espacios urbanos, las relaciones sociales y los significados que le atribuimos a cada uno de estos aspectos. Por eso hablar de comunidad como un concepto que nos remite a un espacio social urbano-local construido históricamente y geográficamente rígido y estable, que ha experimentado cambios relativamente lentos, conllevaría a un error sistemático en su análisis. “Hablar de espacio local en la ciudad alude a lugares donde habita la gente y se construyen formas diferentes de relación y de organización de la vida social que trascienden los límites geopolíticos. (...) pero los elementos materiales y simbólicos que configuran el entorno urbano local y la trama de

relaciones que en éste se construye, no son fijos, cambian de manera continua, dejando huella en la memoria y en la historia social de lugares, ciudades o regiones. (...) con esta perspectiva, pensamos lo local como “un logro social inherentemente frágil” que requiere atención por ser la escala micro-geográfica donde se crean comunidades situadas y sujetos locales, pero también debido a que se produce de manea conflictiva porque es el contexto donde convergen fuerzas antagónicas locales y translocales, y donde en la actualidad repercuten problemáticamente procesos regionales, nacionales y globales” (Ramírez, 2007: 642).

En la Ciudadela Santa Rosa convergieron una serie de procesos que no fueron planeados, que se dieron de manera esporádica, pero que permitieron a los desmovilizados que llegaron allí desarrollar objetivos comunes y apropiarse del espacio, erigiendo así una idea de comunidad, en tanto esta “toma forma conforme la gente se ‘enraíza’” (Anderson, 1965: 59). Al momento en que los excombatientes adquieren una vivienda propia, tiene lugar la apropiación e identificación tanto del espacio privado (la casa) como del espacio público (el barrio).

Una vez los excombatientes se establecen en Santa Rosa, comienza un proceso de formación comunitaria a partir de la iniciativa de algunos miembros desmovilizados, en donde promueven una serie de actividades con la comunidad residente, logrando que los excombatientes se visibilicen y facilitando los presupuestos para completar de manera efectiva su proceso de reintegración a la sociedad civil.

En el transcurso del proceso de reintegración no hubo discordia política entre los diferentes miembros de los grupos armados ya desmovilizados; fue un proceso incidental y espontaneo que nunca fue acordado. El comienzo de una nueva vida permitió que se dejaran las luchas ideológicas en el campo de batalla. Una vez que los miembros desmovilizados de los diferentes grupos armados tuvieron confianza en estos acuerdos implícitos, se mitigaron las tensiones previas que amenazan la eventual consolidación comunitaria; lo anterior aparece como evidencia compartida al valorar que los hijos de unos y otros puedan jugar entre sí sin riesgo ni exclusiones por el pasado de sus padres, generando un sentido de pertenencia que en últimas se estrecha por la prioridad que se le da a la infancia en el barrio; de ahí en parte su arraigo al barrio, al territorio. Las 104 familias

pertenecían a los grupos armados FARC-EP, ELN Y AUC, según una de las desmovilizadas:

“no hubo grandes conflictos dentro del proceso de desmovilización. Sin embargo, hubo algunos incidentes con algunos desmovilizados, pero a través del dialogo, la comunidad solucionó los problemas, hasta que finalmente se apaciguaron los ánimos” (Entrevista a desmovilizado de las FARC-EP y ahora gestor de paz para la localidad de San Cristóbal N° 002).

Algunos líderes desmovilizados hablan en representación de los reinsertados, con quienes integraban en ese momento la JAC, con lo cual la comunidad se da cuenta que los desmovilizados no venían con intenciones violentas. Al principio del proceso, la comunidad residente sentía extrañeza con la llegada de los nuevos vecinos, es por eso que a través de ollas comunitarias y actividades con los niños, las cuales fueron realizadas por iniciativa de un grupo de desmovilizados, lograron la aceptación de gran parte de los residentes, logrando así una construcción de comunidad y pertenencia al barrio de manera real y efectiva. Las ollas comunitarias se organizaron con el fin de conocerse unos con otros a través de un almuerzo, por lo que cada familia o persona residente en la ciudadela aportó con una cuota de comida como papa, yuca, plátano entre otros ingredientes.

La comunidad no estaba unida para la época en que los desmovilizados llegaron, sin embargo en poco tiempo eran más las personas residentes que los aceptaban que aquellas quienes los rechazaban; aunque muchos de ellos no dijeron abiertamente desde el inicio su condición de excombatiente con el tiempo se hizo de conocimiento general el que varios desmovilizados vivían allí. La aceptación y el reconocimiento permitieron progresivamente que los desmovilizados se adaptaran y agruparan efectivamente en el barrio.

Antes de la llegada de los excombatientes a la ciudadela no se realizaban actividades comunitarias, fueron ellos quienes con las ollas comunitarias lograron iniciar y convocar a gran parte de los residentes, y a su vez permitieron e incentivaron la formación de comunidad. Posteriormente, también se realizaron actividades como la celebración del día de los niños y de la mujer, la creación de un festival de Cometas por la Paz.

Mediante estas actividades, los desmovilizados se hicieron conocer no sólo con la comunidad, sino también con las instituciones públicas y privadas que se encargaban de los procesos de reintegración con los excombatientes, los cuales focalizaron gran parte de sus programas para ayudar a los desmovilizados a liderar iniciativas de empoderamiento civil,

por medio de los cuales se apoyaron grupos para la creación de una Junta de Acción Comunal con integrantes desmovilizados.

Posteriormente surge la iniciativa de crear una JAC con miembros excombatientes, donde se pactaron acuerdos con la comunidad ya establecida. En ese momento los primeros residentes del barrio apoyaron a una JAC conformada por miembros desmovilizados y no desmovilizados, así como eligiendo como presidenta a una excombatiente del ELN. De esa manera, los desmovilizados son reconocidos como parte de la comunidad por vías fácticas y legales. Desde hace ya cinco años, es la junta quien lidera la mayoría de actividades dentro del barrio, fortaleciendo el sentimiento colectivo de pertenencia y de comunidad, amparados por el hecho de que las casas sean propias y que sus residentes los acojan sin recelo. Lo anterior se evidencia en la impresión que tiene la Presidente de la Junta de Acción Comunal, quien es desmovilizada de uno de los grupos insurgentes que perviven hoy en Colombia, cuando afirma lo siguiente:

“Todo este trabajo con la comunidad, que nos acogieron, con el que se hace todo este proceso con la comunidad, lo llamo yo, de reparación. Entonces, como un proceso de reparación, o sea devolver eso que ellos han hecho o hicieron con nosotros. Todo ese trabajo comunitario que se ha hecho durante estos 5 años, ha sido un trabajo muy bueno, porque igual no fue fácil al comienzo, porque siempre como todo hay que empezar de abajo. Y pues nuestro propósito era empezar una nueva vida y pues la ilusión de cada ser humano, de cada familia es tener una vivienda propia, y nosotros tuvimos estas viviendas, pues en remate, pues igual nos dieron la oportunidad de comprar algo muy cómodo para pagar, con la plata de nuestro proyecto productivo” (Entrevista a desmovilizada del ELN N° 001).

A través de los procesos de construcción de comunidad los desmovilizados lograron visibilizarse ante gran parte de la sociedad civil combatiendo el rechazo, demostrado en la vinculación de muchos miembros de excombatientes que residen en la Ciudadela Santa Rosa con instituciones públicas como la Alcaldía Local de San Cristóbal y la Alcaldía Mayor de Bogotá, ejerciendo diferentes labores dentro de estas instituciones, siendo el más visible de estos empleos el de gestores de paz. Muchas de las luchas civiles adelantadas por los desmovilizados de la ciudadela Santa Rosa se evidencian en la obtención de empleos, ya sea de carácter público o privado para su población. En Santa Rosa se estructuró un programa bandera por parte de los excombatientes pertenecientes a la Junta

de Acción Comunal, la seguridad comunitaria; además, por parte de una de las organizaciones que fundó una de las desmovilizadas residentes, Asomupaz, se desarrolló un programa para trabajar en labores agrícolas en España durante temporadas específicas.

En este sentido, se puede afirmar que los desmovilizados crearon instituciones paralelas a las del Estado, siendo el caso más sobresaliente el de la seguridad comunitaria, donde los miembros varones mayores de 18 años, quienes voluntariamente prestan el servicio, colaboran un cierto número de veces a la semana en la vigilancia diurna y nocturna del barrio. Esta idea fue impulsada por un grupo de desmovilizados, en su mayoría hombres, los cuales se hicieron cargo de coordinar y prestar este servicio, en un principio apoyados por la Policía Nacional según los entrevistados que lideraron esta iniciativa. Así



Fotografía propia tomada en la ciudadela Santa Rosa en Abril de 2011.

lo relata uno de los excombatientes que fundaron el programa:

“También la policía hace pasadas, pasa la ronda y cuando montamos la celaduría eso lo hablamos con la policía, la policía nos prestó los radios... y yo era con ellos y todo lo que necesitaba con la policía... y todavía vienen por aquí siempre... cuando cogemos un raterito por ahí se coge y se llama la policía ahí mismo, ellos siempre vienen por aquí” (Entrevista a excombatiente de las FARC-EP No 008).

La idea nace como repuesta frente a la inseguridad que se vivía en el barrio antes de la llegada de los desmovilizados, teniendo como objetivo acabar definitivamente el consumo de drogas, los atracos y demás problemas de seguridad. Esta actividad se sostiene con los aportes monetarios que hacen muchos de los residentes del barrio (antiguos residentes, ex-combatientes y desplazados), los cuales oscilan en un valor de \$ 5 mil pesos; con esta contribución se les paga los turnos a los hombres que presten el servicio. Posteriormente, otros hombres desmovilizados, desplazados y residentes, se sumaron al programa para hacer turnos y a la vez procurarse una entrada económica.

En el 2008 la gente del barrio volvió a elegir a la JAC integrada por excombatientes, pero esta vez surge una nueva lista, que disputó con la junta actual, la cual también estaba integrada por desmovilizados y miembros de la comunidad, dejando entrever una competencia democrática entre los miembros de la comunidad por un lado, y una visibilización mayor de la condición de desmovilizados por el otro, lo que sugiere que estos procesos de reintegración mediante los cuales se construye una noción de comunidad son más efectivos que la invisibilización a los que están destinados muchos de los desmovilizados en las grandes ciudades.

A través de las instituciones del Estado y de organizaciones privadas se apoyó el proceso de conformación de comunidad en Santa Rosa, sin embargo, la iniciativa de comunidad fue un proceso soberano por parte de los desmovilizados que se asentaron en el barrio; este proceso ocurre de manera coyuntural provocando que posteriormente instituciones del Estado y privadas entraran a colaborar, con cierto tipo de necesidades que demandaba la comunidad. Para concluir, es justo reconocer en los desmovilizados ejemplos de un proceso autónomo de reconciliación, apoyo y de iniciativa propia de resocialización.

CAPÍTULO CUARTO

La construcción y el devenir de la comunidad

El análisis de comunidades dentro de las ciudades ha sido de gran interés tanto para la sociología como la antropología. En un inicio se concibieron como unidades estables y cerradas, en contraposición a las dinámicas urbanas de individualización y anomia, posteriormente esta visión fue revaluada poder entender las comunidades como procesos abiertos y dinámicos. Aunque muchos de los aspectos señalados en las dos perspectivas sean de gran relevancia para su comprensión. Tanto la ciudad como la comunidad mantienen una particularidad y dinámicas propias que responden a procesos activos y cambiantes. Por esta razón, hablar de comunidades urbanas es hablar del “resultado de un proceso dinámico, social y simbólico, a través del cual las personas y los grupos construyen sentido de pertenencia” (Safa, 1995: 126) donde tiene lugar todo un entramado de “significados, de representaciones y prácticas donde se construye el “adentro” y el “afuera”” (Safa, 1995: 126).

Desde el año 2006 en la Ciudadela Santa Rosa se viene forjando un proceso de construcción de comunidad propuesto por los desmovilizados que allí se asentaron, tal como lo expusimos en el capítulo anterior. Lo que aún no hemos definido es con qué fin surgen las comunidades urbanas, y particularmente cuál es el propósito por el cual se creó una comunidad en Santa Rosa. Como lo definimos más arriba, el concepto de comunidad (urbana) se refiere a un agregado de personas que se organizan para un fin particular, en un territorio con fronteras o límites más o menos distinguibles. Así, las comunidades se conforman para suplir ciertas necesidades que no han podido satisfacer los individuos pertenecientes a estas, sirviendo como puente o instancia mediadora con la sociedad y con el Estado y sus instituciones.

Dejamos claro anteriormente que en Santa Rosa estas necesidades están definidas dentro de los procesos de reintegración a la vida civil por parte de los excombatientes, quienes han sido objeto de estigmatización que no permite un proceso de reintegración efectivo. Esto dificulta además el acceso a ciertos recursos y necesidades para su supervivencia y la de sus familias, ya que muchos de ellos provienen de lugares ajenos y distantes a Bogotá, sin un capital económico ni social que les permita eficazmente

adaptarse a sus nuevas necesidades dentro de la ciudad. En este sentido, las organizaciones comunitarias se conforman para aliviar algunas necesidades individuales o fragmentarias que de otra manera no lograrían resolverse (Bowman, 1931: 978). De igual manera, se posibilita que “tengan un contacto directo con sus compañeros y aprendan los patrones del comportamiento social de la sociedad que los rodea” (Bowman, 1931: 978), creando tejido social y expandiendo un capital social que, en algunos casos, permite también el económico.

Pautas y Acuerdos

La comunidad de Santa Rosa surge de manera autónoma y liderada por un grupo de desmovilizados. En principio se logran algunos acuerdos con los primeros residentes del barrio, con los cuales se programa cierto tipo de actividades para acercar a todos los vecinos y que estos conociesen al grupo de desmovilizados que estaban llegando a la ciudadela; la respuesta sería positiva por parte de los residentes hacia los recién llegados, la facilitando la visibilización de los desmovilizados que allí se asentaron. Las primeras actividades que se produjeron en Santa Rosa fueron las ollas comunitarias- como lo decíamos atrás - que son básicamente eventos de integración y compromiso social generados bajo el principio de compartir alimentos, y que tenían como fin dar a conocer y presentar de manera concreta a los excombatientes ante el grupo de residentes que llevaba algunos años viviendo en el barrio;

“Yo les decía a los vecinos, bueno; el domingo vamos a hacer una olla comunitaria, y preguntaban bueno y ¿qué es eso? Yo pues les decía, es para almorzar todos, vamos a almorzar todos, cada uno traiga, en lugar de hacerlo en su casa (el almuerzo), traiga un plátano, una yuca, una papita y hacemos un sancocho y rico, cada cual trae su plato y su cuchara y compartimos, y entonces les pareció fenomenal esa idea, les pareció muy bonita, porque nunca habían tenido una integración de esas. Y entonces así fue como llegamos a integrarnos con la comunidad de esta manera, nos hicimos dar a conocer” (Entrevista a desmovilizada del ELN N° 001).

Por medio de estas actividades, los desmovilizados logran romper al menos un poco, el estigma de haber pertenecido a un grupo armado. Si bien no se elimina del todo, lograron mitigar sus efectos al anteponer una voluntad de liderazgo frente al eventual

rechazo y la inercia del prejuicio. Roto el hielo y con unas bases iniciales de comunicación y convivencia, se forma tiempo después la Junta de Acción Comunal (JAC) con la participación conjunta de residentes y desmovilizados.

Una de las primeras propuestas de la nueva JAC y de algunos otros excombatientes residentes, fue implementar políticas de seguridad, creando una vigilancia comunitaria conformada en un principio por miembros desmovilizados, a los que posteriormente se unieron residentes y algunos desplazados que también viven en la ciudadela.

“(...) Anteriormente antes de venir yo había mucho malandro, mucho drogadicto y a raíz de que nosotros vinimos pues todos ellos se vinieron acercando y se fueron porque venían de otros barrios a robar y nosotros hicimos un frente junto con la presidenta de la junta, el esposo y todos los que estábamos acá y sacamos toda esa gente y ya... ya aquí tu puedes venir pero anteriormente no porque te atracaban o tu pasabas y la gente fumando marihuana te echaban el humo encima eso no importaba nada ahora tu puedes llegar a las cuatro de la mañana no encuentras... y tu vives tranquilo y eso es lo que me ha gustado, la tranquilidad del barrio y que la comunidad se ha integrado con nosotros los que estamos acá” (Entrevista con miliciano desmovilizado de las FARC-EP No 007).

Igualmente surge de la necesidad de proteger el territorio de agresores externos y en particular de la delincuencia común, campante desde en el barrio hasta la llegada de los excombatientes, y asociada a los robos (a personas y viviendas), la drogadicción y el pandillerismo. Se acordó con todos los habitantes del barrio la contribución con una cuota de dinero (la cual empezó siendo de \$ 5.000 pesos, pero hoy está en \$ 12.000 pesos) para que las personas que se encargaban de la vigilancia tuvieran algún tipo de retribución. Al final se corrigieron dos problemáticas con un mismo programa, por un lado se logró mitigar la inseguridad en el barrio, y por el otro se crearon algunos empleos:

“Lo que tenemos aquí de empleo es lo de la vigilancia, llega un muchacho y dice, ay que yo quiero colaborar con lo de la vigilancia, y sí ha pues sí claro. (...) se les paga \$ 20.000 pesos por el turno. Hay cuatro de noche y dos de día. Y hay como un refuerzo los sábados por la noche donde hay... hay diez, diez muchachos” (Entrevista a desmovilizada de ELN No 001).

Con respecto a la seguridad otro miembro de la comunidad dice lo siguiente:

“Yo paso por aquí y no hay ladrones ni nada, porque es buena seguridad por ahí, el barrio es bonito. La verdad lo que yo llevo acá, he visto el día de las madres, vi como que hacían una

reunión. La seguridad hay que pagarla a la presidencia de acá. Pero acá me ha parecido bien vivir. Usted sabe que en la mayoría de los barrios uno ve gente mal parqueada por ahí fumando vicio, pero en este barrio cosas así no he llegado a ver, este barrio es como calmado en eso, está bueno” (Entrevista a desmovilizada del ELN° 005).

Por otro lado, en las conversaciones que hemos sostenido con algunos miembros de la comunidad que no son reintegrados, manifiestan tranquilidad a con respecto a la presencia de los excombatientes, al reconocer que el barrio años atrás era muy peligroso en contraste con la situación actual; ahora se sienten un poco más tranquilos y seguros, sienten que su barrio mejoró. Los excombatientes que viven en Santa Rosa han logrado desmontar el estigma siempre probable de parte de la comunidad receptora y de la sociedad civil en general:

“Pues sí, este barrio antes era, pues como no muy bueno, pues habían hartos atracos y pandillitas de muchachos echando vicio en el parque, y cuando llegan pues estos señores, usted sabe, los... ¿cómo se llaman? los desmovilizados, las cosas cambian. Sacaron a todos esos que hacían males por acá y que eran de otros barrios” (Entrevista a residente de Santa Rosa N° 009)

Por su parte una de las personas desmovilizadas afirma que:

“Lo que dicen que es ejemplo es porque tenemos desmovilizados y comunidad. No se le puede negar que el desmovilizado como tal trae un régimen militar y según lo que alcance a ver cuando recién llegué era que el barrio mantenía lleno de droga, de delincuencia común, y claro al ser los vigilantes desmovilizados pues no entran por acá” (Entrevista a desmovilizada de las FARC-EP N° 003)

Por lo anterior se puede observar en la comunidad de Santa Rosa la implementación de prácticas sociales mediante acuerdos y diálogos, han solventado algunas de las necesidades que demandaba el vecindario. Por otra parte, es necesario recalcar al respecto que este mismo proceso acordado y dialogado también se ha venido desarrollando con instituciones públicas. En este sentido, los programas de reintegración tanto del gobierno nacional como distrital han enfocado parte de sus proyectos en la ciudadela Santa Rosa gracias a los precedentes de acción colectiva y comunitaria que se venían adelantando.

Así mismo, la JAC gestionaba con la ayuda de estas instituciones talleres y eventos que acercaran cada vez más a la comunidad, persiguiendo un doble objetivo: por un lado,

no sólo acercaba a los residentes del barrio, sino que a la vez se le daba un reconocimiento público a dicha comunidad.

“Nosotros por ejemplo, con el ICBF gestionamos desayunos para unos cuatrocientos niños. Hasta ahora logramos que nos dieran cien, y eso es un avance, eso lo hicimos nosotros. Otra cosa que hicimos en Santa Rosa, la junta, fue con Secretaría de Gobierno, que nos dieran más talleres, capacitaciones y eventos para los niños. Al igual que también venían otros compañeros reintegrados de otros barrios porque aquí era más fácil, se sentían cómodos. Todo eso lo hicimos luchando, para salir adelante porque queríamos una nueva vida” (Entrevista a desmovilizada del ELN No 001).

Lo que resulta evidente es cómo a través de los acuerdos pactados con las instituciones públicas, la reintegración en Santa Rosa ha logrado avanzar de manera más eficaz en comparación con otros casos y participantes del programa de desmovilización. Ello conllevó también al reconocimiento social y público de los procesos comunitarios que se adelantan en este barrio, del mismo modo, este hecho propició aún más la visibilización de los ex combatientes y la revalorización de su condición susceptible de múltiples prevenciones y temores. Vale la pena destacar en este punto, que por esta vía de acuerdos y diálogos se solventaron algunas otras necesidades que tenía la comunidad como la nutrición de los niños, educación y participación en talleres sobre derechos humanos y ciudadanía, y talleres psicosociales que eran de asistencia obligatoria para los desmovilizados que pudieron llevarse a cabo dentro del mismo barrio, ahorrándoles de pasada el costo del desplazamiento.

Para finalizar este punto, vale la pena señalar que en este proceso se presentaron algunas tensiones entre la comunidad y las instituciones públicas, pero este tema se reservará para más adelante.

Prácticas de integración

Todos estos procesos de integración comunitaria que se dieron primero entre los desmovilizados y los residentes, y posteriormente entre la comunidad ya conformada y las instituciones públicas, permitieron prácticas de integración particulares dentro de la ciudadela Santa Rosa. Como lo vimos anteriormente, se efectuaron a través de las ollas comunitarias y el programa de vigilancia comunitaria, donde se dieron los primeros

acercamientos que luego fueron fortaleciendo y dando origen a nuevos eventos e iniciativas que ayudaban a estrechar más los lazos sociales entre las familias de Santa Rosa.

Ejemplo de ello es el día de los niños celebrado en el mes de abril, donde se establece una serie de actividades dedicadas a la recreación de los niños del barrio; no sólo se enfoca de la simple recreación infantil sino además en lograr un acercamiento entre las familias y los vecinos. Por otro lado, ayuda al fortalecimiento de los lazos sociales dentro de la comunidad cuando las familias y las personas se conocen de manera más cercana. Se permite así que no sólo las familias de excombatientes se identifiquen entre sí por las afinidades que existen al compartir un pasado en un grupo armado ilegal sino que también se creen filiaciones e identificaciones con las demás familias a partir de sus problemáticas cotidianas y personales.

Para el caso particular de la ciudadela Santa Rosa, hemos anotado antes que el asentamiento de desmovilizados no se limita al recibimiento de un solo grupo armado, sino que allí confluyen desmovilizados de las AUC, FARC-EP y del ELN. Este hecho es importante para entender cómo los eventos y prácticas comunitarias ayudan a la reintegración



Festival de las Cometas por la Paz. Fotografía propia tomada en la ciudadela Santa Rosa en Agosto de 2011.

efectiva de estas personas a la vida civil, ya que las afinidades y semejanzas que tuvieron en un pasado conflictivo, y que se reconocen como negativas se revelan ahora como oportunidades y como proyecto colectivo.

Otra de las actividades impulsada por los desmovilizados es el ‘festival de las cometas por la paz’, realizado a mediados del mes de agosto desde hace cuatro años (2007). Allí muchas de las familias aportan una cuota de dinero junto con las alianzas con instituciones públicas o privadas en la compra de cometas y refrigerios que se entregan a los participantes. No es un evento exclusivo para los niños, sino un evento que integra a las familias animado con la entrega de premios y música.

Del mismo modo, los eventos deportivos son también un mecanismo de integración que se piensan y organizan con el fin de que los jóvenes tengan diferentes alternativas de esparcimiento y se alejen de problemas relacionados con la delincuencia común y la drogadicción. Por esto, torneos de microfútbol y campeonatos de baloncesto, son prácticas de integración dirigidas hacia los jóvenes en donde se promueve el juego amigable, el respeto, el diálogo y la buena resolución de los conflictos.

Todas estas actividades que se promueven en la ciudadela Santa Rosa multiplican a su vez prácticas de integración informales que logran internarse en relaciones a su vez más íntimas y de tipo afectivo entre las diferentes familias, desenvueltas en ámbitos más privados como fiestas, cumpleaños, y navidades entre otras:

“La convivencia es muy buena entre todos, pues creemos que entre los mismos desmovilizados hay convivencia buena también. (...) aquí todos somos iguales y todos tenemos... nos reunimos, jugamos, hacemos fiestas, paseos, si todo eso, o sea la convivencia entre nosotros ha sido buena, o sea aquí nunca se ha escuchado un problema por decir, que ay que pelearon los paracos con ese man que es guerrillero, pelearon estos manes que son guerrilleros con estos, no” (Entrevista a desmovilizada de las FARC-EP N° 004).

Las prácticas de integración permiten que se vayan desdibujando los rótulos de desmovilizados y se piense y hable en términos de comunidad, de ciudadanos, de personas, y no en función de un estigma de ex combatientes que los desagrega, al menos simbólicamente, de la sociedad civil. Es por esto que todo el proceso de construcción de comunidad ha sido importante en la resocialización de estos individuos y sus familias en un contexto que había sido ajeno para muchos de ellos, como es la ciudad de Bogotá. Por la vía comunitaria se han logrado crear fuertes lazos sociales consolidando un capital social que les ha permitido solventar ciertas necesidades que de otra manera no hubieran podido suplir y que no tenían en el momento de la desmovilización.

Lazos y relaciones sociales

La comunidad y las identificaciones propias se generan cuando se comparte un conjunto de significados, representaciones e intereses. Sin embargo, las personas se vinculan, crean lazos y sentidos de pertenencia, también por la aparición de vínculos afectivos (Safa, 1998: 18).

Aunque en la ciudadela se establezcan estos lazos y estos puntos comunes, también están presentes dinámicas de conflicto y tensiones al interior de ésta, propias de su carácter cambiante y dinámico, e influido por las pautas urbanas que también intervienen: “Hablar de espacio local en la ciudad alude a lugares donde habita la gente y se construyen formas diferentes de relación y de organización de la vida social que trascienden los límites geopolíticos. En este proceso se desarrollan actividades cotidianas y rituales, se crean formas de intercambio, de cooperación, de participación y de representación, vínculos de pertenencia, lazos afectivos y de confianza. Con la trama de relaciones y códigos que cohesionan al interior a grupos distintos e incluso antagónicos, surgen necesidades, demandas e intereses diferentes, así como discrepancias, conflictos y fracturas entre actores sociales. Pero los elementos materiales y simbólicos que configuran el entorno urbano local y la trama de relaciones que en este se construye, no son fijos, cambian de manera continua, dejando huella en la memoria y en la historia social de lugares, ciudades o regiones” (Ramírez, 2007: 642).

De esta manera, en la ciudadela se pueden explorar tanto los procesos de construcción de comunidad, de elementos simbólicos comunes así como los conflictos y discrepancias con respecto a distintos aspectos constitutivos del lugar y de sus dinámicas locales en construcción. Sin embargo, a través de las relaciones y lazos construidos tanto con el espacio, como los líderes y vecinos, se da cuenta del establecimiento de fronteras, de significados o ideales compartidos, reflejando el sentido de pertenencia y los factores vitales para el reconocimiento de una comunidad- como lo señala Safa-, tales como la seguridad, la estabilidad y la orientación (Safa, 1995: 127).

Aunque para los desmovilizados, dada su condición y trayectoria de vida, les resulta más difícil entablar relaciones y lazos cercanos con la sociedad civil, por el miedo a revelar su pasado (el miedo al rechazo y al juicio), en la Ciudadela Santa Rosa han conseguido visibilizarse y entablar acuerdos implícitos e identificaciones confusas, protagonizando un valioso proceso comunitario que ha respondido a ciertos intereses y necesidades de su comunidad. Como lo describe una de las desmovilizadas entrevistadas, aunque las personas sepan de su condición, algunos prefieren todavía no ser identificados:

“En la convivencia con las personas, eso es algo que no me ha dado duro de convivir con las personas, con la diferencia que acá tengo que vivir como con ese yugo dentro, que no le digas a

él que sos desmovilizada, no le digas a él, que él no se entere que tu eres desmovilizada (...)no es que yo desee que sepan, para mí mucho mejor que no se enteraran porque no falta quien no esté de acuerdo con uno, quien lo mire mal a uno, quien lo deseche, quien le diga es que tú fuiste, que tú hiciste esto, que usted yo no sé que (...) Pero si, algo que no me ha dado duro es compartir con la gente, estar en actividades y todo esto, no, eso no me ha dado duro para nada (...) Yo te digo que en mi caso, yo preferiría que nadie supiera, pues para nadie es un secreto aquí dentro de la ciudadela que ya a nosotros nos conocen a todos como ... porque no faltó quienes ya regaran todo eso, pero para mí, en mi forma de pensar, ojalá que nadie supiera que yo pertenecí a eso, si para mí hubiera un borradorcito borraría todas las cositas que dijeran de los desmovilizados” (Entrevista desmovilizada FARC-EP No 004).

En un principio llegaron aproximadamente 104 familias a la ciudadela a ocupar casas que había desalojado el banco. Al llegar no dijeron que eran desmovilizados, pero con



Celebración del día de los niños. Fotografía propia tomada en la ciudadela Santa Rosa en Abril de 2011.

el tiempo y la visibilización que generaron los líderes comunitarios, los habitantes del lugar empezaron a enterarse de la situación. Inicialmente las personas tuvieron miedo porque los excombatientes vivieran allí, miedo a represalias de los grupos y a que se revivieran escenarios violentos dentro de su

espacio de residencia. Muchos advertían a los nuevos habitantes que llegaban de no meterse con los desmovilizados y hacían comentarios negativos sobre ellos.

Debido a la labor de los líderes comunitarios concretada en ollas comunales, actividades para los niños, para las mujeres, y también en la visibilización de la comunidad, se consiguieron beneficios tanto de parte de instituciones gubernamentales (nacionales y distritales) como de instituciones privadas. Esto ayudó a la legitimidad y a la asimilación positiva del hecho de que población desmovilizada hubiera llegado al lugar. Desde el momento en que empiezan a compartir espacios colectivos se tejen relaciones cercanas de amistad y cooperación, pero los desmovilizados siguen sin presentarse como tales abiertamente, pese al terreno ganado y la confianza generada.

Muchos de los desmovilizados en un principio tenían trayectos y destinos definidos, rutinas establecidas, y no participaban mucho de la vida del barrio; se concebía más bien como una zona residencial en la cual encontraban su privacidad después de enfrentarse al extrañamiento típico de la ciudad. Con el tiempo y el fomento de asociaciones, reuniones y actividades de integración, el barrio empezó a ser experimentado por sus habitantes como producto de un sentido de pertenencia y de colectividad, originando y fortaleciendo iniciativas para responder a los intereses y demandas relevantes de la comunidad, así como pautas e ideales compartidos acerca de la convivencia.

Se puede entender el barrio, entonces, como lugar para la construcción de un punto intermedio entre la ciudad, es decir lo público, y su ritmo de vida rápido y cambiante, y lo privado que es reductible a una residencia con su grupo familiar más cercano. “El barrio posee, así, ‘usuarios’ de un ámbito, de itinerarios, de marcas, de valores aprendidos y apropiados” (Gravano, 2005: 158), *“un dispositivo práctico cuya función es asegurar una solución de continuidad entre lo más íntimo (el espacio privado de la vivienda) y lo más desconocido (el conjunto de la ciudad o hasta, por extensión, el mundo) ... el barrio es el término medio de una dialéctica existencial (en el nivel personal) y social (en el nivel de grupo de usuarios entre el dentro y el fuera)”* (Mayol, 1999: 10 citado por Gravano, 2005: 158)

Además de asegurar la continuidad, el fortalecimiento de relaciones y formas de organización dentro de la ciudadela, o de vecindarios, se procuran beneficios producto de la conveniencia de la asociación y su visibilización, así como el despliegue de acciones culturales y rituales que construyen un sistema común de significados y representaciones. Como lo menciona Gravano (2005), sobre los aportes de Pierre Mayol y Michel de Certeau, “La práctica del barrio, para estos autores, despliega la acción cultural y el proceso de socialización por antonomasia, dentro de una dialéctica entre la libertad (indicada empíricamente por el deambular urbano) y el interés (la “conveniencia”) capaz de marcar al propio barrio como un juego de “tácticas” puesto al servicio del contacto con el “otro”. La configuración pública del espacio barrial impulsa el proceso de colectivización donde cierto tipo de relaciones tejen encuentros y coexistencias cuyo soporte es el cuerpo y se manifiesta en la adhesión a un sistema de valores y a la contención dentro de la máscara simbólica con la cual cada uno representa un papel en esa escenificación con “contrato implícito” que es

el barrio. Y el hacer barrio finalmente se ritualiza, en la búsqueda de un punto medio, de reconocimiento conveniente para el sostenimiento de la vida social y cultural” (Gravano, 2005: 158, 159).

El hecho que excombatientes de distintos grupos armados residan en la ciudadela creó unas dinámicas particulares. Se sabe que están allí, algunos saben quiénes son, otros han revelado su pasado, mientras otros siguen ocultándolo. Además, entre algunos desmovilizados se identifican y crean lazos fuertes por afinidad y por un origen común, aunque expresan que allí no se relacionan en base al grupo armado al que pertenecieron, porque la consigna es construir una vida nueva alejada de las prácticas del conflicto. Sin embargo, hay elementos que identifican a los excombatientes, como los comentarios en voz alta alusivos a su vida en el grupo, a la cercanía con los líderes reconocidos como desmovilizados, por trabajar con algunos programas de atención como el de la secretaría o la alcaldía local, la participación en los talleres colectivos psicosociales de la ACR, entre otras. Muchas veces durante el trabajo de campo, los comentarios sobre la vida en el grupo sobresalían, aunque insistían en que en la ciudad era distinto, que estaban intentando construir otra vida y que para eso debían prescindir de identificaciones previas con los actores armados.

Aun hoy se encuentran algunos vecinos que tienen una mala impresión y expresan un rechazo tajante frente a los excombatientes, redundando en la dificultad para poder identificarse libremente. Generalmente, los desmovilizados creen y afirman que el identificarse como tal sólo cierra puertas y niega acercamientos con otras personas, por lo que prefieren no hacerlo público, aun cuando se sostienen relaciones cercanas. Así fue el caso de una de las señoras de la comunidad quien se entero tiempo después que sus vecinos y amigos cercanos eran excombatientes:

“Cuando llegué yo, me habían dicho que sólo vivían aquí desmovilizados, y que era gente dizque muy mala, que tuviera mucho cuidado, y pues yo llegué sin conocer a nadie, y a pesar que sí, que había que tener mucho cuidado yo soy una persona muy dada a la charla, y claro, tuve mucho contacto con esa gente y nunca supe que eran desmovilizados, porque sí, así como usted, como yo, gente común y corriente, además de ser gente dispuesta a ayudarle a la gente” (Entrevista a miembro de la comunidad No 009).

De allí la premisa compartida o el “contrato implícito” de no revivir los episodios del conflicto, de no referenciar en público el grupo de procedencia, sobre todo no hacerlo frente a los niños y en conclusión evitar y no entorpecer el proceso comunitario. Sin embargo, como en toda convivencia, se presentan problemas asociados a las costumbres de vida, en las fiestas o producto de “borracheras” donde se presentan riñas entre residentes.

Dado que en la ciudadela el trabajo de los líderes ha conseguido grandes beneficios para la comunidad, y que desde un principio buscó emprender prácticas sociales de integración que ayudaran a la construcción pública del espacio local, las tácticas empleadas atrajo muchos beneficios y respuestas positivas para necesidades de los residentes. La ciudadela se convierte así en un lugar especial y conveniente tanto para los desmovilizados que reconstruyen un tejido social y una serie de relaciones, como para los habitantes regulares de la ciudadela que han obtenido beneficios que no obtienen en otras partes, dada la atención del Estado y las labores constantes por dar respuesta a demandas sociales.

Especialmente, el programa de la seguridad comunitaria trajo al barrio un beneficio importante pero también dinámicas secundarias y opiniones críticas dentro del lugar. Una vez consolidado, fue apoyado incluso por la policía con el préstamo de los radios; la situación en la ciudadela cambió y el lugar se volvió seguro. Como ya se ha mencionado, este servicio tiene un costo voluntario para los residentes, aunque algunos lo pagan por no estar de acuerdo con su prestancia o por evasión. Otra posición frente a la seguridad del barrio considera que el servicio pagado es innecesario en tanto las relaciones primarias cercanas y la comunicación directa, así como el sentimiento de solidaridad los lleva a todos a cuidarse entre sí:

“Yo no pago seguridad porque la seguridad del barrio es del barrio ¿cierto? es para todos, todos debíamos pagar la seguridad pero toda esa plata debería ir a un comité a unos fondos, pero esos fondos no existen, entonces yo no voy a engordarle el marrano a otro. No, cómo te dijera, eso es algo bonito acá en el barrio, la seguridad entre los mismos vecinos



Celebración del día de los niños. Fotografía propia tomada en la ciudadela Santa Rosa en abril de 2011.

(...) aquí cualquier cosita la gente está pendiente, quién entra en tu casa, quién salió, quién se está trasteando (...) y entonces yo por eso digo: yo no pago vigilancia porque no voy a engordar marrano y segundo que entre nosotros mismos vigilamos”
(Entrevista a desmovilizada de las FARC-EP No 004).

Hay varias personas que no están de acuerdo con algunas prácticas de los líderes de la ciudadela, porque indican que estos sacan provechos individuales, tanto de la seguridad como de otras actividades o beneficios otorgados en teoría para las personas residentes. Aunque se reconoce que la labor de los líderes fue importante por la visibilización y el proceso de reconciliación emprendido, así como para la realización de actividades, también se critica la apropiación del poder local, la perpetuación en puestos influyentes y la extracción de beneficios para ellos y sus familias, generando sentimientos de desigualdad, deslealtad, competencia, discordia y apatía frente a la participación en la vida pública del lugar. Aunque varias personas manifiestan estar en desacuerdo con diversas prácticas de algunos líderes, también señalan que allí impera la ley del silencio; hay un sentimiento de impotencia y desilusión frente a la situación, pero no de indiferencia en cuanto a lo que atañe a su comunidad, lo que sigue manifestando los sentidos de pertenencia fuertes desarrollados por los residentes. En síntesis, si bien fue efectivo un movimiento y empoderamiento local, también se denuncia la apropiación indebida de ese poder.

Los niños y jóvenes son también un factor clave dentro de esta integración y dentro de la vida pública de la ciudadela. Son ellos quienes hacen más uso del espacio y se benefician de los servicios (desayunos, regalos) y actividades (día del niño, festival de cometas) que tienen lugar allí; en la ciudadela hay más de 400 niños menores de cinco años (según el testimonio de una líder comunitaria) por lo cual las demandas más importantes son enfocadas en la infancia. Además, el hecho que los niños jueguen con todos sin saber si son hijos de desmovilizados o no, y estando exentos de los estigmas que recaen sobre los padres excombatientes, generan espacios comunes y relaciones sociales sin el prejuicio de por medio. Así lo explica una de las líderes comunitarias de la ciudadela:

“así también, no se ha llegado en ningún momento a que alguien le diga al otro “usted es guerrillero”, no no no, y mucho menos entre los niños, porque la mayoría de hijos de los compañeros pues llegaron sin saber porqué, así que todos los niños salen y juegan todos entre sí, y la cuestión de la guerra pues no se comenta con ellos, en eso se ha enfatizado mucho con los compañeros...pero igualmente nunca ha habido un problema,

los niños y jóvenes han crecido con los niños y jóvenes de la comunidad” (Entrevista a desmovilizada del ELN y líder comunitaria No 001).

Las fiestas son también un elemento muy importante en el establecimiento de vínculos y lazos sociales. Muchos desmovilizados de distintos grupos armados y gente de la comunidad se reúnen en algunas casas a tomarse unos tragos y bailar, además algunas veces los entrevistados señalan que llegan incluso personas de otros barrios a participar de las fiestas ofrecidas allí. Estos espacios de socialización ayudan a conocerse más y conocer más personas que habitan el espacio urbano, privilegiando la socialización cercana por encima de la procedencia y el pasado. Aunque varias personas señalan que allí no existen problemas entre habitantes excombatientes de distintos grupos armados enemigos por discrepancias ideológicas o por antagonismos que hayan perdurado, sí manifiestan que algunas veces se presentan problemas debido al alcohol, que conllevan diferencias más espontáneas que ideológicas, agudizadas por un pasado violento más que por razones políticas, manifestadas incluso entre excombatientes del mismo grupo armado.

“Ya por ejemplo aquí en el barrio hay mucha gente que somos de diferentes grupos y nos reunimos a veces a hacer rumbas en las casas y ahí usted no se da cuenta de cuál perteneció a cual, todo es igual, aquí ya todos somos iguales, aquí ya no existe que yo fui comandante, aquí ya no existe que yo fui superior, aquí no existe que yo fui paraco, que yo fui guerrillero, no, nada, aquí todos somos iguales (...), si han habido problemas, problemas de borrachera, que eso se emborrachan y comienzan... pero como tal por diferencia de grupo no, por eso no ha habido ninguna clase de problema.(Entrevista a desmovilizada de las FARC-EP No 004)

La relación entre los líderes que coordinan las actividades y programas y algunos residentes desmovilizados es ambigua. Por un lado, se genera una identidad como comunidad, alimentada por las actividades y beneficios que confirman el papel representativo en lograr la visibilización y la tranquilidad para compartir el espacio y la vida pública en el barrio, pero del otro lado, surge una posición de poder que resulta inconveniente, riesgosa y abusiva dado que, según residentes entrevistados, se obtienen beneficios personales a través de medios no formales de apropiación de los recursos que han sido otorgados a la comunidad.

El poder que se le reconoce al líder que maneja la seguridad en la ciudadela excede al beneficio o al servicio prestado a la comunidad y a veces es comprendido como una

autoridad o capacidad para decidir quién se queda, quién pasa y quién se va. El control de la vida pública resulta beneficioso porque mantiene la zona segura, pero perjudicial en tanto hay gente que no está de acuerdo en hacer un pago, debido a las denuncias sobre abusos de poder y cooptación de los programas y actividades que definen el uso del espacio, propiedades y el ámbito público en general.

Adicionalmente existe una estrategia que refuerza la seguridad: los desmovilizados han hecho uso del estigma que recae en ellos y que los juzga como seres violentos, indeseables e impulsivos, para generar terror entre los delincuentes reales o potenciales que quisieran realizar actividades delictivas dentro de la ciudadela.

Con respecto a las apropiaciones del poder dentro de la ciudadela hay discrepancias tanto de parte de los residentes como de otros líderes que trabajan por asumir labores, generando relaciones de envidia y competencia. Los actuales líderes que mantienen el control de los programas y servicios, así como de la Junta de Acción Comunal, generan relaciones tirantes con otros líderes u otros actores que quieran intervenir en la ciudadela, ya sea por evitar protagonismos alternos a su equipo o por discrepancias con los representantes y las políticas de las instituciones que se acercan e intervienen. Dentro de los residentes es común la creencia acerca de que allí predomina la ley del silencio, ya que no hay otro liderazgo fuerte y reconocido que pueda cambiar las relaciones de poder ya establecidas.

“La comunidad está mamada ¿qué es lo que pasa? Que no ha habido una persona con liderazgo que se monte en esa presidencia de la Junta de Acción Comunal. (...) y la gente se ha quejado, pero en realidad nadie es capaz de judicializarlos y por eso no podemos hacer nada al respecto” (Entrevista a desmovilizada de las FARC-EP No 003).

“Son inquietudes que más de uno tenemos pero también como dice el dicho estamos como en el modo del silencio, todo el mundo en silencio nadie dice nada, nos damos cuenta, nos enteramos de todo pero todo el mundo come callado, ay que yo no quiero tener problemas, que no se qué” (Entrevista a desmovilizada de las FARC-EP No 004).

Actualmente, y como panorama desalentador visto en retrospectiva con el esfuerzo colectivo, la comunidad está en proceso de desintegración debido a que la ciudadela está ubicada en zona de alto riesgo no mitigable, por lo cual entablaron demandas para que les paguen sus casas; a algunos ya les pagaron y están desalojando el lugar. El territorio donde

se encuentra ubicada la Ciudadela Santa Rosa ha sido catalogado por las instituciones estatales como zona de alto riesgo dadas las condiciones del terreno, representando un riesgo potencial de sufrir un desastre natural como avalanchas y deslizamientos de tierra, poniendo en riesgo por supuesto la vida de las personas que habitan el barrio.

Esta situación altera a todos los residentes en tanto la estabilidad conseguida en la ciudadela, la apropiación del espacio, los lazos y la realidad construida a partir de esta comunidad se ven amenazados. Varias personas han manifestado la angustia y zozobra sobre este proceso de desalojo y de reubicación (individual) ya que implica volver a pasar por procesos burocráticos de papeleo, mudanza y asentamiento en un lugar nuevo. De igual manera, la dificultad para volver a generar relaciones con el espacio y satisfacer sus necesidades y, si es posible, poder volver a participar de la construcción pública de otra comunidad, agravan la incertidumbre y el futuro inmediato y sobre todo, con hacer que los desmovilizados de la ciudadela reincidan en la tendencia generalizada de “invisibilizarse” dentro de la ciudad después de un proceso positivo por combatirla a través de la experiencia comunitaria.

Se puede decir que los lazos y las relaciones entre los residentes de la ciudadela se han configurado y fortalecido al compartir espacios y actividades que lograron acercar a las personas y que ayudaron a la apropiación del territorio, así como a la identificación y sentido de pertenencia con respecto a la historia social del lugar. De esa manera se logró que un conjunto de residencias con sus distancias privadas pasara a ser una comunidad que comparte ciertos significados, pautas y valores, así como también a partir de las divergencias y conflictos que la definen.

Es importante resaltar que los perfiles participativos y de liderazgo de algunos excombatientes reforzados en la vida en el grupo armado, han facilitado los tipos de organización y las iniciativas, tal como lo reconoce una de las líderes más importantes de la ciudadela; además, las relaciones primarias y lo cerrado de los grupos a los que pertenecían, junto con el carácter predominantemente rural de éstos, generan pautas de socialización y de interacción mucho más cercanas y cohesivas, lo que facilita amortiguar y mediar entre los cambios de vida, de espacios y de realidades.

Muchas de las personas que viven en la ciudadela vienen de otras partes del país, por lo cual no tienen naturalizadas y aprehendidas las dinámicas de la gran ciudad, y al

encontrar un espacio compartido, reproducen como estrategia de supervivencia social pautas culturales y costumbres propias de grupos más pequeños y cohesionados, que configuran la vida pública del barrio y que se expresan a través de la cercanía de sus relaciones y de los sentimientos de cooperación y solidaridad.

Relación entre la comunidad y sociedad

Como lo mencionamos anteriormente, la relación entre comunidad y sociedad está mediada por las particularidades de cada una y por los distintos modos de vida que promueve; ninguna de las dos se considera como una unidad cerrada. Aunque las comunidades se ubiquen dentro de la ciudad, estas no están supeditadas a reproducir las interacciones y dinámicas propias de las grandes ciudades, sino que son muestra de la diversificación de modos de vida, relaciones con el espacio y configuraciones de sentido que se dan dentro del entorno urbano local. Sin embargo, los habitantes y la comunidad están en continua interacción con la ciudad, materializada en la ciudadela principalmente en las relaciones con las instituciones.

La relación de los residentes de la ciudadela con la ciudad es la esperada, representa en un inicio un desafío por lo rápido, abrumador y cambiante de las dinámicas urbanas, pero con el tiempo se han acostumbrado a “viajar por la ciudad” y a interactuar en distintos contextos.

La relación de la comunidad de la ciudadela con la capital se puede explorar a través de sus organizaciones y líderes representantes. De igual manera, la relación de esta con la ciudadela se puede explorar a través de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que buscan intervenirla. También la relación con su entorno más próximo, los barrios aledaños, se da a través de las organizaciones que los representan, particularmente las Juntas de Acción Comunal.

Las relaciones entre los distintos actores que intentan participar de la construcción y transformación de la vida pública de la ciudadela, han variado desde la cooperación y la articulación hasta el rompimiento de relaciones y tensiones entre los representantes de las distintas instituciones. Como lo señala Ramírez (2007), la comunidad se ve afectada y definida de cierta forma por procesos más amplios de políticas y (o) estrategias económicas y de mercado que determinan el sistema, generando en su interior dinámicas diversas

(relaciones de intercambio de bienes y servicios, prácticas socioculturales y políticas) que ayudan a su integración o a su transformación. Se entiende así que sus organizaciones locales, impulsadas o limitadas por tales dinámicas pueden tomar dos caminos: “en unos casos generan acuerdos y compromisos en torno a asuntos de interés común entre actores diferentes que participan en el diseño de políticas, en decisiones públicas y en acciones orientadas a solucionar problemas compartidos. En otros casos, derivan en discrepancias de carácter irreconciliable resultado de concepciones, intereses y demandas contrapuestas, lo que tiende a erosionar los vínculos sociales, la comunicación entre ciudadanos y las relaciones de confianza entre estos y las instituciones” (Ramírez, 2007: 642, 643). Como lo manifiesta una de las personas entrevistadas de la ACR, tanta afluencia de actores externos concentrados en Bogotá y su intermitencia han generado reacciones negativas por parte de la población desmovilizada de la ciudad:

“Bogotá tiene una demanda alta de temas comunitarios, de instituciones que trabajan con diferentes temáticas, es alta demanda y a veces las comunidades se sienten como... no tienen tanta confianza en la institucionalidad precisamente por el sin número de actividades y que muchas veces ellos dicen es que nos manosean, vienen y nos manosean y los procesos como que no continúan, entonces es difícil iniciando pues generar esos procesos como de confianza y de igual forma pues nosotros no estamos tan acostumbrados, como colombianos, a participar en todo este tipo de procesos, ni nosotros, pues menos, los sectores a los que nosotros identificamos o vemos determinadas necesidades para intervenir” (Entrevista a gerente del centro de servicios de la ACR No 011).

En consecuencia, en la ciudadela podemos ver cómo las dinámicas propias del sistema han afectado la comunidad y como sus organizaciones han representado los dos caminos mencionados. No solamente se han dado relaciones de amores y odios con instituciones externas, sino que también las discrepancias internas han generado procesos de desconfianza y apatía, como lo veíamos anteriormente.

La relación con las instituciones gubernamentales es compleja y ha pasado por distintos niveles de aceptación e influencia. La Junta de Acción Comunal es la que actualmente tiene más influencia y poder sobre la ciudadela y a partir de la cual se determinan las alianzas o distanciamientos con los otros actores.

La relación con la ACR actualmente está deslegitimada por los líderes y por gran parte de la comunidad; en su opinión estos han venido sólo a tomar fotos y alardear con el proceso, el cual fue autónomo y que no fue asistido desde un principio por esta entidad. La reticencia se justifica entonces en tanto su apoyo no fue constante y por el contrario aprovechó para beneficiarse del proceso de los desmovilizados residentes y hacerlos parte de su estrategia publicitaria. Así lo reconoce un trabajador de la ACR al hablar del caso:

“Santa rosa ha tenido mucha publicidad, incluso la ACR ha hecho unos videos donde mostraban Santa Rosa (...) Se le ha dado mucha publicidad a Santa Rosa y porque tenemos participantes muy buenos. Muchos proyectos y muchos pilotos han sido desarrollados en Santa Rosa. El proyecto comunitario se desarrolla en Santa Rosa porque es donde más participantes hay. Entonces, como es una de las comunidades más visibles se le da prioridad en los pilotos y proyectos. Yo creo que eso es más como de ellos” (Entrevista a profesional psicosocial de la ACR No 006).

La relación con el Programa de Atención al Proceso de Desmovilización y Reintegración en Bogotá de la Secretaría de Gobierno, ha sido más cercana y constante, pero también conflictiva desde hace unos años, ya que la persona que había estado como gestor encargado de la ciudadela desde el principio en el proceso, quien apoyó y ayudó en la conformación de la JAC con excombatientes y residentes, dejó su trabajo como gestor allí. Como consecuencia, las relaciones y los beneficios otorgados a la ciudadela cambiaron, resintiendo en la percepción de los líderes el ausentismo posterior de la entidad.

Actualmente hay tensiones entre los gestores (y demás representantes del programa distrital) y los líderes comunitarios (algunos miembros de la JAC) ya que no logran una comunicación clara de sus intereses y objetivos y por ende se ha producido una desarticulación y se ha sembrado un malestar en las relaciones. Por parte de la Secretaría, han manifestado que dadas las tensiones con aquellos líderes han decidido dejar de intervenir de la manera como lo hacían antes, además tienen importantes desacuerdos con algunas prácticas que tienen lugar en la ciudadela como el programa de seguridad comunitaria y problemas con los líderes por el recelo que han manifestado con su intervención. Así lo expresa una de las gestoras locales de paz del programa distrital:

“Santa Rosa, yo nunca me había querido meter en San Cristóbal por ese mismo problema de allá del barrio, porque es una dinámica muy pesada (...) ahora estoy a cargo de Santa Rosa y

eso fue echarme de enemigo a... porque yo estoy haciendo política, claro porque ellos tienen el poder y como van a pasar por encima de la junta, en vez de decir: venga porque no trabajamos en conjunto. O sea es un celo y que creen que se lo van a quitar... y esa no es la idea tampoco” (Entrevista gestora de paz de la Secretaría de Gobierno y desmovilizada de las FARC-EP No 003).

Por otro lado la líder entrevistada perteneciente a la JAC, afirma que el problema reside en el abandono del proceso en un momento por parte de la Secretaría de Gobierno, al no querer en su opinión seguir colaborando con sus aportes en los programas y actividades que se realizan, incumpliendo en algunos aspectos y demostrando lo ineficaz de sus modos de comunicación.

Aunque el programa distrital y el de la ACR, hayan intervenido en el proceso de distintas formas, sus representantes reconocen y defienden su autonomía, como resultado del trabajo de los líderes que habían emprendido tal empresa desde su llegada, a través de estrategias efectivas para convocar y reunir a la comunidad.

La relación con otras instituciones no gubernamentales (externas a la ciudadela) no es muy reconocida aunque sí hubo intervención y apoyo de parte de la Corporación Arcoíris, que conocía el proceso. Lo que queda en el imaginario de la comunidad es la constante oferta para la ciudadela de talleres, cursos de formación cultural y educativa, actividades de integración y entretenimiento, las cuales generalmente no son atribuidas a alguna institución en particular sino a la incidencia y el crédito de la JAC.

Con la policía existe una relación cercana de asociación y cooperación, específicamente en el programa de seguridad comunitaria. En este caso hubo comunión entre los intereses comunitarios y los intereses de las fuerzas del Estado con respecto a la seguridad urbana, lo que les permitió generar acuerdos y trabajar mancomunadamente por la solución de un problema compartido.

Con los barrios cercanos hay una relación particular debido a la participación de sus residentes en las actividades realizadas en la ciudadela Santa Rosa, en las cuales ocasionalmente se ven beneficiados (especialmente los niños) de los recursos destinados a estas. Por otro lado, estos barrios se ven afectados por las políticas de seguridad adoptadas dentro de la ciudadela, ya que la delincuencia se ha trasladado allí, según se lo manifestó una líder comunitaria del barrio Nueva España a una líder de Santa Rosa. Las realidades

sociales se presentan distintas y sus fronteras son remarcadas por esta experiencia de seguridad, lo que favorece procesos de identificación.

En cuanto a la relación de la ciudadela con la ciudad desde su espacio y ubicación, se puede decir que posee beneficios y aspectos que le facilitan su interacción; aunque está en un lugar apartado de la ciudad y donde coinciden barrios marginales, las opciones de transporte son muy buenas, tienen un colegio distrital justo pasando la avenida central donde estudian gran parte de los niños, tienen acceso a un comedor comunitario del barrio aledaño (Moralba) y, tienen espacios físicos que utilizan para hacer actividades comunes, especialmente el salón comunal que también funciona como biblioteca, los cuales favorecen la sociabilidad.

Actualmente los residentes están en un problema con el Distrito ya que, como se anotó anteriormente, sus casas están en zona de alto riesgo y están entablando demandas legales para que se las paguen por un valor con el que puedan comprar vivienda en otro lugar. Este proceso ha intentado ser liderado por la Secretaría de Gobierno pero la junta no permitió los espacios para las reuniones-según gestores de esta institución. La JAC actualmente se hace cargo de la convocatoria y de los requerimientos necesarios para el proceso legal, por lo cual contactó unos abogados. Actualmente se hacen reuniones periódicas para la explicación y determinación de las condiciones de la demanda, y se utiliza la ocasión para discutir problemas frente a los desalojos que ya se están concretando. Un problema relevante a causa de los desalojos es la seguridad de algunas zonas de la ciudadela, ya que los que deben desalojar más pronto están ubicados en la parte más alta de la ciudadela y allí solo van a quedar algunas casas habitadas aisladas, por esta razón los encargados del programa de seguridad manifestaron la dificultad y el riesgo de seguir haciendo rondas allí.

Por supuesto, la inminencia del desalojo fuerza a los excombatientes a tener que reubicarse, encontrar nuevos colegios para sus hijos, relacionarse de nuevo, gestionar papeles y emprender procesos burocráticos nuevamente con los que no están familiarizados. Esto significa reemprender una relación nueva con la ciudad, ahora aisladamente, que los lleva a replantearse espacial y socialmente dentro de su realidad urbana en construcción.

CAPÍTULO QUINTO

Acción colectiva e individual: procesos de organización y participación

En el desarrollo de este capítulo se tendrán en cuenta cuatro problemas principalmente. El primero está enfocado en la relación entre estructura y acción, en donde se explica que la estructura no es estática y es susceptible al cambio por medio de la acción humana. En este sentido, se observará cómo la acción humana logra resquebrajar ciertos aspectos de la estructura para dar paso a un cambio en los imaginarios establecidos, como lo podemos ver en la acción tanto individual como colectiva en la ciudadela Santa Rosa. Además se explorarán las distintas representaciones que se asumen sobre los desmovilizados y las que ellos mismos crean como sujetos (individuos y colectividades) procurando cambios que se extienden más allá de su comunidad.

En segundo lugar, se analizarán las relaciones de dominación y poder que se establecen en los vínculos entre los desmovilizados y la sociedad, para luego dar cuenta de su transformación a través de la organización vecinal y las formas de representación e identidad que tienen lugar dentro de lo local.

En tercer lugar se intentará explorar internamente las dinámicas de acción colectiva, principalmente sus procesos organizativos, considerando las posibilidades políticas, los procesos de identificación generados y la movilización de recursos como condiciones fundamentales para su desarrollo.

Como cuarto y último elemento se hará una aproximación a los procesos de construcción de ciudadanía para el caso de los desmovilizados, las ideas generadas a través del ser ciudadano y la relación y percepción del Estado, dando cuenta de diversas relaciones con distintos actores que participan en la construcción y transformación de la realidad en la civilidad.

Acción y cambio en la comunidad de Santa Rosa

Algunas ciencias sociales, y en especial la antropología, caracterizada durante años por el estudio de las sociedades “primitivas”, desde hace casi medio siglo ha tomado nuevos giros que contemplan desde otras perspectivas a la cultura y al desarrollo social de los seres humanos. En la década del ochenta, señala Sherry Ortner, los estudios sobre la praxis

tuvieron al respecto importantes aportes, en tanto empezaron a cuestionar la forma de llevar a cabo la labor antropológica (Ortner, 1994: 58). Esta corriente empezó a interesarse en las prácticas, interacciones, actividades y experiencias que realizan los sujetos como personas y actores capaces de generar cambios sociales.

Esta visión predispuso el terreno para entender las dinámicas de cambio y de acción en la sociedad, a partir del papel que juegan los agentes o actores que ya dejaban de lado el rol pasivo asignado históricamente y se erguían como protagonistas de la sociedad. En este sentido, los conceptos y nociones que definían a las estructuras sociales sufrieron grandes críticas puesto que no permitían la existencia de la relación bidireccional agente-estructura, enfatizando solamente en el vínculo unilateral de la estructura-agente. Este hecho fue reformado y se llegó a entender a las prácticas realizadas por el hombre como reproductoras de la estructura y a la estructura sujeta a cambios por la práctica.

Estas teorías comprenden al sujeto como actor político, económico y social capaz no sólo de generar cambios a nivel de la estructura, sino también de reconocerse, representarse y representar a otros y así justificar su participación activa en la sociedad. En palabras de Ortner, el estudio de la práctica ha permitido encaminar la comprensión de la sociedad y la cultura misma producida y reproducida a través de la intención y la acción humana (Ortner, 1994: 70). Esta capacidad de los individuos de generar cambios a través de la acción se ha conceptualizado como *agencia*, la cual, según Sewell (1992), debe ser comprendida no sólo desde la perspectiva de la estructura o del habitus (comprendido según la teoría de Bourdieu como formado y limitado por las condiciones del campo), sino relacionada con el poder que tienen los sujetos para propulsar cambios en la estructura.

Sewell también resalta cómo los cambios sociales producidos por la agencia son generados por el funcionamiento de estructuras internas de una sociedad, reconociendo en los individuos la posibilidad de aplicar un amplio abanico de esquemas culturales diferentes e incluso incompatibles, así como de acceder a una serie heterogénea de recursos (Sewell, 1992: 16). Estos esquemas transponibles contenidos en la agencia, tienen la capacidad de ser aplicados en varios aspectos posibles y contextos diversos fuera de los ámbitos en los que fueron aprendidos y formados inicialmente, permitiendo que los esquemas puedan aplicarse en distintas estructuras que pueden cruzarse y extraponerse (Sewell, 1992: 16). Además, los individuos van acumulando recursos dentro de los esquemas que dada su

versatilidad su aplicación se hace impredecible (Sewell, 1992: 16). Esta acumulación también contempla la reinterpretación y movilización de otros recursos propios de esquemas culturales que difieren tanto de la estructura como de los principios que constituyen los esquemas aprendidos anteriormente.

Los desmovilizados de Santa Rosa, al entrar en la vida civil evidencian un empoderamiento y adquieren reconocimiento frente a las instituciones públicas, a través del proceso autónomo de organización y conformación de comunidad, el cual posibilitó la adquisición de ciertos niveles de poder (al menos dentro de la comunidad), en ocasiones negados anteriormente cuando pertenecían a un grupo armado. De esta manera, la organización para la compra de las casas, la creación de una JAC con miembros excombatientes, las ollas comunitarias y el resto de actividades que realizaron y que aún realizan para visibilizarse y lograr ser reconocidos y aceptados como parte de la sociedad civil, logra formar nuevos hábitos en estos individuos mediante los cuales pueden asumir los nuevos desafíos que les plantea la condición de civiles dentro de la ciudad y su comunidad. Esto se puede entender como un proceso contrario a las reproducciones forzadas, las funciones y las jerarquías casi inmóviles planteadas por los grupos armados, necesarios quizá para la supervivencia en la vida militar:

“Todo es muy difícil, muy diferente porque uno en un grupo armado aprende no más a recibir órdenes, uno es un objeto más de la guerra, uno tiene que limitarse a recibir órdenes, a pesar de que yo salía a las ciudades yo no podía comunicarme con mi familia y tenía toda la libertad pero no podía hacerlo por seguridad de ellos, no podía visitarlos así estuviera en el mismo Tolima no podía hacerlo entonces es un cambio total, total, lo único que allá puede discutir digamos cuando se hacen las asambleas políticas de las concepciones sociales que uno tenga (...) Entonces es cambiar, empezar de nuevo, la libertad, empezar a tener como lo que fue antes, que yo era una chica una jovencita libre rumbera a pasar a un régimen militar que no puedes expresarte que no puedes usar minifalda, no puedes usar tacones porque cómo por allá, allá uno es un hombre más, a ya la ciudad que ya uno puede tinturarse el cabello del color que a uno se le dé la gana, puede hablar uno como se le dé la gana, que irme a rumbear sin que nadie le esté jodiendo a uno la vida, son muchas, totalmente la diferencia.” (Entrevista a desmovilizada de las FARC-EP No 003).

En la vida civil, los excombatientes obtienen ciertos recursos (simbólicos, sociales y económicos) que se les coartaba y limitaba debido a la rigidez de las estructuras jerárquicas

de la vida militar; ahora, a través de la participación ciudadana e iniciativas propias empiezan a constituirse líderes y sujetos políticos críticos de su propia realidad, lo que les permite un proceso de reintegración efectivo alternativo al planteado por las instituciones estatales encargadas de éste. La constitución de comunidad les provee un capital social importante del cual carecían una vez llegan a la ciudad, permitiendo suplir algunas necesidades que les era muy difícil satisfacer como individuos. Así, la conformación de una JAC les posibilita adquirir recursos de forma más fácil y negociar ciertos aspectos políticos y sociales con instituciones públicas y privadas. De otro lado, la creación de la seguridad comunitaria en Santa Rosa logró, como lo veíamos anteriormente, no sólo satisfacer una necesidad de la comunidad en general, sino proporcionar empleo (al menos temporalmente) a varios residentes (desmovilizados y no desmovilizados) que necesitaban el ingreso.

En la Ciudadela Santa Rosa observamos que algunos de los miembros desmovilizados de los grupos insurgentes traslaparon ciertos esquemas aprendidos en éstos a su nueva realidad, la de la ciudad:

“Uno se daba cuenta que de verdad si podía haber transformación social pero lo que hoy en día uno implementa acá es que uno aquí ya no está con un arma pero está desde otras políticas, de trabajar con la comunidad, con los niños, con las madres cabeza de familia, con las mujeres que no se dejen maltratar” (Entrevista a desmovilizada de las FARC-EP No 003).

Con lo anterior, vemos cómo ciertas prácticas e ideales interiorizados dentro del grupo armado se mantienen dentro de la vida civil, donde algunos líderes desmovilizados utilizan recursos discursivos y políticos que han adquirido en la estructura militar para hacer uso de ellos en la condición de civiles, adquiriendo reconocimiento social y político dentro de la comunidad, como también frente a las instituciones públicas y privadas. Vemos entonces cómo los desmovilizados de Santa Rosa han logrado trastocar la estructura social, en la medida que han roto con ciertos estigmas negativos que los caracterizan, se han vinculado a la vida pública y política visibilizándose ante la sociedad y actuando colectivamente para la consecución de objetivos comunes e individuales.

Por otro lado, vemos que en la ciudadela Santa Rosa los recursos utilizados se renuevan y su utilidad se hace imprevisible en la medida en que estos fueron concebidos

para unos fines particulares en un principio y que después se utilizan en la consecución de otros. Esto se evidencia en las ollas comunitarias, las cuales fueron desde un comienzo un mecanismo para que los desmovilizados se dieran a conocer con la comunidad residente y luego cambiaron su objetivo, pasaron a ser un espacio para discutir temas y problemas comunes, así como para presentar proyectos. Por tanto, se empieza a acumular recursos mediante los cuales se cumplen y satisfacen objetivos y necesidades colectivas de la comunidad. De esta manera vemos cómo esta iniciativa permitió el acceso a más recursos y oportunidades políticas y sociales, como lo fue la conformación de la JAC con miembros desmovilizados, eventos deportivos, y espacios lúdicos de entretenimiento entre otros.

Por otro lado, una vez conformada la comunidad se adaptan esquemas de seguridad que adoptan de la vida militar, puesta en práctica hoy a través de la seguridad comunitaria. Así, los miembros desmovilizados conforman un cuerpo de vigilancia para cuidar el territorio de agresores externos o internos en los que se reproducen los esquemas de la vida militar, pero según líderes, sin la intervención de métodos violentos sino con la denuncia e inmediata comunicación con la policía (aunque en algunas ocasiones un par de personas negaran la abstención de este programa de usar la fuerza para cumplir sus objetivos).

En la historia ha prevalecido y se ha legitimado siempre la versión de quien detenta el poder, las representaciones se establecen desde una de las diferentes percepciones posibles, el ejemplo más claro y significativo ha sido la representación que ha tenido y difundido occidente sobre oriente como el otro, el diferente, muchas veces subvalorado y enmarcado dentro de un prototipo negativo por su diferencia. Edward Said (1978) y Michel-Rolph Trouillot (2002) muestran cómo las configuraciones del mundo se dan no sólo en el terreno de lo espacial, es decir de las fronteras políticas de los países, sino también de lo conceptual.

Estas representaciones difundidas desde el poder generan estigmas como el que recae sobre los combatientes y desmovilizados al considerarlos como sujetos violentos, amorales e impulsivos. Incluso desde el 2002, bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la visión de estos como terroristas fue ampliamente utilizada dentro de los medios de comunicación del país, agudizando el rechazo y la segregación de aquellos que entraron en un proceso de reintegración a la sociedad colombiana. Los estigmas reproducidos en ocasiones por las instituciones encargadas de los procesos de reintegración, han sido

combatidos y reapropiados por los desmovilizados de Santa Rosa para sortear distintos problemas que les presenta su entorno. En consecuencia, han logrado una representación de sí mismos, distanciándose de las visiones dominantes y generando cambios pequeños en la estructura, la cual busca acogerlos para estabilizarse de nuevo como lo hace el gobierno a través de la utilización de las versiones fragmentadas de experiencias de residentes de Santa Rosa, que publicita la ACR. Así lo relata una de entrevistadas, al contar cómo esta institución busca mostrar ejemplos de la reintegración pero sin conocer a fondo sus experiencias y cómo reproduce el estigma en algunos aspectos:

“Quieren mostrarme a mí, me dice la líder del Centro de Servicios: “es que usted es la persona que debemos mostrar que es el ejemplo”, a ver, ¿la ACR estuvo cuando yo perdí a mi hijo?... Es que no todo es plata (...) Por ejemplo a mi ex compañero le hicieron un video de ejemplo de la reintegración con las lavadoras y la comunidad, pero realmente ¿la ACR sabía cómo era la vivencia familiar?, es que se veía bien cuando nos dábamos el pico con los niños y todo, pero no se veía cuando teníamos todos esos problemas, el daño...entonces no (...) allá en la ACR ni siquiera hay baño para los desmovilizados... entonces es el estigma” (Entrevista a desmovilizada de las FARC-EP No 003).

Joan Scott (2001), ratifica la idea de que la historia es escrita por los vencedores y enfatiza en el silencio de los otros, los subalternos, lo que evita que las experiencias de estos sean tomadas en cuenta en su integridad. Los discursos hegemónicos se valen de la fragmentación de los relatos de los otros para acomodarlos a su beneficio, para así seguir silenciado y estigmatizando las posiciones y experiencias alternas.

En Colombia se han dado esfuerzos para visibilizar las voces silenciadas del conflicto, intentando así complejizar y nutrir las visiones sobre este fenómeno central para el país. Sin embargo, los discursos hegemónicos siguen imponiendo imaginarios y reproduciendo estigmas, tanto de las víctimas como de los combatientes de los grupos armados, especialmente de las guerrillas en tanto su oposición al establecimiento es manifiesta. Las estrategias gubernamentales recientes han manejado unos discursos que van dirigidos en dos vías: la primera está enfocada al rechazo generalizado de la oposición insurgente y a reafirmar el estigma que recae sobre los combatientes; la segunda busca generar una imagen en la población de las entidades gubernamentales encargadas de la reintegración de desmovilizados, como re-encausadoras de sujetos perdidos y equivocados,

fragmentando los testimonios de muchos ex combatiente para presentarlos como sujetos “regenerados” que han vuelto a la civilidad, a ser productivos y pasivos, lo que lleva implícito una anulación de las posiciones críticas que persisten en estos sujetos que han tenido distintas visiones sobre la realidad nacional y sobre la experiencia del conflicto.

Una vez los excombatientes llegan a la ciudad las instituciones gubernamentales recomiendan omitir la identidad de los desmovilizados a las comunidades receptoras para facilitar su reintegración, no sin provocar muchos problemas dado que las comunidades se sintieron engañadas y por ende se generaron procesos de desconfianza que reproducen el estigma. El punto central de la labor institucional debería estar enfocado en una preparación



Fotografía propia tomada en la ciudadela Santa Rosa en Marzo de 2011

de las comunidades receptoras a través de estrategias que logren atenuar el estigma y el rechazo que genera el rótulo de guerrillero o paramilitar, como sujeto violento, amoral e impulsivo.

En el caso de la ciudadela Santa Rosa, su visibilización acompañada de actividades de integración, permitieron un proceso basado en la construcción a futuro de relaciones de confianza. Sin embargo, el miedo al rechazo sigue estando presente en muchos de ellos por lo que prefieren hasta donde sea posible mantener esa parte de su pasado oculta de las personas con las que interactúan, incluso de aquellas con las que han generado lazos cercanos y de familiaridad.

Por otro lado, los desmovilizados hicieron uso del estigma generalizado como sujetos violentos para hacer más efectivo su programa de seguridad comunitaria, invirtiendo de alguna manera los efectos negativos y alienantes del estigma para utilizarlos en beneficio de su comunidad. Aunque estas actitudes no ayudan en dinámicas más abiertas, en otros contextos y escenarios de la ciudad, para el caso específico de la ciudadela que tiene unas fronteras delimitadas y unas dinámicas propias les fue un recurso efectivo, teniendo en cuenta que uno de los aspectos más positivos resaltados por la comunidad de que los desmovilizados residan allí es este programa y sus resultados.

Al abordar a la agencia como eje de análisis, y después de haber explorado los distintos ámbitos tanto individuales como colectivos transformados por la acción, lo que se

puede ver en la ciudadela es una reapropiación de su historia, una representación desde ellos mismos que exteriorizan, valiéndose de sus experiencias para entrar a la civilidad de una manera particular. Por esto debemos tener en cuenta que tanto los sujetos, las relaciones sociales y los pueblos que estos conforman, son producto de la historia por lo que se hace necesario volver a esta en todas las ocasiones. En este sentido, Marshall Sahlins (2001) aborda a la cultura desde una perspectiva interesante. Él afirma que la cultura es una construcción que resulta a partir de los procesos históricos de los pueblos, es decir, que se da gracias a la construcción de estructuras a través de la historia de los sujetos. Así, expresa el autor, la cultura es el resultado de una serie de transformaciones que tienen como objetivo recrear en la modernidad, y bajo las nuevas prácticas sociales, las tradiciones y costumbres antiguas de un pueblo.

En este contexto, podríamos observar según este autor que la representación como factor que permite entender el cambio y las dinámicas de la agencia inmersas en una cultura, ayuda en la construcción de procesos como el de *indigenización* a partir del cual algunos grupos sociales pueden asegurar su entrada a la modernidad. Esto significa entonces, que los sujetos son capaces de llevar a cabo una interpretación de la historia de sus propios pueblos, para dar sentido a su cultura y a la representación que quieren reflejar de ellos mismos fuera de esta. En la actualidad, explica Sahlins, los “otros” toman de muchos lugares, formas, estructuras y relaciones, los modelos para recrear en sí mismos sus esencias culturales (Sahlins, 2001: 297). En este proceso, las externalidades son interiorizadas y adaptadas a las formas de vida de cada pueblo, y convertidas en configuraciones locales, que resultan diferentes y completamente alteradas de lo que alguna vez pudieron llegar a ser y a significar.

Relaciones de dominancia, poder y organización

Desde la perspectiva de Pierre Bourdieu se muestra cómo la dominación en ámbitos de la cotidianidad de los individuos define la representación de los mismos. Así, para el autor la dominación es un proceso histórico que ha ayudado a legitimar el orden social. Dicha dominación se ve representada en el lenguaje, y la división sexual del trabajo, entre otras, en donde a partir de oposiciones se hace una categorización de características que definen

el rol y el lugar que deben ocupar los individuos en todos los ámbitos sociales (Bourdieu, 2008: 3).

A través del proceso de legitimación del orden social, la dominación ha logrado cimentarse en la conciencia de los individuos de tal manera que dichas relaciones de dominancia tienden a verse como naturales; esto se ve manifestado en el concepto de “*habitus*” que se entiende como aquellas expresiones verbales y no verbales que permiten que los individuos acepten y asuman dicha dominación como natural, aunque realmente resulten de un proceso de orden histórico (Bourdieu, 2008: 3).

Por otra parte, también nos señala que la construcción de agencia depende en gran medida de las acciones y comportamientos que desarrollan los individuos en la cotidianidad. Esto quiere decir que a partir de las prácticas internalizadas y generalizadas que adoptan estos, se da en el marco de las estructuras que median y restringen dichas actividades. Sin embargo, por lo que observamos dentro de la ciudadela, el poder de agenciamiento que tienen los desmovilizados logra romper con ciertos esquemas impuestos por la estructura social dominante de la ciudad, en el que a través de la comunidad pueden vincularse de manera efectiva con el resto del agregado social urbano, rompiendo con el estigma de desmovilizado, o al menos cambiándolo de tal manera que su significado no indique algo negativo, y en consecuencia se desdibuje la diferencia entre el ‘nosotros’ y los ‘otros’.

La oposición existente entre “nosotros” y los “otros” se encuentra en todos los ámbitos de la vida social tanto en lo político, en lo religioso, en lo económico, en la vida cotidiana, etc. Todos estos mundos comparten un espacio geográfico limitado por fronteras e ideas, sin embargo, son mundos que mantienen una comunicación y por tanto, constantes cambios, desde los cuales se construyen imágenes de sí mismos y de los otros, imágenes deformadas, falseadas y reelaboradas, que si bien se representan, también tienen la condición y el poder de construir la representación de los demás. La historia entonces es fundamental puesto que da muestra de cómo funcionan las lógicas dominantes y cómo se construye al sujeto, quien también es afectado por las estructuras producto también de las acciones humanas internalizadas y expuestas mediante la cultura.

Sin embargo, en Santa Rosa vemos cómo estas relaciones de poder y dominancia logran romperse en dos aspectos fundamentalmente, gracias a la experiencia comunitaria

que desarrollaron los habitantes de ésta. Por un lado, los desmovilizados dentro del barrio hacen acuerdos tácitos en los que se desdibujan las rígidas estructuras de poder que existen en los grupos armados, en este sentido ya no importa quién es comandante y quién no lo es. Por el otro lado, al llegar a la ciudad se enfrentan con actores dominantes que a través de prácticas y discursos intentan someterlos a la marginalidad y la segregación mediante el estigma de desmovilizado, que implícitamente está asociado con valores sociales negativos.

“Los grupos vecinales se forman para solventar sobre todo los asuntos cotidianos que preocupan a sus integrantes como habitantes de una parte de la ciudad y para mejorar sus condiciones materiales de vida urbana. En las organizaciones vecinales es determinante su carácter y su adscripción locales, dada la preocupación de sus habitantes por resolver los problemas que enfrentan en su espacio residencial inmediato” (Ramírez y Safa, 2010: 50).



Festival de las Cometas por la Paz. Fotografía propia tomada en la ciudadela Santa Rosa en Agosto de 2011.

Este es el caso de la ciudadela donde además de tener problemas no resueltos en su espacio residencial, los desmovilizados buscaban generar dinámicas de integración que les permitiera crear lazos cercanos con los residentes que vivían allí.

En efecto, la organización de los desmovilizados para solucionar problemas apremiantes del lugar como el de la seguridad abrió posibilidades para la integración. Muchas familias se asentaron allí con vivienda propia y esto facilitó la generación de sentido de pertenencia y arraigo con el lugar, impulsando progresivamente la satisfacción de otras necesidades que iban apareciendo en el camino de identificación y reconocimiento de su lugar y su comunidad.

A medida que el tiempo transcurría y la organización avanzaba, así como la creación de lazos, los desmovilizados fueron generando pautas y acuerdos compartidos que les permitía convivir y trabajar por generar unas dinámicas locales más activas. En un principio sin embargo, gracias a la identificación que sentían entre ellos por tener un pasado en el conflicto armado y en una realidad particular, los desmovilizados generaron más fácil y rápidamente lazos de solidaridad y amistad. Posteriormente las dinámicas y actividades, además de los encuentros necesarios dada la proximidad, fueron generando más

interacción con los residentes antiguos del barrio, hasta configurarse unas dinámicas compartidas de vida pública y sentimientos de solidaridad, familiaridad y de arraigo a su lugar, que más que contener su espacio privado de residencia, contenía un espacio público de interacción donde se fomentaban lazos de solidaridad e integración y donde se empezaban a dar una serie de actividades y programas que les beneficiaba. Como menciona Safa, “La identidad vecinal en las ciudades tiene también una base cultural o simbólica. Los principales sustentos de ella son la condición o características socioeconómicas de sus integrantes, su pasado común y el interés por los problemas de su vida urbana en el presente. Se fundamenta también en representaciones y prácticas a través de las cuales construyen su arraigo a un lugar dado. Es decir, la revitalización de las identidades vecinales responde no solo a una añoranza por el pasado sino también a nuevas situaciones problemáticas del presente” (Ramírez y Safa, 2010: 52).

Lo que se generó fue entonces una dinámica autónoma de organización y representación a través de unos líderes desmovilizados que habían estado en el inicio del proceso y que habían realizado las actividades iniciales que les permitió dar los primeros pasos de reconocimiento con sus vecinos. Una vez se consolidaron y conformaron la JAC, muchas entidades fueron hasta allí para mostrar el proceso y publicitarlo como un proceso ejemplar de reconciliación. Algunos gestores del programa distrital de atención a la población desmovilizada habían apoyado el proceso y gozaban de la legitimidad dentro del barrio, sin embargo cuando estos se fueron las relaciones con la entidad cambiaron, iniciando así una actitud creciente de rechazo hacia ésta y otras instituciones, especialmente del gobierno.

“Con relativa frecuencia, las asociaciones vecinales y civiles buscan deslindarse de manera expresa de las luchas partidarias o de las autoridades locales. Otras veces cultivan los nexos con el gobernador o el presidente municipal para facilitar las gestiones relacionadas con su hábitat” (Ramírez y Safa, 2010: 52). Muchos políticos se acercaron a la ciudadela para apropiarse del sector como fuente de votos pero los líderes rechazaron a muchos de ellos (pero algunos otros, que si tuvieron presencia con anterioridad, si tienen acceso hasta hoy). Sin embargo mantienen buena relación con el alcalde local quien, según una de las líderes, siempre ha estado ayudándolos en ese proceso de construcción de comunidad y de reconciliación.

“La administración de los espacios comunes y el establecimiento de reglas para la convivencia son lo que lleva a los vecinos a organizarse. La mesa directiva de la asociación no busca la intermediación entre el gobierno local y los vecinos sino la regulación de la vida interna” (Ramírez y Safa, 2010: 54). Este fue el caso de la JAC de Santa Rosa liderada por una desmovilizada que con el tiempo, los programas, el uso del espacio y las relaciones generadas con la comunidad, lo que se llega a ver es realmente una regulación de la vida pública interna de la ciudadela, teniendo su ejemplo más claro en el control ejercido a través del programa de seguridad comunitaria.

De otra parte, algunos de los desmovilizados comienzan a tener una participación política activa dentro y fuera del barrio, que permite a su vez un proceso de construcción ciudadana en el que se observan algunas discrepancias de orden político y de poder dentro de la ciudadela, cuestión que trataremos en adelante.

Acción colectiva y organización

En las teorías sobre la acción colectiva los movimientos sociales, además de las motivaciones subjetivas de los individuos para la movilización, también se han estudiado los factores organizativos que implican. Así la existencia de dinámicas organizativas, las oportunidades políticas, la identificación con un grupo y unos objetivos comunes, así como la movilización de recursos son factores relevantes. Para el caso de la ciudadela Santa Rosa estas teorías permiten, en tanto contemplan la acción colectiva también a través de las organizaciones que son parte central del movimiento social, analizar la organización que ha tenido lugar allí y los factores tanto internos como externos que la posibilitan o limitan.

Sidney Tarrow (1997), elabora en su teoría una síntesis de los aspectos más relevantes y estudiados de la acción colectiva, para atender las dimensiones políticas y culturales de la misma, tratando así de generar una perspectiva más amplia e interrelacionada de procesos de movilización y organización. Los procesos organizativos de la ciudadela, como lo hemos evidenciado anteriormente, están relacionados con instituciones gubernamentales y privadas, y se han fortalecido dadas sus capacidades de movilización de recursos, por sus oportunidades políticas y la identificación que generan con sus objetivos y metas. Estos han emprendido un proceso de reconciliación y de cambio que genera una identificación y fortalece los lazos internos, así como involucra aspectos

culturales diversos tanto de los excombatientes como de los residentes que se entrecruzan y han generado dinámicas de interacción. Estos procesos también han tenido como resultado cambiar las percepciones sobre los desmovilizados y les han generado capitales que les permiten enfrentarse a las dinámicas urbanas y a la sociedad en general. Como lo afirma Tarrow, “los organizadores utilizan la acción contenciosa para aprovechar las oportunidades políticas, crear identidades colectivas, agrupar a la gente en organizaciones y movilizarla contra adversarios más poderosos” (Tarrow, 1997: 24).

Tarrow entiende las oportunidades políticas como “dimensiones consistentes – aunque no necesariamente formales, permanentes o nacionales- del entorno político que fomentan la acción colectiva entre la gente” (Tarrow, 1997: 45) y afirma que su estructura debe entenderse como un conjunto de claves que permite prever el surgimiento de la acción colectiva; esto remite directamente al papel que juegan los actores y los recursos externos que pueden ser aprovechados. Reconoce también que las oportunidades y restricciones cambiantes del mismo Estado ofrecen oportunidades para que los actores de bajos recursos puedan realizar acción colectiva. (Tarrow, 1997: 45, 46) Este aspecto ha sido fundamental dentro de la ciudadela, si no constitutivo, de su proceso de construcción de comunidad. Los desmovilizados al tener un programa de atención del gobierno nacional y distrital tienen oportunidades de acceder a recursos y focalizarlos para su comunidad.

El hecho de que en Santa Rosa se concentraran muchos excombatientes de distintos grupos armados, y que estuvieran gestionando procesos de reconciliación e integración, generó una visibilización y una atención especial por parte de estos agentes gubernamentales, convirtiéndose así en destinatarios de proyectos de desarrollo comunitarios, fortalecimiento de liderazgo, así como un sin número de talleres y actividades que han generado en la comunidad beneficios, que resultan en la filiación cada vez más fuerte al proceso organizativo en la ciudadela. Los representantes de las organizaciones en ocasiones lideran o presentan tales actividades a la comunidad, incluso varias veces las actividades emprendidas por instituciones o personas ajenas a las organizaciones de la ciudadela son concebidas por varios residentes como producto de estas mismas.

Además de las oportunidades que les representa la condición de desmovilizado y la firmeza de sus motivaciones para emprender su proceso de reintegración, es importante y

crucial en este caso la movilización de recursos que han logrado. Se benefician en ocasiones de los recursos del Estado, pero también buscan otros actores aliados que participen y financien su proceso: en un principio el programa de oportunidades laborales en España para labores agrícolas se hizo en conjunto con la OIM que apoyo tal proyecto; la Alcaldía de Bogotá con el programa de atención a desmovilizados, la CNRR y la OIM también tuvieron intervención allí con su apoyo para la creación de una biblioteca comunitaria; la corporación Nuevo Arcoíris, como fue manifestado por una líder comunitaria, también prestó apoyo al proyecto comunitario de Santa Rosa; la Policía Nacional apoyó el programa de seguridad comunitaria con logística coordinada y préstamo de algunos radios; otros actores, como políticos conocidos por la comunidad, también hacen aportes para la realización de actividades como el Festival de las Cometas por la Paz. Además de lo que ya han conseguido, como lo predice McCarthy y Zald (1977) para hablar de la movilización de recursos por parte de las organizaciones de movimientos sociales, algunas asociaciones que surgen de la ciudadela, están en constante búsqueda de nueva personas e instituciones que aporten recursos sin estar necesaria y totalmente involucrados con el proceso.



Apertura de la biblioteca interactiva comunitaria de la ciudadela Santa Rosa, iniciativa apoyada por el Área de Reparación y Reconciliación (CNRR), el Programa de Reinsertados de la Alcaldía de Bogotá y la OIM. En la fotografía aparece el anterior Alcalde de Bogotá Samuel Moreno y otras personalidades públicas, así como una líder comunitaria. Fotografía tomada de la página web de la CNRR, de la noticia: "Biblioteca comunitaria en Santa Rosa abrió sus puertas", mayo 9 de 2008. <http://www.cnrr.org.co/contenido/09e/spip.php?article227>

Es importante resaltar aquí, en función de esas oportunidades políticas, que el tema de la reintegración de excombatientes y de procesos de reconciliación, es un tema central en las políticas y es uno de los tópicos a los que más atención se presta y al que se destinan proyectos y recursos de todo tipo. Además estos procesos sociales son de suma relevancia para el escenario nacional en tanto el conflicto armado es uno de los grandes y apremiantes problemas que afectan todos los campos posibles de la sociedad colombiana. Por esta razón el caso de la ciudadela Santa Rosa ha sido resaltado y apoyado con distintos recursos (acceso a servicios y beneficios, recursos materiales y económicos, legitimidad) especialmente por los programas institucionales específicos dirigidos a esta población;

también porque, especialmente en el caso de la ACR, se ven beneficiados a su vez por la legitimidad que les otorga frente a la población la existencia de casos como éste.

Sus objetivos que los soportan como organizaciones son principalmente enfocados en dos aspectos: por un lado la consecución de beneficios y la satisfacción de necesidades de la comunidad, como por ejemplo las actividades del día de los niños y los desayunos, y por otro lado el desarrollo y fortalecimiento de procesos de reconciliación. El primer aspecto les garantiza una simpatía e identificación de los residentes de la ciudadela, y el segundo aspecto les representa una atención, legitimación y apoyo de parte de entidades públicas y privadas comprometidas con los procesos de reintegración y construcción de paz, aspecto clave en el potencial de movilización de recursos, ya que este es afectado por las autoridades y los agentes de control social en tanto que tienen la posibilidad de permitir o frustrar tal movilización (McCarthy y Zald, 1977: 1212-1241). Esto ha permitido que los líderes reconocidos en la ciudadela y que manejan estas organizaciones se mantengan en estas posiciones de poder dentro de la comunidad y que su visibilización hacia afuera persista.

Este proceso organizativo ha sido construido con el tiempo, como lo hemos mencionado anteriormente, a través de estrategias y resultados; su mantenimiento y vigencia también responde a la eficacia en el reconocimiento de necesidades comunes, a la simpatía y reconocimiento que han conseguido, al cumplimiento de ciertas metas y a su expansión. Como lo señalan John McCarthy y Mayer Zald, las organizaciones en sí tienen una primera meta identificada y después de que esta es clara pueden proponerse otras, asumen los costos y recompensas de la participación, y buscan expandirse. (McCarthy y Zald, 1997: 1212-1241).

Este proceso que ha ido creciendo y fortaleciéndose con el tiempo ha generado en la ciudadela, una construcción de comunidad, que implica una apropiación del espacio tanto geográfico como social, en donde sus integrantes comparten y se apropian de aquellas acciones que les han permitido relacionarse e identificarse como diferentes frente a otros barrios que no gozan de los beneficios que ellos han conseguido. Estos han sido producto de la visibilización que tienen ante las entidades públicas y de los procesos de organización que han logrado movilizar recursos, aprovechando sus oportunidades políticas, para

cumplir metas, que aunque muchos las clasifican dentro de medidas asistencialistas, han permitido la integración de la comunidad de Santa Rosa.

Ciudadanía y participación política

Analizar la construcción de ciudadanía en los desmovilizados nos lleva a considerar varios aspectos relevantes dentro de la configuración de una nueva realidad en la ciudad. Por esta razón, tanto la intervención del Estado a través de sus programas institucionales, como el factor organizativo que ha sido central en la construcción de comunidad en la ciudadela y la experiencia personal, dan cuenta de distintas formas de percibir los derechos y deberes, la idea colectiva de ser ciudadanos, así como la relación con la sociedad y su lugar dentro de la misma.

La discusión sobre la conceptualización y (o) caracterización de la ciudadanía ha sido extensa, sin embargo actualmente convergen distintas formas, no excluyentes entre sí, de abordarla. En primer lugar se asocia a un conjunto de derechos que son reconocidos y otorgados a los miembros de una comunidad política, generando así obligaciones y garantías; esta perspectiva inicial ha fundamentado y asociado los derechos con respecto a lo civil, político y social. En segundo lugar la ciudadanía se asocia a los procesos institucionales que consagran y contribuyen al cumplimiento de los derechos establecidos; el enfoque está en el proceso de construcción de derechos, la posterior legitimación de estos a través de las instituciones y su materialización a través de las leyes. En tercer lugar se da protagonismo a las prácticas de los ciudadanos en la reivindicación e inclusión de nuevos derechos, entendiéndolos no como un conjunto estático sino en construcción y ampliación; de esta manera, se reconocen e incluyen los procesos reivindicativos y de luchas sociales, como por ejemplo los derechos de las minorías, el derecho a la multiculturalidad, entre otros (Safa, 1998: 65-69).

Bajo estas tres visiones se abren distintos caminos para observar la construcción de ciudadanía en tanto se crean relaciones y percepciones distintas de los ciudadanos sobre el Estado, las instituciones, su comunidad y ellos mismos dentro de una sociedad. En el caso de los desmovilizados de la ciudadela, se da una relación compleja en estos distintos niveles debido a la intervención para su reintegración por parte del Estado, algunas veces como objeto de estigma como sujetos violentos y de rechazo por su pasado, y además han

hecho parte de la construcción de una comunidad bajo la idea de comenzar una nueva vida con distintas nociones de realidad y con nuevas formas de relacionarse con la sociedad.

En un primer nivel, hay una situación compleja con respecto a la formación de una idea general y compartida de ciudadanía basada en los derechos garantizados y los beneficios otorgados por parte del Estado, entre excombatientes y miembros de la comunidad. Estos últimos son conscientes de que no reciben las mismas ayudas que los desmovilizados y saben que el acceso a los derechos para estos es más garantizado que para ellos. En esta situación radica una de las maneras de diferenciación dentro de la comunidad de la ciudadela y es tomada por los residentes del barrio de dos maneras: una positiva, en tanto reconocen como buena la decisión de dejar las armas y como necesarias las medidas de asistencia, y una negativa en tanto genera tensión y resentimiento por parte de ciudadanos residentes que han estado dentro de la legalidad pero no han recibido tal atención por parte del Estado, a pesar de que sus condiciones socioeconómicas son difíciles. Así lo expresaba una desmovilizada quien relataba estas dos formas de relación y percepción de sus vecinos que no eran excombatientes:

“Yo pienso que hay personas que no están de acuerdo con nosotros porque estamos viviendo gratis, porque estamos comiendo gratis, nos están manteniendo. Hay personas que lo entienden de otra forma y dicen: “bueno por ustedes que dejaron esa vida, bueno por ustedes porque tomaron una decisión, la mayor decisión es esa y porque ya ustedes no van a hacer más daño” (...) porque hay personas que nos rechazan por ser desmovilizados, por ser mantenidos dicen” (entrevista a desmovilizada de las FARC-EP No 004).

Por otro lado, el programa de reintegración de la ACR (o de reinserción del PRVC antes de septiembre de 2006), no ha superado el carácter asistencialista y no tiene una orientación clara a la construcción de ciudadanos activos y participativos, teniendo como resultado que para los desmovilizados el Estado pasa de ser visto como enemigo o como ausente, a ser un proveedor de recursos (Mejía y otros, 2008: 325). Así, estos omiten el reconocimiento de sus beneficiarios como sujetos políticos posiblemente con visiones críticas sobre la sociedad (especialmente a los excombatientes de las guerrillas), reafirmando de esta manera la idea de una reintegración más asociada a la inclusión pasiva al régimen político y económico legítimo y establecido.

Así pues, las instituciones han omitido y descuidado el cumplimiento de la dimensión política participativa y crítica de los desmovilizados dentro del sistema democrático, en función del mantenimiento de un régimen político establecido, dentro del cual los últimos dos gobiernos no han tenido intenciones claras de debatir condiciones estructurales del país con la insurgencia.

La ciudadanía ha sido reducida institucionalmente, en el caso de los excombatientes, en el acceso a la salud y educación, así como a la garantía de su reintegración económica. Los aspectos comunitarios tratados por los programas gubernamentales apuntan generalmente a fomentar una cultura pacífica de vivir en la civilidad así como el fortalecimiento de liderazgo comunitario para el desarrollo de proyectos sostenibles y beneficiosos para su comunidad. Sin embargo, el énfasis en generar espacios de discusión y crítica no ha sido contemplado formalmente, aunque los desmovilizados expresen visiones



Fotografía propia tomada en la ciudadela Santa Rosa en abril de 2011.

y discutan dentro de los talleres y espacios compartidos con las instituciones encargadas sobre percepciones de la sociedad colombiana y sus dinámicas políticas y sociales.

En la ciudadela Santa Rosa se presentan, como veíamos anteriormente, dinámicas autónomas de los ciudadanos para reivindicar derechos y responder a necesidades de sus comunidades. Allí la JAC, como forma organizativa civil en pro de las comunidades y que sirve de interlocutora con las distintas instancias gubernamentales, tiene gran influencia y protagonismo en el lugar, gracias a las actividades y beneficios conseguidos.

Además de la JAC aparecen en el escenario organizativo de la ciudadela otras organizaciones independientes como Asociación de Mujeres por la Paz (ASOMUPAZ) que trabaja con mujeres víctimas del conflicto y con las mujeres de la comunidad de Santa Rosa participando en actividades como la celebración del día de la mujer. También aparecen otras asociaciones encaminadas a gestionar mejoras para el barrio como Amigos de Santa Rosa que ayuda para la realización de actividades como la celebración del día del niño.

Estas trabajan de la mano con la JAC para la coordinación de todos los programas y los eventos de integración que se realizan.

Particularmente, es una familia de desmovilizados la cual ha liderado la mayoría de estos proyectos organizativos y uno de sus miembros lidera la JAC, convirtiéndose en personajes reconocidos dentro de la vida pública de la ciudadela y en administradores de servicios como los desayunos para niños, el uso del salón comunal, la seguridad comunitaria, oportunidades laborales en España, y los organizadores de actividades periódicas.

A través de estas formas organizativas se ha logrado visibilizar más las necesidades de la comunidad de Santa Rosa y la labor participativa que adelantan allí los desmovilizados, mostrando, según una líder entrevistada, un proceso de reconciliación en el escenario urbano. La labor de estas ha sido de gran relevancia y visibilidad dentro de las instituciones que se encargan de la población desmovilizada, tanto públicas como privadas, por lo que han tenido ayudas externas y una presencia constante de actores interesados en la intervención social. Sin embargo, la relación entre los líderes y otras instituciones ha sido conflictiva y fluctuante.

A pesar de que los beneficios y servicios ofrecidos han sido determinantes para la construcción de comunidad y para la mejora de las condiciones de vida de los residentes del barrio, su participación en la toma de decisiones sobre el territorio y las dinámicas de este con las otras instituciones no es tan generalizada. La influencia y poder de los líderes dentro de la comunidad en el manejo de la vida pública de la ciudadela es cuestionada por varios de los residentes. Como lo expresa una de las desmovilizadas, se maneja una reproducción de una concepción asistencialista dentro de la comunidad de parte tanto de los líderes como de los residentes:

“(...) El desmovilizado es muy dado a estar en su cuento, de su trabajo a la casa y ya, la gente participa por el asistencialismo, la gente todavía tiene una concepción de qué me dan y yo doy, entonces... sale y dice: “el día de los niños vamos a dar un refrigerio”... y toda la comunidad llega allá, pero van a hacer una reunión sobre derechos y deberes y no llegan. Entonces eso es como relativo, el asistencialismo siempre está ahí. Ella hace actividades con los niños y con mujeres y todo eso, y la gente llega pero ahorita en estos momentos la gente está muy apática porque se ha implementado mucho el poder” (Entrevista a desmovilizada de las FARC-EP No 003)

Incluso la presidenta de la JAC, en una de las ollas comunitarias con el fin de comunicar un nuevo proyecto de la ACR, comentaba cómo la gente iba por dos o tres platos pero no se quedaban a la reunión. Muchos niños llegaban con varios platos para llevar a su casa pero sus padres no se acercaban al lugar de encuentro.

Lo anterior muestra cómo estas organizaciones y las representaciones hacia afuera logran una visibilización y una movilización de recursos importante, jalonando para adentro la aceptación de estas por los beneficios que otorga. Sin embargo, en una dimensión más política y de participación activa dentro de la ciudadela el panorama cambia, en tanto siguen eligiendo a los líderes reconocidos que se visibilizan a través de sus programas y actividades pero no participan activamente en una dimensión más crítica y política de toma de decisiones sobre los distintos aspectos que afectan su comunidad. Aunque actualmente es más visible la participación a raíz del problema del desalojo inminente por ser zona de alto riesgo, ya que se trata de un problema generalizado de grave repercusión para todas y cada una de las familias residentes.

Observando las diferentes formas en que se manifiesta lo complejo del proceso de construcción de ciudadanía incluso en una comunidad con unas dinámicas de integración reconocidas, se puede ver como persisten aspectos por reforzar tanto por parte del Estado y las instituciones gubernamentales, como de las organizaciones y de los residentes de la comunidad, las circunstancias de fortalecimiento de la ciudadanía en tanto involucra la participación activa en la toma de decisiones y en la construcción de sujetos políticos más comprometidos con su realidad. Sin embargo, hay avances en la identificación de necesidades y satisfacción de las mismas, a través de formas organizativas que interactúan con otros agentes y que logran mejorar los niveles de vida o por lo menos algunos aspectos influyentes de la misma, modificando la manera de apropiarse y de vivir el espacio tanto geográfico como social.

CAPÍTULO SEXTO

Cambios y continuidades: la integración como eje de análisis

Para poder retomar el caso de la ciudadela bajo la luz de la integración como un proceso de transición, haremos uso de la teoría de Gino Germani sobre la integración social, la cual nos permite establecer un camino para el análisis. Sin embargo, a lo largo de la investigación y el desarrollo de los factores claves de la integración, y especialmente de los cambios y continuidades con respecto a los procesos de socialización en diferentes estructuras, también van surgiendo posiciones críticas o que exceden a los alcances del modelo propuesto.

Este autor concentró su esfuerzo teórico en comprender el proceso histórico y los fenómenos de transición de las sociedades latinoamericanas partiendo de sus análisis de sociedades tradicionales a sociedades modernas. Establece así momentos contenidos en un proceso de integración y de cambio social partiendo de un tipo ideal de sociedad integrada, referida a la sincronía y ajuste de sus partes, que va a definir en tres características: a) que exista compatibilidad entre las normas, estatus y valores (integración normativa), b) que exista ajuste entre las expectativas, roles y actitudes interiorizadas por los individuos y la estructura normativa imperante (integración psicosocial) c) que las circunstancias reales en las que se enmarcan las acciones y expectativas de los individuos se correspondan con las condiciones objetivas disponibles a partir de la estructura normativa (integración ambiental) (Germani, 1963: 1).

En un primer momento, se supone que los individuos que están en transición han sufrido previamente la desintegración de las estructuras sociales preexistentes a las que estaban adscritos, generando en ellos una desubicación y una posterior disponibilidad para asimilar las normas, status y valores de la nueva realidad a la cual se enfrentan. Sin embargo esta disponibilidad no se traduce en la internalización pura de tales elementos sino en muchos casos en la persistencia de características tradicionales que se ajustan a las nuevas condiciones y fusiones entre lo tradicional y lo moderno, o lo rural y lo urbano. En algunos casos la desubicación y el enfrentamiento a nuevas pautas generan apatía y aislamiento, sin embargo en otros casos generan o motivan una participación de los individuos que busca hacerse viable y legítima (Germani, 1976: 59).

Adicionalmente, esta participación, para el autor, se da de dos maneras: a) integrada, cuando se da dentro de lo esperado y previsto por la estructura normativa, por las expectativas interiorizadas y por las condiciones del entorno, y b) no integrada cuando no hay correspondencia entre lo que esperan los individuos y lo que está previsto y es esperado dentro de la estructura normativa. Es clave en el mismo sentido entender la participación no integrada como el estadio previo que genera la movilización, ya que incrementa o acelera las presiones sociales de participación ante la ausencia o precariedad de mecanismos e instancias normativas para satisfacerlas; es así que este incremento de participación genera efectos propiciatorios del cambio social, en oposición a las actitudes negativas de la no integración, tales como la anomia y la desubicación (Germani, 1963: 5- 7).

La integración se da de dos maneras posibles: a) por asimilación, cuando los grupos movilizados generan cambios en su participación para que esta se acomode a los rasgos exigidos por la estructura para su legitimación; o b) por cambio social, cuando estos grupos modifican la estructura para hacer viable y legítima su participación (Germani, 1963: 6,7).

En resumen, Germani establece cuatro momentos en el proceso de transición a la integración: 1) la desintegración de estructuras preexistentes, 2) la desubicación y posterior disponibilidad, 3) el aumento de participación que lleva a la movilización y 4) cuando se producen los cambios para que las condiciones de participación de los grupos movilizados se legitime.

El caso de la ciudadela Santa Rosa como muestra de esfuerzo y de un proceso de transición hacia la integración, podemos analizarlo bajo estos momentos y unidades de estudio. Sin embargo, este esquema está basado en el tipo ideal de sociedad integrada y aunque está formulado en base a procesos de transición en general en la ciudad, también haremos una mención especial al papel de lo local y de la comunidad como generadores de otras dinámicas y herramientas de participación.

En primer lugar, analizaremos los momentos de desajuste con respecto a las estructuras preexistentes y la disponibilidad, tratando de explorar las experiencias de los desmovilizados al desligarse de su colectivo de referencia para enfrentarse a una nueva realidad en la ciudad que tuvo como consecuencia distintos fenómenos de anomia, de ruptura y desubicación, pero que con el tiempo encontraron formas de sobrellevar su vida en la civilidad. En segundo lugar, exploraremos los factores de participación y movilización

una vez logran establecerse en un lugar, empezar a crear lazos afectivos, a construir una comunidad e involucrarse con distintas instituciones y distintos contextos. En tercer lugar, analizaremos cómo su participación y movilización han influido en su integración a la sociedad civil, cuáles han sido los conflictos dentro de esta integración, cómo se han dado factores de asimilación y de cambio social dentro de su proceso, pero también cómo la persistencia de patrones de socialización previos influye en la integración. Y por último, intentaremos explorar la idea de integración desde la comunidad, lo local y la formación de identidades dentro de las mismas, dando cuenta de un proceso dinámico dentro de la ciudad pero que explora matices en los procesos mencionados.

“Liberación” y “disponibilidad”: Del monte a la ciudad

La llegada a la ciudad plantea una serie de circunstancias desfavorables para los desmovilizados, como lo veíamos en el capítulo tercero del presente trabajo. Éstos tienen que ver en primera instancia, con que la mayoría de ellos vienen de lugares ajenos a Bogotá y en muchos de los casos de zonas rurales del país, por lo que a su llegada no cuentan con una serie de recursos necesarios para que su proceso de reintegración y resocialización sea realmente efectivo. Dichos recursos son de orden social, simbólico, económico y (o) material, y al carecer de éstos los desmovilizados entran en un proceso de exclusión en donde su rol e identidad social se desdibujan y no quedan claros en la nueva realidad social en la que se encuentran inmersos.

Por lo anterior, se infiere que las dificultades que afrontan los excombatientes generan problemas de orden social relacionados con las socializaciones secundarias que tienen que asumir en la vida civil y ciudadana, ya que tiene que replantear muchas de las normas y pautas de comportamiento de sus respectivas socializaciones en los grupos armados. Así como lo presenta Germani, la liberación o disponibilidad que se da cuando los individuos o los grupos se ven liberados de los patrones tradicionales que habían adoptado en estructuras preexistentes y quedan “disponibles” para adoptar nuevos patrones culturales y nuevas formas de participación, pueden generarse procesos de anomia, desorganización social, o bien, la persistencia de características tradicionales que se ajustan a las nuevas condiciones y fusiones entre lo tradicional y lo moderno (Germani, 1967: 389, 390).

Los problemas asociados a la socialización tienen que ver con la antinomia y la anomia. La primera se refiere a la ambivalencia de valores y normas, la segunda se entiende como la ausencia total o parcial de normas y valores. Esta ausencia y ambivalencia de las pautas de comportamiento tienen como consecuencia la exclusión social, desorganización social y desocialización (*desocialization*) de los individuos (Weiss Bar-Yosef, 1968: 28)

Por tales motivos, nos enfocaremos en cuáles fueron los motivos para la deserción de la vida militante para los desmovilizados de la ciudadela Santa Rosa; cómo experimentan esas situaciones de desajuste a las normas y pautas sociales ya que su socialización previa en los grupos armados entra en conflicto con los valores, las normas y pautas de comportamiento que plantea la ciudad y la civilidad; y por último cómo han logrado superar de manera individual en su resocialización dichos problemas que surgen cuando llegan a la ciudad y posteriormente al barrio.

Como rasgo característico en la mayoría de desmovilizados que entrevistamos en Santa Rosa, las motivaciones personales para asumir un proceso de desmovilización y su posterior reintegración a la vida civil, recae en el aspecto familiar, particularmente en los hijos. Bajo esta perspectiva queremos explorar algunas de las más frecuentes explicaciones que encontramos en los discursos de los entrevistados.

“Cuando yo llegue a Bogotá estaba cuando los albergues de ... que quedan aquí en Teusaquillo, eso era un caos porque los unos colocaban bombas, los otros ponían cilindros, los otros robaban, eso era un cuento, pero uno trataba de estar en su cuento relajado y ahí es donde conozco yo a Nicolás... ya me encuentro con otros compañeros más del bloque y ya empezamos a ver las ideas sociales que nosotros teníamos, más sin embargo yo en ese tiempo quería más la familia, no quería dedicarme a nada de cuentos comunitarios sino mis hijos, ya después lo independicen a uno del albergue” (Entrevista desmovilizada de las FARC-EP N° 003).

Por su parte, otra desmovilizada comenta un caso similar en el que el motivo de su desmovilización fue también su hijo:

“(...) tuve la dicha de quedarme con mi hijo esos cuatro meses, en esos cuatro meses pues yo me enamoré de mi hijo y entonces logré una oportunidad que me dieron de ir a llamar, de llamar, mi hermana lo tenía en Medellín, yo se lo entregue a mi hermana y ella lo tenía en Medellín y me dieron la oportunidad de que fuera y lo llamara para saber cómo estaba, y yo vi la oportunidad y me escapé. A los seis meses que lo entregué me

vine, apenas me den la oportunidad ya me voy, pero o sea nadie podía saber, porque en nadie se puede confiar y entonces decidí y me vine por mi hijo, me vine a la ciudad... yo me escapé en marzo del 2004 y bueno desde ahí yo duré 15 días escondida porque yo tampoco, o sea la mentalidad que teníamos era que la persona que se desmovilizara el mismo gobierno se encargaba de matarlo. Yo vine por mi hijo” (Entrevista a desmovilizada de las FARC-EP N° 004).

Aunque vemos que en el caso de las mujeres uno de los motivos que mayormente las impulsa a la desmovilización son sus hijos, no podemos catalogar este comportamiento como típicamente femenino, pues para los hombres, esto también se convierte en un factor decisivo a la hora de tomar la decisión.

“La vida en el grupo es muy hijueputa. Eso de picar gente, es muy hijueputa, eso que a uno le diga el comandante: “tráigame a tal paciente que lo vamos a picar”, eso es muy hijueputa, pero si uno no lo hace, al que pican es a uno, ¿si me entiende? Uno no ve la hora de salirse de esa mierda, porque si uno la caga los castigos son muy perros. Yo me quería salir hace rato, pero no me podía salir hasta que se hicieron las negociaciones con el gobierno, yo quería irme por mi familia, yo quería cambiar esa vida tan perra por mi hija. Yo por esa culicagada doy mi vida, eso es lo que me ha hecho cambiar, eso es lo que me ha hecho ir pa'lante, yo pude haber hecho lo que quiera, todo lo malo que usted se imagine, pero uno también tiene derecho a cambiar. Yo cambié, y cambié por mi hija, esa cagoncita que usted ve ahí, es el motivo por el que yo me levante todos los días a trabajar y a buscarme la vida... menos mal ahora tengo trabajo con la alcaldía, con la alcaldía local. (...) antes uno recolectaba cincuenta, cien millones de pesos en un día, ahora vaya usted a recolectar cincuenta mil pesos, eso ni en una semana. Y hay gente que no cambia, hay manes que después de desmovilizados siguen chimbeando, se ponen a hacer maricadas, roban, siguen por las mismas. Pero yo no, yo cambié por mi hija y por la mamá de la niña” (Entrevista a desmovilizado de las AUC del Bloque Centauros No 0010).

“Bueno, me motiva (desmovilizarme) porque ya me nació el niño por el otro, la muerte de una cuñada que bueno a mi no me la hicieron sino que estaban los hermanos, pues la mataron entonces como yo vivía ahí, nadie sabía nada, pues quien va con todas las cosas, como era la situación de la familia, de la cuñada, con el esposo que era también de las FARC y yo vi que ellos no tenían vida, por lo que... entonces decidí entregarme, yo convencí a los otros cuñados para que nos desmovilizáramos, hiciéramos los contactos ahí en el batallón y así nos desmovilizamos” (Entrevista con miliciano desmovilizado de las FARC-EP No 007).

A partir de esto podemos anotar, que aunque las características de los trabajos y el rol que desempeñan dentro los grupos armados les genera una insatisfacción, gracias a que son sometidos a castigos, y los obligan a cumplir tareas en las que no están de acuerdo, estas no llegan a ser la razón principal por la cual toman la decisión de desmovilizarse. La materialización de las desmovilizaciones se justifica aludiendo a vínculos emocionales relacionados con la familia, arguyendo, que su principal objetivo es estar con sus hijos de manera segura y permanente.

Es importante señalar que las condiciones de desmovilización son diferentes entre grupos insurgentes y paramilitares, para los primeros la opción es la desertión poniendo en riesgo su vida, mientras que para los segundos la opción fue la negociación colectiva que les otorga beneficios y menos riesgo de represalias. Esto aunque plantea diferencias notorias entre las motivaciones y la fuerza de estas en sus decisiones, no afecta el deseo manifiesto por restablecer los vínculos familiares y que este aparezca como razón suficiente para abandonar la vida armada.



Fotografía propia tomada en la ciudadela Santa Rosa en abril de 2011.

Para explorar las experiencias de desajuste, los excombatientes de la ciudadela Santa Rosa pueden considerarse como migrantes que deben cambiar sus roles previos, entendiendo rol “como el patrón de actividad socialmente prescrito, relacionado con cierta posición que ocupa el individuo en la sociedad. Los roles son los vehículos de la interacción social, el mapa de roles de una persona es el punto de anclaje para su identidad social, para sí mismo y para su sociedad circundante” (Weiss Bar-Yosef, 1968: 28). Para el caso de los desmovilizados, los roles asumidos en el grupo armado se ven desdibujados y finalmente rotos, dadas las condiciones sociales que les impone su nueva realidad social como personas civiles y urbanas.

Ver al excombatiente como un migrante, nos permite visualizar los choques de valores, normas y pautas de comportamiento entre la vida rural-militar y la vida civil-urbana. De esta manera, el migrante tiene que cambiar gran parte de su sistema de valores para poder adaptarse a su nueva realidad social, por lo que podemos definir la migración

como “la más obvia de las instancias de desorganización completa del sistema de roles de un individuo. Desde este punto de vista la migración tiene un efecto desocializador. (...) el migrante que llega a una nueva sociedad, se pierde del acceso a mecanismos elementales de una sociedad estable. Él ignora la definición adecuada de situaciones en las cuales tiene que participar y de las normas de interacción social, él no comprende el mapa de roles de los otros y no tiene clara la idea de cualquier rol que está esperando cumplir o las oportunidades para entrar a jugar el rol que éste desea. Así, (...) su rol e identidad anteriores se desdibujan y pierden significado, lo que conlleva a que los individuos que pertenecen a su nueva realidad los estigmaticen y excluyan, señalándolos como diferentes y no pertenecientes a su sociedad” (Weiss Bar-Yosef, 1968: 28-29).

Los excombatientes que llegan a la ciudad se ven inmersos en un proceso de identificación de nuevas pautas e incluso de la imposición de nuevos valores a través de los programas de educación y asesoría psicosocial de las entidades gubernamentales; estos servicios les representan en gran medida una orientación pero en otras una imposición a veces repetitiva e innecesaria. En un principio para aquel que no está familiarizado con las dinámicas urbanas el manejo del espacio, moverse dentro de él e interactuar con las personas que lo habitan, representa un desafío constante y una experiencia varias veces frustrante en tanto no se corresponde con su noción de realidad. Lo que tiene lugar en esta etapa de su proceso de reintegración es una socialización deficiente en tanto su realidad subjetiva no concuerda con la nueva realidad objetiva en la que están inmersos.

Uno de los aspectos más relevantes para los desmovilizados en el cambio de valores y pautas es la autonomía y la libertad de elección en la civilidad, pero también el enfrentamiento a la individualidad, la falta de un colectivo como referente y nuevas relaciones con el dinero (en algunos casos más difícil de conseguir y más cosas en que gastar). Sin embargo hay varios valores y nociones que los mismos desmovilizados reconocen que persisten y que les han ayudado para enfrentarse a nuevas personas y a nuevas dinámicas sociales, como lo manifiesta una de las entrevistadas.

“porque imagínate desde el punto que uno... diez años tú en una montaña conviviendo con la gente, o sea lo que se vivió allá, con mucha cultura sí, porque a pesar de que uno está allá a uno también le enseñan lo que son los valores y todo eso, el respeto, que hay formas de respetar a alguien en sus diferentes formas de respetar, o sea respetar una vida de una persona no es muy

común allá, pero ya el respeto entre personas para el trato y todo eso, la convivencia (...) Entonces pienso que todas esas cosas del respeto y los valores, todas esas cosas allá fueron fundamentales, son cosas que uno ve en la vida en la montaña y practicar eso si, en todas partes pienso y acá también entonces yo pienso que son cositas pequeñas y a la vez grandes que uno trae de allá y que le han ayudado acá y cosas de acá que le ayudan a uno como a superarse en muchas cosas, la forma de pensar” (Entrevista a excombatiente de las FARC-EP No 004)

El proceso de resocialización es la “búsqueda de una nueva identidad ajustada al nuevo ambiente social en el que están inmersos” (Weiss Bar-Yosef, 1968: 30). Esta en principio no es del todo exitosa dado que aún no han encontrado un rol e identidad definidas; no se ha dado una internalización de la realidad objetiva y por ende no se logra un alto grado de simetría entre la realidad subjetiva y la objetiva en la cual se incluye la identidad, lo que se reconocería como socialización exitosa.

La socialización está mediada por contextos de estructura social específicos, lo cual no sólo se refiere a sus contenidos sino también, “(...) su grado de éxito tienen condiciones y consecuencias socio-estructurales” (Berger y Luckmann, 2001: 204). Por esta razón al unirse a una comunidad específica su proceso de interiorización de una noción de realidad se da dentro de una estructura plausible que les sirve como guía dentro de la civilidad y les permite con el tiempo superar varias dificultades.

Los desmovilizados de Santa Rosa crearon mecanismos individuales y colectivos de socialización que les permitió adaptarse a su nuevo ambiente social, mediante los cuales lograron ser reconocidos social e institucionalmente como lo hemos expuesto a lo largo de éste trabajo. Buscaron mecanismos alternativos que les ayudara a sobrellevar su vida de manera más fácil en la ciudad, pues al llegar a ésta, se carece de un capital social y económico que les permita adaptarse a su nueva realidad social. Así, los reinsertados empiezan una búsqueda de familiares y compañeros ya desmovilizados, por medio de los cuales intentan construir un capital social, más o menos efectivo, que les permita acceder a otro tipo de recursos ya sean materiales, económicos o simbólicos. Es importante también resaltar en este momento del proceso de resocialización la importancia de los programas gubernamentales ya que facilita de varias maneras la consecución de estos capitales (subsidios, educación, visibilización institucional, acompañamiento psicosocial) sin

embargo los desmovilizados deben realizar todo tipo de decisiones y desarrollar estrategias para su supervivencia y posterior integración.

Por esta vía, muchos de ellos llegan a la ciudadela Santa Rosa en donde encuentran una facilidad de comunicarse y desarrollar una vida social en un ambiente que no los segrega, sino al contrario, los vincula de manera eficaz a la vida civil. Este se convierte entonces, en un entorno propicio para generar y estructurar un proyecto de comunidad a través de redes de trabajo y actividades de esparcimiento, entre otras, que les permite acceder de manera más fácil a la ciudadanía de lo que puede implicar este mismo hecho en escenarios desconocidos y en muchos casos agresivos, dada su condición y pasado delictivo. En la ciudadela Santa Rosa, los desmovilizados encuentran una capacidad de acción política que les permite definir sus roles e identidad dentro del espacio social urbano, superando los problemas de segregación, y desorganización social a los que fueron sometidos a su llegada a la ciudad.

Movilización y participación: Comunidad y ciudadanía

La movilización, según Germani, “es, entonces, la disposición a ser incorporados a los nuevos modelos de conducta y a las instituciones” (Germani, 1976: 59) y “tiene lugar cuando los individuos o grupos adquieren nuevas actitudes y valores; ambicionan desempeñar nuevos papeles, o aspiran a nuevos patrones de participación, incluidas las nuevas formas de consumo (de bienes materiales e inmateriales)” (Germani, 1967: 389).

Cuando no hay una participación real ni acceden al ejercicio de nuevos papeles y formas de consumo, se llama movilización psicosocial y alude a que una vez se han adoptado nuevos valores y actitudes, se despierten nuevos intereses, las expectativas se incrementen y aspiren a nuevas formas de participación. Cuando hay participación pero esta no es reconocida ni legítima dentro de la estructura normativa, se llama movilización objetiva, la cual es caracterizada por una participación conflictiva. Esta última no se reconoce como integración social ya que este concepto implica la participación legítima y aceptada en las estructuras normativas, pero si puede llevar a esta ya sea a través de la asimilación o el cambio social. (Germani, 1963: 4)

La movilización que se expresa en las distintas experiencias individuales de los desmovilizados entrevistados y en la experiencia colectiva de la ciudadela es compleja

debido a que intervienen y coexisten en este proceso muchos actores y muchos elementos contradictorios. Allí se dan tanto la movilización psicosocial (ya que los individuos han adoptado nuevas disposiciones y generado intereses y deseos de desempeñar nuevos papeles dentro de la sociedad civil) como la movilización objetiva (ya que se han dado estrategias colectivas que han intentado generar cambios en su realidad a través de iniciativas no reconocidas y que han generado una participación conflictiva).

Debido a que el proceso de reintegración de los desmovilizados es asistido por un programa institucional hace inevitable la incorporación en agencias oficiales y patrones de conducta dentro de contextos prefijados. Los excombatientes, además de abandonar su lugar de referencia y llegar a otro en busca de una nueva vida y nuevas oportunidades, como es el caso de muchos migrantes, deben enfrentarse a un cambio no solo de entorno y algunos patrones sociales de conducta, sino que pasan de la disciplina de los grupos armados y la constante violencia física y simbólica, a una vida en la civilidad y en la ciudad que les presenta un escenario diverso y diferenciado. Al haber permanecido en el conflicto armado el cambio es mucho más drástico y complejo al resignificar las experiencias y los patrones de conducta aprehendidos en el pasado.

Apenas se desmovilizan empiezan de la mano de la ACR a insertarse e involucrarse con distintas instituciones, empiezan a acceder a distintos contextos (familiar, educativo y laboral) acompañados de una instrucción psicosocial para desempeñarse en estos. Allí les enseñan patrones de conducta que se reconocen como adecuados dentro de la vida civil y promueven su asimilación a la sociedad. Sin embargo, al involucrarse más con la comunidad y con las personas con las que comparten otros contextos, desarrollan visiones más críticas con respecto a su realidad y los mecanismos impuestos y esperados para su integración.

El esfuerzo de la Alta Consejería para la Reintegración (ACR) por generar programas completos, que precisamente se encarguen de que los desmovilizados adopten nuevos patrones de conducta, ha generado efectos diversos en estos. Muchos de ellos se sienten aburridos de tantos talleres que perfilan su comportamiento y su sistema de valores; su apreciación de la realidad excede para ellos los contenidos de esos talleres tan elaborados. De esa manera, se entienden algunas opiniones de los entrevistados, donde se evidencia la prevalencia de preceptos éticos que proceden de una socialización previa, y

que son irreductibles a las directrices de los asesores psicosociales y sus intenciones moralizantes.

La educación es un aspecto fundamental en la integración de los desmovilizados ya que todos lo reconocen como un elemento valioso en su vida civil y que les ha permitido proyectarse en un futuro, facilitarles su vida en la ciudad, aspirar a una movilidad social, así como incidir en la vida familiar a través del uso pedagógico del ejemplo. Sin embargo, los bajos niveles de alfabetización y lo radical del cambio a la vida civil y a la ciudad los ha llevado a vincularse a las instituciones educativas en busca de títulos y aprendizajes en diferentes áreas; no hay una línea clara de intereses intelectuales o de proyección definidos, ya que en muchos de los casos realizan cursos que no tienen ninguna afinidad entre ellos. Muchos excombatientes tienen varios títulos del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y los señalan como una muestra del cambio que han tenido en la vida civil y las ganas de transformar sus formas de vida y de desempeñar nuevos papeles dentro de la sociedad.

Además de los distintos escenarios que los desmovilizados comparten cada uno en su proceso individual, en sus pasos hacia la integración civil, las formas organizativas y colectivas de acción también repercuten en la movilización de las personas en tanto estas pueden ser reconocidas como instituciones mediadoras y de participación, dejando entrever los deseos de desempeñar nuevos roles.

Efectivamente en una comunidad donde se da la intersección de muchos contextos, ámbitos y significaciones tanto individuales como colectivas, los diferentes tipos de movilización identificados coexisten pero se manifiestan a niveles distintos. En primer lugar, los procesos individuales de transición llevan consigo procesos de movilización psicosocial alimentados por la interacción en los contextos sociales en los que participa, especialmente con la educación que es uno de los mecanismos de movilización más importantes, ya que este tiene el impacto sobre actitudes y valores, genera aspiraciones y prepara para hacer uso de lo que ofrece la vida moderna (Germani, 1967: 394). En segundo lugar, la movilización objetiva se ve más representada a través de los mecanismos de organización y las estrategias de participación y acción colectiva dentro de la comunidad de la ciudadela.

La movilización igualmente emerge por la aparición y (o) influencia de unas élites que en algunos casos son externas a los grupos disponibles o en otros casos provienen del

interior de estos grupos a movilizar (Germani, 1963: 8-10). Este último es el caso de la ciudadela, donde los líderes surgieron del interior del grupo de desmovilizados residentes; estos líderes, que pertenecen igualmente a un grupo subordinado, a través de su papel en la movilización procuran también para ellos mismos la superación de esa subordinación (Germani, 1963: 9). Aunque la labor de estos es reconocida y han conseguido beneficios para la comunidad, según varios residentes y otros actores que conocen el lugar, hay prácticas irregulares y de búsqueda de beneficio personal por parte de los líderes, que llevan a desacuerdos tanto en las instituciones como en la comunidad a la que representan.

La seguridad comunitaria, el manejo del poder y de la vida pública por un grupo pequeño de líderes, no son totalmente reconocidos por los representantes de las instituciones gubernamentales e incluso ha generado conflictos con algunas de estas instituciones hasta la ruptura de relaciones, lo mismo que con varios de los residentes que



Fotografía propia tomada en la ciudadela Santa Rosa en abril de 2011.

desaprueban tales prácticas que se ejercen desde el poder. Aquí tenemos el caso de la movilización objetiva, en donde la participación es real pero no es totalmente reconocida y legítima provocando así conflictos entre actores diversos.

Muchos desmovilizados también se ven al margen de esas estructuras organizativas y de la participación comunitaria. Podríamos hablar de una participación política alejada de la colectividad en varios casos, en los que al estar en desacuerdo con algunas prácticas dentro de la ciudadela, y al ser tan lejana y ajena la participación política como habitantes de la ciudad, así como ciudadanos colombianos (reducción de la participación al voto), se limitan a suplir las necesidades familiares y a mejorar sus condiciones de vida, a mantener la “ley del silencio” que analizábamos anteriormente, aunque sus lazos dentro de la comunidad tiendan a ampliarse y a involucrarlos con las dinámicas comunitarias.

Así mismo también hay situaciones de desempleo o de abandono del estudio donde a pesar del deseo de integrarse a la vida de la ciudad y asumir sus patrones culturales, las condiciones objetivas no lo permiten pero se buscan otras formas de generar ingresos como

negocios que funcionan en las casas, trabajos por turnos en la seguridad, entre otros, que aunque no están dentro de la formalidad son la realidad de muchos pobladores urbanos de estratos bajos. Sin embargo es importante resaltar que dado que el programa en parte los obliga a realizar cursos en el SENA para otorgarles el beneficio económico mensual, ellos realizan varios de estos y eso les ha ayudado a insertarse laboralmente en la ciudad, así como incorporarse a otras instituciones y otros contextos donde también asumen nuevos papeles y una nueva forma de vida. Adicionalmente el programa que funciona en Santa Rosa para enviar personas a trabajar a España, también se convirtió para algunos en una forma rentable de generar ingresos para su familia y mejorar sus condiciones de vida.

La participación integrada también tiene lugar allí a través de las organizaciones permitidas dentro de las estructuras de poder locales como lo son las Juntas de Acción Comunal. La labor de la JAC de la ciudadela y su labor de reconciliación y satisfacción de necesidades colectivas, además de ser reconocida legítimamente como forma organizativa mediadora entre el gobierno y lo local, ha sido resaltada por la labor emprendida en busca de la integración en la comunidad y en los beneficios conseguidos a través de su labor. Tan reconocido es el caso de santa rosa (que principalmente es visibilizado a través del proceso de la familia que maneja las organizaciones y la JAC), que se ha mencionado como caso exitoso y ejemplar (también porque son desmovilizados y coexisten pacíficamente) en publicaciones sobre procesos de reintegración en la ciudad, ha sido utilizado como ejemplo de gestión comunitaria y ciudadana por la ACR y además es resaltado por algunas entidades académicas. De esta manera, estas formas organizativas los han acercado a la integración a las estructuras políticas y a la vida pública en tanto se convierte en un caso de referencia que goza de legitimidad por diversas instituciones y entidades.

Organización política y participación ciudadana en los procesos de integración a la vida civil

Para este momento vamos a explorar los procesos de integración a través de la organización y participación ciudadana, para empezar nos remitiremos al concepto de integración o de sociedad integrada, definido por Germani y expuesto anteriormente. Por otro lado, Germani se refiere a desintegración cuando existen formas anteriores o arcaicas diferentes a las planteadas, en la sociedad integrada (Germani, 1963:2).

En el caso de los desmovilizados de Santa Rosa, algunos de sus patrones culturales previos, como la disposición a procesos organizativos y colectivos, les permitió acceder a la ciudad de manera efectiva. La primera organización que efectuaron los excombatientes fue aquella intensión de organizarse para la compra de una casa en la ciudadela Santa Rosa, momento en el cual algo más de cien familias, se asentaron en este barrio. Vemos que ésta primera organización se hace con el objetivo, de obtener una vivienda propia, es decir, un recurso material necesario para su proceso de reintegración y de socialización exitosa.

Todo este trabajo colectivo se hizo con el objetivo común de lograr obtener recursos materiales lo cual sirvió de antesala de formas organizativas más complejas y arraigadas de un territorio específico. Al asentarse en Santa Rosa, los desmovilizados empiezan a establecer redes sociales que les permitieron aumentar su capital social y mediante el cual vemos que, a partir del surgimiento de algunos líderes, se establece una organización legal y legítimamente reconocida como lo fue la formación de la JAC con miembros desmovilizados. Desde allí, estos acceden a una participación política en donde logran satisfacer necesidades colectivas tales como la seguridad, alimentación, educación y actividades de recreación que les eran difíciles de adquirir de manera individual.

Esta conformación de comunidad se da gracias a que muchos de los líderes que surgieron en Santa Rosa, traían internalizados esquemas de organización provistos en su socialización en los grupos armados. Esto se ve particularmente en los excombatientes que pertenecieron a los grupos guerrilleros. De esta manera, podemos afirmar que las formas ‘arcaicas’ de organización no son obsoletas del todo en la nueva realidad que asumen los desmovilizados, sino por el contrario, les sirvieron como mecanismo integrador en su proceso de reintegración a la vida civil, sin que ello implique necesariamente su segregación social.

De otra parte, vale la pena señalar que no sólo a través de la integración y participación política en la JAC los desmovilizados empiezan a adquirir beneficios, éstos también se dirigen en una doble vía, ya que si bien, la JAC se constituye como uno de los logros más eficaces de integración, éste es también un medio y motor que impulsa la creación de otras organizaciones. Entre ellas podemos contar, organizaciones no gubernamentales y fundaciones que se encargan de los derechos de los niños, la mujer y

ayudar a otros miembros ex combatientes en su proceso de reintegración dándoles oportunidades de trabajo en el exterior.

Pero como en todo proceso social, en la comunidad de Santa Rosa han surgido disyuntivas de carácter político que muchas veces entorpecen el proceso comunitario y en otros, lo dinamiza. Así, en el barrio la estructura política de la JAC ha entrado en conflicto con otros actores sociales de la comunidad, por lo que en muchos casos vemos cómo los mismos integrantes de la JAC han sido elegidos por dos periodos consecutivos en los que han desarrollado actividades con las que no han estado de acuerdo algunos miembros de la comunidad. Bajo esta perspectiva, nos damos cuenta que en Santa Rosa, se limita la participación ciudadana y política alternas a las planteadas por la junta. Como lo explica una de las entrevistadas:

“Lo único que no me gustaba en el barrio es que resulta que para las temporadas como diciembre, día del niño, cosas especiales así, resulta que como la alcaldía, entidades que colaboran dando regalos y todo eso, o sea debiera ser nivelados, para todo el mundo, los niños ser por parejo pero aquí eso no se ve, a veces se pierden los regalos, otras veces uno más que otro recibe regalito, eso entre una sola familia quedan los mejores regalos y al resto le dan lo que sobra entonces no debería ser... porque si yo digo que van a dar unos regalos acá saber qué es el censo, por casa ¿cierto?, ¿cuántos niños tiene? Listo, pero no aquí eso no y ya eso y los regalos que sobran ¿qué? ¿Quiénes se quedan con ellos? Esas son inquietudes que más de uno tenemos pero también como dice el dicho, estamos como en el modo del silencio, todo el mundo en silencio nadie dice nada, nos damos cuenta, nos enteramos de todo pero todo el mundo come callado, ay que yo no quiero tener problemas que no se que, pues para ser sincera yo también hay veces que digo, ¡ay! cuando a veces digo pues a mí no me sobra la plata pero tampoco voy a mendigar a que mi hijo le den, mientras que están guardando los mejores regalos y todas esas cosas, entonces no” (Entrevista a desmovilizada de las FARC-EP No 003).

Otra persona afirma lo siguiente:

“No, con la junta fue tenaz porque yo pase una carta para solicitar el salón comunal para lo del proceso de las casas y lo primero que dijo Juan es que él no va a prestar nada, porque eso es politiquería y nosotros como funcionarios del distrito no podemos hacer política, entonces ya Pedro está diciendo que yo cobro 200 mil pesos por la asesoría jurídica viendo que nosotros tenemos aquí un abogado que no cobra nada, que no quiere saber nada de la Secretaría de Gobierno, doña Carmen que como van a pasar por encima de la junta entonces a mí me ha tocado hacer las reuniones en mi casa, afuerita se les da tintico y ahí paraditos. Pero eso es una pelea más contra esa gente,

entonces para mí no hay lío que lleguen a mi casa, la gente ya sabe que yo vivo ahí, entonces que se va poner uno a desgastarse, dejarlos, por encima de lo que sea yo voy a seguir trabajando con esa comunidad con o sin contrato, vamos a seguir el proceso de las casas” (Entrevista a desmovilizada de las FARC-EP No 004).

Por otro lado, en conversaciones informales con un desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) nos hablaba acerca de aspectos negativos sobre la actuación de la JAC frente a cuestiones como la seguridad comunitaria y la distribución de desayunos para los niños en los que al parecer, la JAC ha destinado recursos de estos proyectos para intereses personales de los miembros de la junta.

A partir de lo dicho podemos inferir que los procesos políticos y organizativos en Santa Rosa han sido un mecanismo importante para la integración a la sociedad civil, pero presenta características negativas al interior de la comunidad, en las que se generan disputas de poder que en algunos casos, entorpecen el proceso comunitario que se ha venido desarrollando en Santa Rosa.

Diálogos entre integración global e integración local

Como lo hemos mencionado anteriormente, las comunidades urbanas no pueden entenderse como unidades estables y cerradas sino insertas en el escenario urbano donde se conforman como proceso dinámico y social atravesado por la construcción de significados comunes y construcción de sentidos de pertenencia; los individuos se organizan usualmente en grupos para suplir ciertas necesidades que no pueden satisfacer a través de otras instituciones, configurando una realidad compartida que genera identificaciones y lazos sociales.

Así pues, en el proceso de construcción de esta comunidad confluyen varios actores e instituciones que participan e intervienen de forma directa o indirecta. Sin embargo es importante resaltar que al entrar en un proceso de resocialización, donde reconfiguran su realidad, las personas generan estrategias que les permite reconstruir sus lazos y construir un sentido de pertenencia con un lugar que han hecho propio y transferirlo a las personas que lo habitan.

En este proceso se puede observar una combinación de patrones de conducta previos y propios de la vida en la ciudad y en la legalidad, mediados en parte por la labor educativa y de asistencia de los programas gubernamentales, pero en su mayor parte

impulsados por la iniciativa propia de los desmovilizados por generar dinámicas sociales de solidaridad, integración y bienestar en torno a su lugar de residencia e interacción. Lo que tiene lugar allí es un proceso autónomo que se puede analizar en varios niveles, como lo hemos visto anteriormente: por un lado el proceso colectivo y de organización, y por el otro los procesos individuales de cambio y de resignificación del pasado para poder empezar nuevas formas de vida en la ciudad.

Según lo anterior, es importante matizar la generalización que realiza Germani al identificar en los patrones previos de socialización utilizados en las nuevas estructuras causas de una integración no positiva y tendiente a reproducir marginalidades (Germani, 1967:395); por el contrario, el caso de la ciudadela nos da argumentos, desde el análisis de lo local y lo comunitario para revalorar la socialización previa como elemento adicional en la reintegración. A partir de lo local, en donde se fusionan patrones de socialización previos y patrones nuevos propios de la civilidad, se construyen identidades y procesos de integración exitosos en tanto estos se corresponden con dinámicas propias de la ciudad. El ejemplo más claro de esto lo observamos en la organización como factor colectivo donde convergen aprendizajes y disciplinas grupales procedentes del pasado vivido en los grupos armados, junto con las exigencias esperadas por parte de los mecanismos oficiales para el desarrollo de las actividades de participación ciudadana. López de la Roche (1993) explora estas condiciones de la reintegración política de excombatientes y rescata algunos patrones aprendidos como valiosos para la construcción de sujetos políticos activos:

“Tradición de organización y disciplinamiento social, presente en las organizaciones marxista-leninista-, debida a la disciplina de partido y a la forma de organización celular. Esta tradición redefinida de manera democrática y depurada de ciertas características conspirativas, autoritarias y de ghetto que generalmente le han acompañado, puede ser importante hacia el futuro, en la construcción organizativa de nuevas instituciones (de hecho ya lo ha sido), en un país bastante desarticulado organizativamente, y con una sociedad civil débil y dispersa” (López, 1993: 25).

Los procesos de integración, con las particularidades de ser excombatientes quienes los emprenden, no solamente se basan en la adopción de patrones culturales, la inserción en las instituciones y la participación legítima y reconocida, sino que también se trata de explorar las posibilidades de la ciudadanía y de una reintegración política crítica sobre la

realidad civil a la que se insertan. Tales posiciones alternas no solo con respecto a la sociedad sino también con las dinámicas internas que se generan en la comunidad se hacen presentes continuamente en las entrevistas realizadas, lo que evidencia una participación individual y crítica que subsiste y que es importante para la transformación de su realidad.

El esquema de Germani habla de la ciudad también como una unidad en donde se establecen patrones modernos de conducta, y donde la participación está ligada a una legitimidad y a un reconocimiento, pero donde también hay desintegración que genera movilización y en algunos casos promueve el cambio social. En este caso debemos considerar la ciudad como contexto, pero es punto central el desarrollo de la comunidad, por lo que otros estudios sobre las vecindades y la idea de lo local nos ayudan a vislumbrar otros factores importantes a la luz de la reintegración.

La generación de lazos e identificaciones es un paso para la integración en tanto permite un lugar desde el cual participar e involucrarse con diferentes instituciones, solucionar problemas y necesidades que se les presentan, y de una u otra manera tener acceso a una base social o estructura plausible que sean aquellos significantes que les sirvan de guías de una nueva realidad. Sin embargo, los residentes de la ciudadela también son de bajos recursos, desplazados y en general gente de otros lugares, por lo que sus recursos o herramientas de movilización se vieron incrementadas una vez los desmovilizados llegan allí por la visibilización de las instituciones y por las iniciativas organizativas que trajeron consigo beneficios para la comunidad. Se puede decir entonces que el proceso de construcción de comunidad en la ciudadela ha sido un proceso dinámico en tanto los diferentes actores que intervienen aportan desde sus lugares y posiciones en la sociedad, apuntando muchos al cambio y mejora de las condiciones de vida, y de alguna manera facilitando su integración a las pautas modernas mientras se tienen necesidades básicas satisfechas, no solo materiales sino también psicológicas como el sentido de pertenencia, solidaridad y el sentimiento de colectividad.

Lo importante es ver que no todo lo vivido en el pasado debe ser dejado atrás sino que debe ser repensado desde una experiencia más concreta como lo es la de estos excombatientes organizados y reunidos en un espacio que han convertido en su lugar de interacción y participación. Aunque la participación real en el proceso colectivo de la ciudadela no sea de la mayoría (se reproducen mecanismos asistencialistas), los efectos de la organización los han beneficiado de manera general aunque se presenten irregularidades en el acceso a estos. Aunque muchos dicen no participar o no enfrentar a aquellos líderes que han concentrado el poder de movilización, si hacen referencia a su pertenencia a una comunidad y a la existencia de lazos importantes con sus vecinos. También hay que resaltar la participación individual política al exponer sus posiciones divergentes y en algunos casos exponerlas ante distintas instancias de participación.

Especialmente para la integración se han generado espacios dentro de las dinámicas de la ciudadela que nos permiten explorar como desde lo local se generan instancias de participación que los socializan en la civilidad y los ayuda a integrarse a los mecanismos y pautas normativas de la vida en la ciudad.

Las actividades como el día de los niños, el festival de las cometas por la paz, la celebración del día de la madre y las celebraciones de fin de año, son espacios de socialización que dada la concurrencia, no solo de los residentes de la ciudadela sino de personas de barrios aledaños, hace que los desmovilizados interactúen y se integren a la población civil en general, abandonando las distinciones estigmatizantes que conlleva el que sean excombatientes y abriendo más posibilidades de generar lazos sociales y pautas de conducta familiarizadas con la civilidad.

Es importante resaltar que en esta ciudadela y en los barrios cercanos la mayoría de personas pertenecen a estratos socioeconómicos bajos que también se ven marginalizados en tanto no pueden acceder a formas de participación y a la adopción de formas de consumo esperadas. Esto se ve mitigado por la labor organizativa para superar en parte estas incapacidades asociadas a la marginalidad de las periferias urbanas, pero también hay



Fotografía propia tomada en la ciudadela Santa Rosa en Marzo de 2011.

que resaltar que aunque hay mecanismos de movilización que se dan a través de la organización y la participación hacen falta todavía condiciones objetivas, especialmente de desarrollo económico, para que esa integración real tenga lugar en los sectores marginados (Germani, 1976: 59 – 62).

Aunque Germani contempla la afiliación e identificación de los individuos con una colectividad (por ejemplo a un barrio pobre) como mantenimiento de su ajuste a un marco rural cerrado que mantiene en medio de la ciudad para evitar el desgarramiento y la anomia que produce el desajuste, el caso de la ciudadela muestra como más allá de que se mantengan relaciones primarias y de solidaridad, así como patrones previos, esta vinculación a su barrio y la capacidad organizativa que esta genera, se vean como formas propias de lo local dentro de lo urbano, y que ayuda de cierta manera a que estos individuos puedan integrarse a una realidad urbana a través de organizaciones mediadoras que faciliten y gestionen tal contacto.

Como vimos a lo largo del capítulo en la ciudadela Santa Rosa se ha dado una manifestación múltiple y simultánea de los momentos propuestos por Germani y las clasificaciones hechas por él en cuanto a la movilización, la participación y la integración. Lo que se puede señalar es que a la vez que se dan formas de integración por asimilación, se están generando simultáneamente otras formas de participación no tan reconocida que han posibilitado cambios dentro de su realidad social y acciones no esperadas dentro de la estructura normativa. La participación, aunque aparezca de las dos formas (integrada y no integrada) debe entenderse también como una capacidad que se puede desempeñar en varios niveles, tanto en el individual asociado en gran parte a la idea de ciudadanía y a la posición crítica sobre su realidad, como en el colectivo donde se puede identificar líderes y otros factores dentro de la movilización que explican de alguna manera las realidades sociales en cuanto a su organización.

En cuanto a los factores que escapan o que difieren de las explicaciones de Germani se entienden a través de la consideración de lo local como parte vital del proceso de integración y participación de las poblaciones en escenarios urbanos. Hoy en día la organización de comunidades urbanas es más recurrente en tanto se convierte en un mecanismo de interacción con las instituciones que gobiernan la ciudad y como mecanismo para buscar soluciones a sus necesidades más sentidas como colectividad. Así, lo que

podemos ver es que en el caso de la ciudadela los procesos comunitarios desarrollados dentro de lo local han permitido su integración a la comunidad como tal, al acceso a estos pobladores que pueden convertirse en sus guías en la civilidad, a una mayor participación dentro de las dinámicas urbanas y dentro del marco institucional, el desarrollo de acciones no esperadas dentro de la estructura que generan cambios en sus dinámicas sociales y del mismo modo a la satisfacción de sus necesidades dentro de formas de participación integrada a través de asociaciones y de la JAC.

CONCLUSIONES

El caso de la ciudadela Santa Rosa, como lo hemos evidenciado anteriormente, está compuesto de varios factores que han determinado su devenir como una comunidad con procesos de integración, acción y participación, reconocida por los procesos de reconciliación emprendidos por los desmovilizados de grupos armados al margen de la ley. Estos han utilizado distintos mecanismos de resocialización que les han permitido superar la tensión que les representaba su tránsito a la ciudad y su cambio en las nociones de realidad. Estos mecanismos se pueden explorar en dos niveles principalmente: 1) a través de los cambios y permanencias en la experiencia individual de los excombatientes, y 2) a través de los procesos de construcción de comunidad y aspectos organizativos dentro de la ciudadela, que aunque no se pueden separar por ser constitutivos el uno del otro, si hay factores que pueden presentarse por separado, con fines analíticos, para mostrar los distintos procesos.

El entorno urbano y sus distintos actores también han generado efectos importantes en el proceso, ya que impone ciertas dinámicas y actitudes, así como posibilidades de organización y obtención de beneficios. Las instituciones también han jugado un papel determinante ya sea como colaboradoras o como objeto de críticas. Así, aunque las dinámicas se han creado y fortalecido primordialmente dentro de lo local, su relación con otros actores externos la ha fortalecido, legitimado, dinamizado y(o) obstaculizado.

1) Con respecto al primer nivel sobre los procesos individuales de los sujetos excombatientes, debe considerarse las transiciones, cambios y permanencias en sus formas de asumir la nueva realidad en la civilidad. Así la exploración de los procesos de socialización en los grupos armados permitió entender las comparaciones que hacen los excombatientes entre su pasado y su presente, hecho que era recurrente en las conversaciones. Las estructuras rígidas de poder, los entrenamientos rigurosos y ortodoxos, las privaciones tanto afectivas como sociales, el accionar violento y la identificación a un colectivo, parecen ser los aspectos más resaltados de estos procesos socializadores; igual es importante decir que estos son aspectos generales que difieren de naturaleza y práctica según el grupo armado de procedencia como lo indicábamos en el capítulo segundo.

Al llegar a la ciudad los excombatientes deben desaprender para aprender, sin embargo hay algunos aspectos que mantienen y que les resultan efectivos para socializar

dentro de este nuevo contexto para ellos, como por ejemplo la disposición a relacionarse con la gente y su experiencia organizativa. Aunque la intervención de los programas gubernamentales tienen un impacto y ayudan de cierta manera en su transición, estos elementos aprendidos son reapropiados y traspuestos con elementos ya existentes. Esto les permitió generar un proceso autónomo de reintegración en la ciudadela a través de iniciativas propias que con el tiempo fueron generando más proyectos y procesos de pertenencia e identificación con su espacio tanto geográfico como social.

Los aspectos comparativos más resaltados de las dos realidades (en el grupo armado y después en la vida civil) fueron la libertad individual que han ganado en la civilidad, así como el poder ser crítico frente a su realidad sin responder leal y totalmente a un grupo; la tranquilidad que les representa poder vivir en la civilidad pero las dificultades que esta plantea en tanto la obtención de recursos y la utilización de mecanismos propios de lo urbano (como por ejemplo su relación con procedimientos burocráticos); y por último, las dificultades que presenta la desafiliación a un grupo por un lado, pero los beneficios de construir proyectos familiares e individuales por el otro.

Aunque las características de los trabajos y el rol que desempeñan dentro los grupos armados les generan una insatisfacción, gracias a que son sometidos a castigos, y los obligan a cumplir tareas en las que no están de acuerdo, estas no llegan a ser la razón principal por la cual toman la decisión de desmovilizarse. La materialización de las desmovilizaciones se justifica aludiendo a vínculos emocionales relacionados con la familia, en el que su principal objetivo es estar con sus hijos de manera segura y constante.

La posibilidad de estar con su familia permanentemente y de construir proyectos con ésta es uno de los elementos más valiosos de su reintegración. Muchos de ellos señalan que han emprendido un proceso de educación y resignificación de sus vidas para poder ser un ejemplo para sus hijos. En consecuencia, adquieren una serie de capitales sociales y simbólicos que les representan beneficios para insertarse en la sociedad colombiana de manera efectiva, a la vez que les procura satisfacción personal, dado que éstos se convierten en la prueba de su intención de cambio y superación.

En términos de su acción individual, cada uno de ellos ha aceptado los términos implícitos de convivencia dentro de la ciudadela y muchos de ellos han puesto de su parte y participado en procesos de integración y mejoramiento de la ciudadela. Sin embargo

muchos de ellos han limitado con el tiempo la participación política dentro de su realidad y se han acogido a la “ley del silencio”.

La noción que los excombatientes tienen de sí mismos como ciudadanos es ambigua y contradictoria. En primera instancia, suelen verse como personas sujetas a derechos y beneficios legales en la que el Estado les asiste ciertas necesidades básicas tales como la salud, la educación y la posibilidad de vincularse al mercado laboral, pero en otros contextos fuera de la ciudadela suelen negar u ocultar su condición de excombatientes. Por otro lado, podría decirse que de cierta forma, aunque limitada, los procesos de auto representación y reapropiación de su condición dentro de la ciudadela, permitieron transformar los imaginarios y estigmas negativos generalizados en la sociedad civil, para poder generar relaciones más positivas y de aceptación dentro de su comunidad, logrando que ellos adquieran una participación activa dentro del barrio, pero que no se exterioriza por fuera de éste, al menos de manera individual.

2) Con respecto al nivel comunitario los procesos han sido complejos y llenos de matices para hablar de integración, reconciliación y participación. Los desmovilizados llegan al barrio por una acción organizada para gestionar la compra de las casas en remate por el valor que el programa del gobierno les daba para comprarlas. Los que llegan después, lo hacen utilizando sus redes establecidas en el grupo armado, ya que muchos llegan allí por referencias de los desmovilizados conocidos que llegaron previamente. A partir de actividades como la seguridad y las ollas comunitarias logran integrarse satisfactoriamente con los residentes que ya estaban asentados allí hace algunos años. Algunos líderes específicos logran conformar organizaciones en pro de ese proceso de integración y participar de la Junta de Acción Comunal.

En un principio las actividades y beneficios que ofrecían a la comunidad fueron bien recibidas, pero con el tiempo, al ver que los líderes (una sola familia) asumían el poder en la ciudadela y que, según algunos entrevistados, obtenían beneficios personales de los recursos que adquirían para suplir las necesidades, aparecieron inconformismos y diferencias entre los mismos residentes, como también con las instituciones que apoyaban o intentaban entrar al proceso.

También el programa de seguridad comunitaria ha suscitado posiciones yuxtapuestas tanto al interior como al exterior del barrio. Por un lado fue uno de los

factores que mejor recepción tuvo dentro de los residentes de la ciudadela, y uno de los aspectos más positivos e influyentes para que se diera la integración y aceptación de los excombatientes allí. Por otro lado, este programa ha generado gran polémica tanto dentro de los residentes como de otros actores que conocen del proceso, pero que no residen en Santa Rosa. El hecho de que se extralimiten en sus funciones y se genere un control del espacio y de la vida pública, genera opiniones encontradas y críticas, debido a que sienten que el poder (de la fuerza) está concentrado en un grupo reducido de personas, por medio del cual se corre el riesgo de que se generen instituciones paralelas al estado que puedan llevar a “tomar justicia por su propia mano” dentro de un proceso de reintegración. Además algunos residentes piensan que hay problemas allí en tanto es un servicio que hay que pagar a unas personas, y el dinero recolectado para sustento del programa no es destinado a un fondo común en el que la gente pueda verificar la reinversión de esos pagos. Sin embargo a pesar de los riesgos aparentes que genera este programa, fue apoyado por la Policía Nacional y ha sido exaltado como el proyecto bandera en varias ocasiones por algunas instituciones.

Estos líderes y sus organizaciones logran aprovechar la visibilidad que tenían ante el Estado por estar concentradas allí tantas familias desmovilizadas y se convierten en destinatarios de proyectos, talleres, actividades y se les ha otorgado legitimidad a su proceso. También han aprovechado esto para movilizar recursos y obtener varios beneficios para su comunidad, lo que les representa simpatía y filiación en los residentes de la ciudadela; esto se ve reflejado en que la presidenta de la JAC, desmovilizada del ELN, ha sido reelegida en su cargo. Sin embargo esta perpetuación en el poder y la concentración del mismo en manos de unos pocos ha generado tensiones tanto en los residentes como en actores externos que intervienen en la ciudadela. Este es un punto central ya que para poder generar una buena convivencia se estableció el olvido de las estructuras de poder y jerarquías manejadas dentro de los grupos armados, como también se difundió e interiorizó la idea era que todos eran iguales y compañeros en esta empresa de volver a la civilidad, sin embargo, con este devenir de la concentración del poder, estos fenómenos de dominación y regulación de la vida pública en la ciudadela han creado tensiones y visiones críticas al respecto.

Estos liderazgos y predisposición a procesos organizativos y de denuncia, se resaltan como una constante en los procesos de socialización en los grupos armados. También la capacidad de convocar a la gente, entablar buenas relaciones con ellos, fueron identificados por varios desmovilizados de las guerrillas, como resultado de valores aprendidos en estos grupos. En el caso de los desmovilizados que han logrado insertarse en trabajos con entidades del Estado reconocen esta oportunidad como una vía de manifestación de sus posiciones políticas y críticas con respecto a la sociedad a la que pertenecen. También el uso de su imagen y del estigma que tienen como desmovilizados y como sujetos violentos e impulsivos les permitió generar beneficios para su comunidad en tanto la delincuencia fue combatida de manera efectiva, aunque en casos de manera dudosa, aspecto que para los residentes ha sido significativo en tanto sienten que el barrio es más seguro y tranquilo.

La integración en este caso se ha dado de dos maneras, a través de la asimilación de los patrones de acción e interacción a lo esperado por la estructura normativa, pero también a través del cambio social donde la movilización, emprendida por los desmovilizados, generó cambios en la estructura y les permitió integrarse haciendo uso de patrones de su socialización previa. La movilización se dio a nivel individual, en tanto los desmovilizados manifestaron y procuraron desempeñar nuevos papeles dentro de la sociedad (por ejemplo a través del trabajo y la educación) pero también a nivel colectivo donde se da una participación real y logran generar dinámicas de mayor impacto en su comunidad y en sus propias vidas dentro de la civilidad.

Lo que podemos ver es que en el caso de la ciudadela los procesos comunitarios desarrollados dentro de lo local han permitido su integración a la comunidad como tal, al acceso a estos pobladores que pueden convertirse en sus guías en la civilidad, a una mayor participación dentro de las dinámicas urbanas y dentro del marco institucional, el desarrollo de acciones no esperadas dentro de la estructura que generan cambios en sus dinámicas sociales y del mismo modo a la satisfacción de sus necesidades dentro de formas de participación integrada a través de asociaciones y de la JAC.

Recapitulando los resultados para poder analizar estos dos niveles, lo que podemos concluir es que su experiencia y aprendizajes como excombatientes claramente no han quedado en el pasado, sino que han buscado la manera de reapropiarlo para re-significarlo

ante una nueva realidad, y han logrado revertir los efectos negativos de la estigmatización, haciendo que los señalamientos a los que están sujetos por parte de la sociedad civil se reconozcan como legítimos, permitiéndoles movilizarse y visibilizarse positivamente frente a la sociedad y a las instituciones públicas.

Para responder a la pregunta de investigación podemos decir que los mecanismos de resocialización son varios. Primero, los aspectos reapropiados de su socialización les ha representado mejor relación con los residentes y la posibilidad de liderar y sacar adelante procesos organizativos con gran capacidad para movilizar recursos. Segundo, estas organizaciones han sido uno de los mecanismos más efectivos de resocialización en tanto les ha permitido solventar problemas y satisfacer necesidades, no solo para ellos sino para la comunidad, que de otra manera hubiera sido muy difícil, si no imposible. Estos beneficios obtenidos les representan una integración y filiación con los residentes de la comunidad que se convierten a su vez en esa estructura plausible, en los guías dentro de la realidad urbana y la civilidad. Tercero, a través de las filiaciones que sienten por tener un pasado común, su interacción es frecuente y se generan lazos estables entre ellos, lazos que se extienden con los demás residentes, con los que comparten espacios más privados como fiestas y reuniones que se llevan a cabo frecuentemente en la ciudadela.

El cuarto mecanismo apunta a la iniciativa por ayudar indistintamente a las personas que viven en el barrio, lo que ha sido una estrategia efectiva para su resocialización, en tanto están creando una idea de colectividad y recuperando de cierta manera los beneficios personales que les representaban el pertenecer a un grupo, aunque claramente hay diferencias en tanto este es más abierto, voluntario y espontáneo. Quinto, sus acuerdos para no revivir las diferencias y experiencias de su vida en los grupos armados, los cuales los líderes se han encargado de mantener en caso de que alguien no se acoja, les ha permitido entre ellos tener una buena convivencia y poder establecer relaciones positivas con la comunidad. Este acuerdo lleva de la mano la no identificación de varios como desmovilizados, para también evitar distancias por prejuicios, aunque dentro de la ciudadela es un hecho bastante aceptado que los desmovilizados residan allí, ya que los habitantes del barrio, gracias a las acciones y a los beneficios que les representa, han aceptado positivamente y sin presiones que las personas en proceso de reintegración,

tengan una segunda oportunidad para rehacer su vida junto a sus familias, lo que permite fortalecer los procesos de reinserción de manera más plausible y eficaz.

Para terminar, es importante resaltar que este es un proceso valioso para las experiencias de reintegración y reconciliación del país (el cual está a punto de desaparecer por estar referido a un espacio determinado que fue clasificado como zona de riesgo no mitigable, lo que deviene en desalojo de todos los residentes), y que a pesar de las divergencias y conflictos que se presentan internamente, es la muestra de un esfuerzo legítimo por cambiar ciertos aspectos de la realidad que se presentan desfavorables. Estas dinámicas más espontaneas y posibles, a diferencia de modelos preestablecidos e impuestos indistintamente de reintegración individual y comunitaria, son valiosas y merecen ser estudiadas en tanto ofrecen herramientas para pensar y re-significar el papel de los excombatientes y ciudadanos dentro de la configuración de realidades que no aparecen ajenas para el resto de la sociedad y que demuestran que la consideración de la dimensión política y participativa de los ciudadanos (desmovilizados o no) debe ser rescatada y fortalecida para poder emprender procesos de reconciliación tan necesarios en el escenario nacional.

BIBLIOGRAFÍA

- Alta Consejería para la Reintegración social y económica de personas y grupos alzados en armas (ACR). *El Proceso de Reintegración Social y Económica de Desmovilizados*. Sin fecha. Disponible en: http://www.reintegracion.gov.co/Es/prensa/Documents/centro_doc/ruta_de_reintegracion.pdf.
- Alta Consejería para la Reintegración social y económica de personas y grupos alzados en armas (ACR). *MAPAZ: Modelo de Atención Psicosocial para la Paz. Nuevas rutas para el desarrollo de competencias en los desmovilizados y sus contextos*. Centro Mundial de Investigación y Capacitación para la Solución de Conflictos, asesoría técnica y edición. 2010.
- Anderson, Nels. *Sociología de la comunidad urbana. Una perspectiva mundial*. México: Fondo de Cultura Económica, 1965.
- Ángel Valencia, Liseth. “En San Cristóbal hay un Canto de Molino”. En *Una propuesta polifónica para la reintegración en Bogotá*. Bogotá: Secretaría de Gobierno, 2009.
- Arias O., Gerson Iván. “Una mirada atrás: Procesos de paz y dispositivos de negociación del gobierno colombiano”. *Serie Working papers FIP*, No 4 (octubre 2008). Fundación Ideas para la Paz (FIP).
- Berger, Peter y Luckmann, Thomas. *La construcción social de la realidad*. Traducido por Silvia Zuleta. Buenos Aires: Amorrortu, 2001.
- Blair, Elsa. “Mucha sangre y poco sentido: la masacre. Por un análisis antropológico de la violencia”. En *Boletín de Antropología*, Vol.18, No. 35 (2004). Universidad de Antioquia.
- Blair, Elsa. “Aproximación teórica al concepto de violencia: avatares de una definición”. En *Política y Cultura*, No. 32 (otoño 2009). Universidad Autónoma Metropolitana De México.
- Blair, Elsa. *Muertes violentas: la teatralización del exceso*. Medellín: Instituto de Estudios Regionales, Editorial Universidad de Antioquia, 2005.
- Bourdieu, Pierre y Loïc J. D. Wacquant. *Respuestas por una antropología reflexiva*. Traducido por Helene Levesque Dion. México D.F.: Grijalbo, 1995.
- Bourdieu, Pierre. *El sentido de lo práctico*. Buenos Aires: Siglo XXI, 2008.
- Bowman, LeRoy E. “Community Organization”. En *American Journal of Sociology*, Vol. 36, No. 6 (1931). The University of Chicago Press. Disponible en: <http://www.jstor.org/stable/2767459>
- Brim, Orville Jr. “Socialización de adultos”. En *Enciclopedia Internacional de las ciencias sociales* - tomo 10. Editorial Aguilar, 1977.
- Cárdenas Sarrias, José Armando. *Los parias de la guerra. Análisis del proceso de desmovilización individual*. Bogotá: Ediciones Aurora, 2005.

- Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR). “Biblioteca comunitaria en Santa Rosa abrió sus puertas”. Mayo 9 de 2008. Disponible en: <http://www.cnrr.org.co/contenido/09e/spip.php?article227>
- Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR). *Una forma ejemplar de convivencia. Excombatientes que trabajan por su comunidad*. Boletín No 4, 2008.
- Connelly, Steve. “Constructing Legitimacy in the New Community Governance”. En *Urban Studies* Vol. 48, No. 5 (2011). Taylor and Francis.
- Consejo Nacional De Política Económica, Departamento de Planeación Nacional. *Documento CONPES 3554: Política nacional de reintegración social y económica para personas y grupos armados ilegales*. Bogotá: DNP, 2008.
- Contreras Rolón, Tatiana; Jaramillo de Botero, Margarita y Antonio Picón Amaya, compiladores. *La Política de Reincorporación a la Vida Civil 2003 – 2006. Una mirada institucional*. Ministerio del Interior y de Justicia, Agosto de 2006.
- Dahrendorf, Ralf. *Las clases sociales y su conflicto en la sociedad industrial*. Traducido por Manuel Troyano de los Ríos. Madrid: Rialp, 1974.
- Gaffikin, Frank y Morrissey, Mike. “Community Cohesion and Social Inclusion: Unravelling a Complex Relationship”, En *Urban studies*, Vol. 48, No. 6 (2011).
- Gamson , William A. “Commitment and Agency in Social Movements”. En *Sociological Forum*, Vol. 6, No. 1 (Springer, 1991). Disponible en: <http://www.jstor.org/stable/684380>.
- García Canclini, Néstor. *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. México D.F.: Paidós, 2001.
- Germani, Gino. “La ciudad como mecanismo integrador”. En *Revista Mexicana de Sociología*, Vol. 29, No. 3, (1967). Disponible en: <http://www.jstor.org/stable/i282352>
- Germani, Gino. “La ciudad, el cambio social y la gran transformación”. En *Urbanización, desarrollo y modernización*. Gino Germani, Compilador. Traducido por Rosa Cusminsky de Cendrero. Buenos Aires: Paidos, 1976.
- Germani, Gino. “Los procesos de movilización e integración y el cambio social”. En *Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales*, Vol. 3, No. 3 (octubre-diciembre 1963). Disponible en: <http://educ.ar/educar/lm/1202995233152/kbee:/educar/content/portal-content/taxonomia-recursos/recurso/8e910a91-c841-43f5-a1a3-d3112ec24ff3.recurso/1e49e983-f398-4a5e-b042-035158bd07e0/PD000021.pdf>
- Giglia, Angela. “Sociabilidad y megaciudades”. En *Revista Estudios Sociológicos*, Vol XIX, No 003 (2001). Disponible en: <http://redalyc.uaemex.mx/pdf/598/59805710.pdf>
- González Arias, José Jairo. *Espacios de exclusión: el estigma de las repúblicas independientes 1955-1965*. Bogotá: CINEP, 1992.

- Gravano, Ariel. *El barrio en la Teoría Social*. Buenos Aires: Espacio Editorial, 2005.
- Heller, Ágnes. *Sociología de la vida cotidiana*. Barcelona: Ediciones Península, 1977.
- Human Rights Watch - UNICEF. *Aprenderás a no llorar. Niños combatientes en Colombia*. Sara Franky Calvo, coordinación editorial versión en español. Bogotá: UNICEF - Oficina de Área para Colombia y Venezuela; Editorial Gente Nueva, 2004.
- Lawson, Louise y Kearns, Ade. “‘Community Empowerment’ in the Context of the Glasgow Housing Stock Transfer”. En *Urban Studies* Vol. 47, No 7 (2010). Taylor and Francis.
- Linton, Ralph. *Cultura y personalidad*. Mexico D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1945.
- López de la Roche, Fabio Enrique. “La reinserción como construcción de una nueva forma de relación social”. En *Revista Historia Crítica*, Universidad de los Andes. (1993). Disponible en: http://historiacritica.uniandes.edu.co/datos/pdf/descargar.php?f=../data/H_Critica_07/04_H_Critica_07.pdf
- Lyons, Michal y Smuts, Carin. “Community Agency in the New South Africa: A Comparative Approach”. En *Urban Studies*, Vol. 36, No. 12 (1999). Taylor and Francis.
- Medina Arbeláez, Camila. “No porque seas paraco o seas guerrillero tienes que ser un animal”. *Procesos de socialización en FARC-EP, ELN y Grupos Paramilitares (1996 – 2006)*. Bogotá: Uniandes – Ceso, Departamento de Ciencia Política, 2009.
- Ministerio del Interior y de Justicia - Compiladores: Contreras Rolón, T.; Jaramillo de Botero, M.; Picón Amaya, A. *La Política de Reincorporación a la Vida Civil (2003 – 2006), Una Mirada Institucional*. Bogotá: Presidencia de la República, 2006. Disponible en: www.verdadabierta.com/.../10-desmovilizacin-y-desarme?...vida-civil-ministerio-del-interior –
- Observatorio de procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración (ODDR) – Universidad Nacional de Colombia. *Formas Organizativas y Asociativas de Desmovilizados en Bogotá 2003 – 2009*. Bogotá D.C., abril de 2011. Disponible en: http://www.observatorioddrr.unal.edu.co/productos_academicos/foad_bogota_19-05_2011.pdf
- Ortner, Sherry. “Theory in Anthropology since the Sixties”. En *Culture/Power/History. A reader in Contemporary Social Theory*. Nicholas B. Dirks, Geoff Eley y Sherry B. Ortner, editores. Princeton: Princeton University Press, 1994.
- Orville G., Brim. “Socialización de adultos”. En *Enciclopedia internacional de las ciencias sociales* Tomo 10. Sills, David L., director. Madrid: Aguilar. 1977.
- Palacios, Marco y Safford, Frank. *Colombia: país fragmentado, sociedad dividida*. Bogotá: Editorial Norma, 2002.

- Palacios, Marco. *Entre la legitimidad y la violencia: Colombia 1875 – 1994*. Segunda edición. Bogotá: Editorial Norma, 2003.
- Park, Robert E. “The City: Suggestions for the Investigation of Human Behavior in the City Environment”. En *American Journal of Sociology*, Vol. 20, No. 5 (1915). The University of Chicago Press. Disponible en: <http://www.jstor.org/stable/2763406>.
- Pécaut, Daniel (1996). “Reflexiones sobre la violencia en Colombia”. En *Violencia, guerra y paz. Una mirada desde las ciencias humanas*. Papacchini, Angelo; Restrepo Henao, Dario; Estrada Ospina, Victor, editores. Universidad del Valle, sin año.
- Peñate, Andrés. “El sendero estratégico del ELN: del idealismo guevarista al clientelismo armado”. En Deas, Malcom, Llorente, Maria Victoria Uribe. *Reconocer la guerra para construir la paz*. Bogotá: CEREC, Ediciones Uniandes, 1999.
- Ramírez Kuri, Patricia. “Espacio local y diferenciación social en la ciudad de México”. En *Revista Mexicana de Sociología*, Vol. 69, No. 4 (Oct. - Dic., 2007). Disponible en: <http://www.jstor.org/stable/20454313>.
- Rangel Suárez, Alfredo. “Las FARC-EP: una mirada actual”. En Deas, Malcom, Llorente, María Victoria. *Reconocer la guerra para construir la paz*. Bogotá: CEREC, Ediciones Uniandes, 1999.
- Reyes Posada, Alejandro. *Guerreros y campesinos: el despojo de la tierra en Colombia*. Bogotá: Editorial Norma / Fescol, 2009.
- Richani, Nazih. *Sistemas de Guerra. La economía política del conflicto en Colombia*. Traducido por María Mercedes Moreno y María Victoria Mejía. Bogotá: Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI); Editorial Planeta, 2003.
- Rivas, Angela; Méndez, María Lucía y Arias, Gerson. “De excombatientes a ciudadanos: luces y sombras de los nuevos planes de desmovilización y reintegración”. *Boletín Siguiendo el conflicto: hechos y análisis*, Fundación Ideas para la Paz (FIP), No 47, (Febrero 2007).
- Rodríguez Urrego, Marcela. “La reinserción”. En *Repertorios Interpretativos de desmovilizados en torno a la política y lo político. Entre la política y el mercenarismo*. Tesis de maestría en investigación psicosocial. Bogotá: Universidad de los Andes, 2008.
- Safa Barraza, Patricia y Ramírez Sáiz, Juan Manuel. *Metrópolis, asociaciones vecinales y megaproyectos urbanos. El caso de Jardines del Sol y La Ciudadela en Zapopan*. Guadalajara: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), 2010.
- Safa Barraza, Patricia. “El estudio de vecindarios y comunidades en las grandes ciudades. Una tradición antropológica”. En *Espiral, estudios sobre Estado y Sociedad*, Vol. 1, No. 2 (enero – abril de 1995). Universidad de Guadalajara - Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.

- Safa Barraza, Patricia. *Vecinos y vecindarios en la Ciudad de México. Un estudio sobre la construcción de las identidades vecinales en Coyoacán, D.F.*. México: CIESAS: Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa: Miguel Angel Porrúa, 1998.
- Sahlins, Marshall. “Dos o tres cosas que sé acerca del concepto de cultura”. En *Revista Colombiana de Antropología*, Vol. 37 (2001). ICANH.
- Said, Edward W. *Orientalismo*. Traducción de María Luisa Fuentes Barcelona, España: De Bolsillo, 1978.
- Sampson, Anthony (1989). “Reflexiones sobre la violencia, la guerra y la paz”. En *Violencia, guerra y paz. Una mirada desde las ciencias humanas*. Papacchini, Angelo; Restrepo Henao, Dario; Estrada Ospina, Victor, editores. Universidad del Valle, sin año.
- Sánchez, Gonzalo. *Guerras, memoria e historia*. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), 2003.
- Schwartz, Howard y Jacobs, Jerry. *Sociología Cualitativa. Método para la reconstrucción de la realidad*. México, D. F.: Editorial Trillas, 1984.
- Scott, Joan. “Experiencia”. En *La ventana*, No. 13 (2001). Traducción de Moisés Silva. Disponible en: <http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/ppperiod/laventan/Ventana13/ventana13-2.pdf>
- Sewell, William. “A theory of structure: Duality, agency and transformation”. En *American Journal of Sociology*, Vol. 98 (Julio, 1992).
- Simmel, Georg. “La metrópolis y la vida mental”. En *Bifurcaciones* [online]. No. 4, (primavera 2005). Disponible en: www.bifurcaciones.cl/004/reserva.htm.
- Springer, Natalia. *Desactivar la guerra, alternativas audaces para consolidar la paz*. Colombia: Aguilar, 2005.
- Tarrow, Sidney. *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Traducido por Francisco Muñoz de Bustillo. Madrid: Alianza Editorial, 1997.
- Theidon, Kimberly y Betancourt, Paola Andrea. “Transiciones conflictivas: Combatientes desmovilizados en Colombia”. En *Revista Análisis político*, No. 58 (2006).
- Trouillot, Michael-Rolph. *Silencing the Past: Power and the Production of History*. Boston: Bacon Press, 2002.
- Trouillot, Michel-Rolph. *Global Transformations: anthropology and the modern world*. New York: Houndmills, England, 2003.
- Uribe Alarcón, María Victoria. *Antropología de la inhumanidad: un ensayo interpretativo sobre el terror en Colombia*. Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2004.
- Varela, Daniel. *Cuando el intervenido interpela la intervención. Excombatientes de grupos armados ilegales en proceso de “re-integración*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, sin año. Disponible en:

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:0Gv2PPEEMGoJ:congresocienciapolitica.uniandes.edu.co/pdf/descargar.php%3Ff%3D./data/LINEA%25206%2520Movimientos%2520Sociales%2520Reconocimientos%2520y%2520Diversidades/MESA%25202%2520No%2520por%2520que%2520seas%2520paraco%2520o%2520guerrillero/03_Valera%2520Daniel%2520Linea%25206%2520Mesa%25202.pdf+Cua+no+el+intervenido+interpela+la+intervenci%C3%B3n.+Excombatientes+de+grupos+armados+ilegales+en+proceso+de+%E2%80%9CReintegraci%C3%B3n&hl=es&gl=co&pid=bl&srcid=ADGEESgMW7AMLhsjdofTwurcqmWW2LfFPfz9zS2LODkCvLzOCHG7AQNdofBj-tpKCNS7YHOGM2jGF-NoJU7g_EV8ny_ETmpJ2w0ZyX4Ej3F7EXOyCo9kytvwrh_AG07WB4Lc364QzEr&sig=AHIEtbSqIZMk5K1qyODR6rYtikmBHDNrOQ

Villarraga Sarmiento, Álvaro. "Procesos de paz, reinserción y crisis humanitaria". En *La reinserción en Colombia: experiencias, crisis humanitaria y política pública*. Álvaro Villarraga Sarmiento, editor. Bogotá: Fundación Cultura Democrática (Fucude) y Unión Temporal Acción Humanitaria para la Paz (Asopropaz), 2006.

Weiss Bar-Yosef, Rivka. "Desocialization and Resocialization: The Adjustment Process of Immigrants". En *International Migration Review*, Vol. 2, No. 3 (1968). The Center for Migration Studies of New York, Inc. Disponible en: <http://www.jstor.org/stable/3002620>

Wills, María Emma. "Mujeres en armas: ¿avance ciudadano o subyugación femenina?" En *Revista Análisis Político* Vol. No. 54, (2005).

Wirth, Louis. "El urbanismo como modo de vida". Tomado de *The American Journal of Sociology*, vol. 44, julio de 1938, traducción realizada por Victor Sigal, publicada por Ediciones 3 (Buenos Aires, 1962). En *bifurcaciones* [online]. No. 2 (otoño 2005). Disponible en: www.bifurcaciones.cl/002/reserva.htm.

ANEXOS

ANEXO 1: ÍNDICE DE SIGLAS

ACR: Alta Consejería para la Reintegración de personas y grupos alzados en armas.

ADO: Autodefensa Obrera

ANAPO: Alianza Nacional Popular

ASOMUPAZ: Asociación de Mujeres por la Paz

AUC: Autodefensas Unidas de Colombia.

BACRIM: Bandas Criminales

BCB: Autodefensas Campesinas Bloque Central Bolívar

CODA: Comité Operativo para la Dejación de las Armas

CRNR: Consejería para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación

CRS: Corriente de Renovación Socialista

DDR: Desmovilización, Desarme y Reintegración

ELN: Ejército de Liberación Nacional.

EPL: Ejército Popular de Liberación.

FARC-EP: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejercito del Pueblo.

FFG: Frente Francisco Garnica

ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

JAC: Junta de Acción Comunal

M – 19: Movimiento 19 de Abril

MAPAZ: Modelo de Atención Psicosocial

MAPP/OEA: Misión para el Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, Organización de Estados Americanos

MAQL: Movimiento Armado Quintín Lame

MIR-COAR: Movimiento Independiente Revolucionario - Comandos Armados

MIR-Patria Libre: Movimiento de Integración Revolucionario – Patria Libre

MOIR: Movimiento Obrero Independiente Revolucionario

OACP: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

OEA: Organización de Estados Americanos

PAHD: Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado

PAPDRB: Programa de Atención al Proceso Desmovilización y Reintegración en Bogotá

PRSE: Política Nacional de Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas

PRT: Partido Revolucionario de los Trabajadores

PRVC: Programa de Reincorporación a la Vida Civil

SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje

UP: Unión Patriótica

ANEXO 2: LISTA DE ENTREVISTAS

Nota: Todas las entrevistas pueden ser escuchadas en los archivos de audio anexos.

Entrevista a “Doña Carmen” Desmovilizada del ELN No 001. Realizada el 17 de abril de 2011.

Entrevista a Gestor de Paz y desmovilizado de las FARC-EP No 002. Realizada el 24 de abril de 2011.

Entrevista a desmovilizada de las FARC-EP No 003. Realizada el 8 de mayo de 2011.

Entrevista a desmovilizada de las FARC-EP No 004. Realizada el 28 de mayo de 2011.

Entrevista desmovilizada del ELN No 005. Realizada el 23 de mayo de 2011.

Entrevista a Trabajador Psicosocial de la ACR No 006. Realizada el 19 de agosto de 2011.

Entrevista a miliciano desmovilizado de las FARC-EP No 007. Realizada el 8 de junio de 2011.

Entrevista a miliciano desmovilizado de las FARC-EP No 008. Realizada el 22 de julio de 2011.

Entrevista a residente de la ciudadela Santa Rosa No 009. Realizada el 8 de julio de 2011.

Entrevista a desmovilizado del Bloque Centauros AUC No 010. Realizada el 28 de agosto de 2011.

Entrevista a Gerente del Centro de Servicios Rafael Uribe Uribe de la ACR No 011. Realizada el 19 de agosto de 2011.